

30

TRABAJOS DE GRADO CIDER

ISBN: 978-958-774-135-3

VISIÓN DE FUTURO
INDÍGENA Y SU INCIDENCIA
EN EL DESARROLLO EN
COLOMBIA

EL CASO DE LAS COMUNIDADES INGA
Y KAMËNTZA (PUTUMAYO) ANTE LA
INICIATIVA PARA LA INTEGRACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL
SURAMERICANA (IIRSA)

Ana María Chaparro

 Universidad de
los Andes

Centro Interdisciplinario de
Estudios sobre Desarrollo - Cider

Visión de futuro indígena y su incidencia en el desarrollo en Colombia

El caso de las comunidades inga y kamëntza
(Putumayo) ante la Iniciativa para
la Integración de la Infraestructura Regional
Suramericana (Iirsa)

Chaparro Toro, Ana María

Visión de futuro indígena y su incidencia en el desarrollo en Colombia. El caso de las comunidades inga y kamëntza (Putumayo) ante la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (Iirsa) / Ana María Chaparro. – Bogotá: Universidad de los Andes, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider), Ediciones Uniandes, 2015.

157 páginas; on line – (Trabajos de grado Cider; 30)

ISBN 978-958-774-135-3

1. Desarrollo económico y social – Investigaciones – Putumayo (Colombia) 2. Desarrollo humano – Investigaciones – Putumayo (Colombia) 3. Comunidades indígenas – Investigaciones – Putumayo (Colombia) 4. Ingas – Condiciones socioeconómicas – Investigaciones 5. Kamentzá – Condiciones socioeconómicas – Investigaciones I. Universidad de los Andes (Colombia). Cider II. Tít.

CDD 338.986163

SBUA

Primera edición: junio del 2015

© Ana María Chaparro Toro

© Universidad de los Andes, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider)

Ediciones Uniandes
Calle 19 n.º 3-10, oficina 1401
Bogotá, D. C., Colombia
Teléfono: 3394949, ext. 2133
<http://ediciones.uniandes.edu.co>
infeduni@uniandes.edu.co

ISBN on line: 978-958-774-135-3

Corrección de estilo: Martha Méndez
Diagramación interior y de cubierta: David Reyes

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la Editorial.

Visión de futuro indígena y su incidencia en el desarrollo en Colombia

El caso de las comunidades inga y kamëntza
(Putumayo) ante la Iniciativa para
la Integración de la Infraestructura Regional
Suramericana (Iirsa)

ANA MARÍA CHAPARRO

Director del Cider
Óscar Armando Pardo Aragón

Autora
Ana María Chaparro

Directora del trabajo de grado
Maricel Piniero

Lectores
Carlos Zorro Sánchez
Roberto Pineda Camacho

Gestora de Comunicaciones del Cider
Susana Londoño

PERFIL ACADÉMICO Y PROFESIONAL DE LA AUTORA

Politóloga, especialista en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos para el Desarrollo y en Desarrollo Local y Regional, y magíster en Estudios Interdisciplinarios sobre el Desarrollo, con conocimiento de modelos teóricos para el análisis de la realidad política nacional e internacional con una óptica crítica y transdisciplinar. Tiene experiencia en el diseño e implementación de sistemas integrados de planeación, monitoreo, evaluación y sistematización de programas y proyectos de desarrollo. Se interesa especialmente en el análisis y la aplicación de enfoques de restitución de derechos humanos y étnicos, de desarrollo sostenible y de género al estudio y a la práctica política.

RESUMEN

A partir de una visión unilineal y evolutiva del desarrollo, entendido como crecimiento económico, el Gobierno colombiano se alineó desde principios del siglo XXI con la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (Iirsa). La construcción de la variante San Francisco-Mocoa, en el marco del corredor vial Pasto-Mocoa, forma parte de esta iniciativa de integración física para el desarrollo económico. Esta investigación cualitativa, que integra la investigación narrativa y el estudio de caso, analiza la capacidad de las comunidades indígenas para articular su visión de futuro con la visión de desarrollo planteada por la comunidad internacional y la política pública nacional, caracteriza su percepción, su visión de futuro y los procesos de participación política que despliegan en un territorio considerado ancestral.

Palabras clave: Iirsa, comunidades indígenas, visión de futuro, participación política.

ABSTRACT

Since the beginning of the twenty first century, and considering a linear and evolutionary vision of development —understood as economic growth—, the Colombian government has aligned with the Initiative for the Integration of the Regional Infrastructure of South America (Iirsa). The construction of the San Francisco-Mocoa main road, as part of the Pasto-Mocoa corridor, has been included in this initiative for the physical integration of South America. This qualitative research, which integrates narrative and case study research, analyses the agency of indigenous communities to articulate their vision for the future with the development strategies raised by the international community and the national public policy, and the political processes that unfold in the protection of a territory considered ancestral.

Keywords: Iirsa, indigenous communities, vision for the future, political participation.

CONTENIDO

LISTA DE SIGLAS	15
LISTA DE FIGURAS	17
INTRODUCCIÓN	19
1. REFERENTES DE CONTEXTO: LA INICIATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL SURAMERICANA (HIRSA) EN EL PUTUMAYO	25
1.1 INTEGRACIÓN SURAMERICANA: UNA PROPUESTA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA REGIÓN	26
1.2 UN EJE DE SINERGIA, INTEGRACIÓN Y DESARROLLO PARA EL AMAZONAS	29
1.3 “TRAMOS” PARA LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO	33
1.4 ZONA CLAVE EN TÉRMINOS SOCIALES, POLÍTICOS Y ECONÓMICOS	36
1.5 LA VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCHOA Y EL DESARROLLO AMBIENTAL DEL TERRITORIO	41
1.6 UN TERRITORIO “INHABITADO”	45
2. REFERENTES CONCEPTUALES: UNA CARTOGRAFÍA DE IDEAS TEÓRICAS SOBRE DECOLONIALIDAD, MOVIMIENTOS SOCIALES, IDENTIDAD Y PODER	49
2.1 EL GIRO DECOLONIAL: UN RECONOCIMIENTO A LAS FORMAS DE SABER Y PENSAR DE GRUPOS SUBALTERNIZADOS	51

2.2	LA CONSTRUCCIÓN DE PERCEPCIONES, IDENTIDADES Y DISCURSOS COLECTIVOS	55
2.3	LOS “NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES” INDÍGENAS	59
2.4	REIVINDICACIÓN IDENTITARIA EN LOS ESPACIOS Y EL TERRITORIO	62
2.5	LAS SUBJETIVIDADES EN LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES	65
2.6	CLAVES FINALES SOBRE PODER Y AGENCIA	69
3.	REFERENTES METODOLÓGICOS: UNA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA SOBRE LA DIMENSIÓN HUMANA DEL DESARROLLO	73
4.	MEGAPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA: LA REPARICIÓN DEL DISCURSO ESPACIAL Y TERRITORIAL DE LA CONQUISTA EN LA AMAZONÍA COLOMBIANA	81
4.1	INFRAESTRUCTURA PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN AMÉRICA LATINA	82
4.2	UNA PROPUESTA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA PARA COLOMBIA	85
4.3	LA NEGACIÓN DE LAS DINÁMICAS LOCALES EN PROYECTOS DE DESARROLLO	89
5.	DIMENSIÓN HUMANA DEL DESARROLLO: VISIÓN DE FUTURO INDÍGENA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO EN COLOMBIA	91
5.1	DINÁMICAS TERRITORIALES DE KAMĚNTZA E INGAS EN EL VALLE DEL SIBUNDOY	92
5.2	KAMĚNTZA E INGAS: ENTRE DOS VISIONES DE FUTURO	97
5.2.1	Percepción actual ante la variante San Francisco-Mocoa	99
5.2.2	Visión 1. Consolidación territorial y ambiental desde lo indígena	104

5.2.3	Visión 2. La lógica de adaptación y competitividad	109
5.2.4	El desarrollo deseado	110
5.3	LA DEFENSA DEL TERRITORIO: ACCIONES SIMBÓLICAS, POLÍTICAS, JURÍDICAS	113
5.3.1	Acciones simbólicas	115
5.3.2	Acciones educativas	115
5.3.3	Movilizaciones	116
5.3.4	Acciones jurídicas	118
5.3.5	Alianzas y cooperantes	121
5.3.6	Antihéroes de la acción colectiva: ¿cómo dirimir los disensos?	122
5.3.7	Dos dirigencias. Autoridades políticas versus líderes indígenas	123
5.3.8	Autoridades políticas y relación con el Estado	126
5.3.9	Subjetividades en el proceso de participación política	129
5.3.10	Tácticas de sujeción: ¿cómo dirimir los disensos?	130
5.3.11	Resistencia como complicidad subversiva	131
	A MODO DE CONCLUSIÓN: EL DESARROLLO SE HACE Y PUNTO, AUNQUE SEA DESDE LA FRONTERA	133
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	139
	ANEXO 1. PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	151
	ANEXO 2. ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS A AUTORIDADES POLÍTICAS Y LÍDERES DE COMUNIDADES INDÍGENAS	153
	ANEXO 3. DISCUSIÓN EN GRUPOS FOCALES	155

LISTA DE SIGLAS

BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CATI	Comité Asesor Técnico Independiente del Proyecto
Corpoamazonía	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía
CDB	Convenio de Diversidad Biológica
Cosiplan	Consejo de Infraestructura y Planeamiento
EAR	Evaluación Ambiental Regional de la vía Pasto-Mocoa
EIA	Estudio de Impacto Ambiental
EID	Ejes de Integración y Desarrollo
Iirsa	Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana
Incoder	Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural
Incora	Instituto Colombiano de Reforma Agraria
Invías	Instituto Nacional de Vías
GPS	Global Positioning System
MICI	Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación
ONIC	Organización Nacional Indígena de Colombia
PBMAS	Plan Básico de Manejo Ambiental y Social para la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa
PMASIS	Plan de Manejo Ambiental y Social Integral y Sostenible
SGP	Sistema General de Participaciones
TCA	Tratado de Cooperación Amazónica
Unasur	Unión de Naciones Suramericanas

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.	Ejes de Integración y Desarrollo en el marco de la Iirsa	30
Figura 2.	Eje del Amazonas	32
Figura 3.	Variante San Francisco-Mocoa. Vías proyectada y antigua	35
Figura 4.	Intereses económicos en la región del piedemonte Andino-Amazónico	40
Figura 5.	Territorio ancestral inga-kamëntza	95
Figura 6.	Conflictos territoriales en el valle del Sibundoy	98
Figura 7.	Territorio ancestral indígena en el valle del Sibundoy	106
Figura 8.	El <i>desarrollo</i> deseado	111

INTRODUCCIÓN

*Más vale para la civilización de estos indios que haya
buen camino que sermones.*

Fray Estanislao de Las Corts¹

Megadiversa en términos culturales y biológicos, han sido muchas las dinámicas tanto inter como extraamazónicas que han construido la Amazonía colombiana que hoy conocemos y estudiamos. Esta tesis está inspirada en un fervor académico particular: el de analizar los diferentes discursos que giran en torno al *desarrollo* de esta parte del país y las formas en que sus habitantes, en especial las comunidades indígenas², se han organizado socialmente y han participado políticamente para apropiarse de un territorio que les pertenece.

A lo largo de las tres olas de cambio en la Amazonía (el encuentro colonial, la expansión capitalista y el proceso de globalización [Santos Granero, 1996]), esta región se ha constituido como una zona clave en términos económicos, ecosistémicos y socioculturales, no solo a nivel nacional, sino, y cada vez con más ímpetu, en un esquema

¹ Cartas de octubre 6 y 30 de 1908 (citadas por Vilanova 1947, I: 225-226), en Bonilla, 2006, p. 146.

² Esta investigación no pretende invisibilizar las percepciones, los intereses y la participación política de los campesinos/colonos de la región del piedemonte Andino-Amazónico. Se reconoce que es un grupo social que continuamente está siendo invisibilizado y marginalizado.

mundial caracterizado por una economía que continúa integrándose a ritmos acelerados. En este contexto, y a partir de una visión unilineal y evolutiva del desarrollo, entendido como crecimiento económico, el Gobierno colombiano se alineó desde principios del siglo XXI con la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), la cual creó un eje de integración y desarrollo que permite avanzar hacia una concepción regional del espacio suramericano a partir de una modernización de la infraestructura física, al ser uno de sus propósitos conectar los océanos Atlántico y Pacífico a la altura del río Amazonas.

La construcción de la variante San Francisco-Mocoa, en el marco del corredor vial Pasto-Mocoa, forma parte de esta iniciativa de integración física para el desarrollo económico. Según la posición oficial, la precaria conectividad de la región del piedemonte Andino-Amazónico ha resultado en su bajo nivel de competitividad, débil presencia institucional y altos índices de violencia y actividades económicas ilegales, de modo que el principal objetivo es integrar, en términos comerciales, a los departamentos de Nariño, Putumayo y Amazonas con Bogotá y los países vecinos. La variante está siendo financiada con recursos de crédito externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco de la estrategia del Banco para el país, orientada a *dinamizar la economía colombiana*. Esta región aún se considera un territorio inhabitado, asociado con múltiples olas de riqueza (quina, caucho, especies maderables), y “ahora se anuncia que los ejes multimodales que la cruzarán aumentarán el transporte de productos lo cual beneficiaría a sus habitantes” (Flórez, 2007, p. 52)³.

Ahora bien, este proyecto presenta características especiales en términos ecológicos y culturales. Descenderá desde las montañas

³ La atención puesta hoy en día en la biodiversidad y los servicios ecosistémicos ha renovado la idea de la Amazonía como *El Dorado*, debido precisamente a que tal riqueza biológica y cultural puede continuamente ser saqueada (Palacio Castañeda, 2007).

de los Andes hacia la llanura amazónica, atravesando de este a oeste el piedemonte Andino-Amazónico, una de las áreas más estratégicas de Colombia en términos ecosistémicos. La diversidad biológica de la región se ha conservado en paralelo con su diversidad cultural. Diversas comunidades indígenas, entre las cuales se resaltan la kamëntza y la inga, forman parte de las dinámicas socioculturales de la región.

Al tener como contexto un proyecto de gran envergadura que implica no solo grandes inversiones de capital, sino el control de extensiones territoriales y poblaciones, un proyecto que creará un entorno radicalmente nuevo⁴, esta propuesta de investigación gira en torno a la siguiente pregunta: *¿Cuál es la capacidad de las comunidades indígenas para incidir y articular su visión de futuro con la visión de desarrollo planteada por la comunidad internacional y la política pública nacional?* Como objetivo general se busca, entonces, analizar la capacidad de las comunidades indígenas para articular su visión de futuro con la visión de desarrollo planteada por la comunidad internacional y la política pública nacional, tratando de caracterizar tanto la percepción de las comunidades indígenas kamëntza e inga ante la construcción de la variante San Francisco-Mocoa como parte de la Iirsa, como la visión de futuro que dichas comunidades tienen de un territorio que consideran ancestral. Así mismo, se busca explorar si esta visión de futuro se articula con la acción política adelantada por parte de las comunidades indígenas como reacción ante tal megaproyecto, e identificar los mecanismos usados por dichas comunidades para tal efecto.

La presente es una investigación cualitativa que integra dos estrategias: la *investigación narrativa*, que se construye a partir de las experiencias de las comunidades indígenas expresadas en los *relatos* vividos y contados por autoridades y líderes en historias de vida, entrevistas, discusiones de grupo y documentos escritos por las mismas

⁴ Proyecto que, según Serje (2010, p. 9), forma parte del “impulso de destrucción creativa que, como lo señaló, Schumpeter caracteriza los procesos de modernización y que es la piedra angular de la tragedia del desarrollo”.

comunidades u otros actores relevantes; y el *estudio de caso* contemporáneo, que evalúa la percepción, las formas de organización y de participación política de las comunidades indígenas kamëntza e inga enfrentadas a un megaproyecto de desarrollo como el mencionado. Se parte del supuesto según el cual no existen hechos *objetivos*, sino interpretaciones, y el propósito de este trabajo es traducir lo observado al plano académico a partir de unos lentes teóricos específicos. Diversas corrientes de pensamiento (como las teorías marxistas heterodoxas, los enfoques poscolonialistas, posestructuralistas y posdesarrollistas, los debates latinoamericanos sobre modernidad/ posmodernidad, los estudios culturales y subalternos, los estudios foucaultianos y los feminismos de frontera) permiten acercarnos a conceptos como “percepciones”, “discursos”, “identidades colectivas”, “movimientos sociales”, “subjetividades” y “poder”. Estos acercamientos *holísticos* de largo alcance espacio-temporal sitúan el estudio de la experiencia humana, en este caso enfrentada a megaproyectos de desarrollo, en un lugar privilegiado y prioritario.

La Iirsa está enmarcada en el modelo económico actual, el cual ha implicado un reajuste espacial caracterizado por la organización de nuevas divisiones territoriales relacionadas con la acumulación de capital y el trabajo, y por la penetración en estructuras sociales preexistentes de las relaciones sociales capitalistas. Aunque esta iniciativa no tiene una temporalidad definida, está desencadenando procesos que incidirán durante las próximas décadas en los grupos poblacionales del subcontinente latinoamericano. En la formulación de iniciativas de desarrollo regional como esta, la percepción de las comunidades y culturas se continúa invisibilizando ante las *bondades* de los diferentes proyectos de desarrollo convencional.

Ahora bien, no se puede desconocer que los grupos indígenas están constantemente resistiendo y reinterpretando las prácticas cotidianas desde su posición de subalternos. Esto desde sus visiones de futuro, sus formas de organización y participación política, y sus disensos potenciadores de nuevas discusiones y elementos de defensa o reivindicación política, económica y cultural. Su resistencia ante el

Estado no implica una lucha de suma cero, ni solo se limita a obtener beneficios materiales o políticos. Es la lucha por la apropiación de símbolos culturales, por otorgar sentido y presencia a la historia local, y por crear formas alternativas de racionalidad económica, política y ética, ubicadas en la intersección entre lo considerado tradicional y lo moderno.

Este trabajo de investigación está compuesto por cinco capítulos: tres que proponen referentes contextuales, metodológicos y conceptuales, y dos que centran su atención en un análisis del contexto de la construcción de la variante San Francisco-Mocoa en el marco de la Iirsa, y las percepciones y procesos de participación política de las comunidades indígenas afectadas. En un primer momento, se presenta el entorno radicalmente nuevo que plantea la mencionada construcción, para avanzar con posterioridad en un entendimiento de la capacidad de las comunidades indígenas para incidir y articular su visión de futuro con la visión de desarrollo planteada por la comunidad internacional y la política pública nacional.

REFERENTES DE CONTEXTO:
LA INICIATIVA PARA LA INTEGRACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL
SURAMERICANA (IIRSA) EN EL PUTUMAYO

El Valle será pronto un lugar de gran importancia para la Nación y que, si estuvo escondido hasta hoy al comercio del mundo, ha llegado la hora de que se ponga en contacto con la civilización y se mezcle con su corriente.

Comisión del Congreso de la República¹

La Amazonía es una construcción discursiva que se ha ido constituyendo en diferentes momentos históricos y a partir de diferentes dinámicas tanto inter como extraamazónicas. A lo largo de las tres olas de cambio en la Amazonía (el encuentro colonial, la expansión capitalista y el proceso de globalización [Santos Granero, 1996]) esta región se ha constituido como una zona clave en términos económicos y ecosistémicos, no solo a nivel nacional, sino, y cada vez con más ímpetu, en el nuevo esquema mundial caracterizado por una economía que continúa integrándose a ritmos acelerados. En este contexto, el Gobierno colombiano se ha alineado con la Iirsa, cuyo propósito es conectar los océanos Atlántico y Pacífico a la altura del río Amazonas. La construcción de la variante San Francisco-Mocoa, en el marco del

¹ Informe de la comisión encargada de estudiar el proyecto de la Ley 1911 de 1951, Bogotá, noviembre 13 de 1911. En Bonilla, 2006, p. 171.

corredor vial Pasto-Mocoa, forma parte de esta iniciativa de integración física para el desarrollo económico. Este proyecto presenta características polémicas en términos geopolíticos, económicos, ecológicos y culturales. Las comunidades indígenas amazónicas y la selva, lejos de ser expresiones del mundo natural, deben comprenderse en el marco de la inserción de la Amazonía en la economía-mundo.

1.1 INTEGRACIÓN SURAMERICANA: UNA PROPUESTA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA REGIÓN

La Iirsa, luego de ser planteada en la Cumbre de las Américas en 1994, fue relanzada en un acuerdo político que quedó plasmado en el Primer Encuentro de Presidentes de América del Sur, llevado a cabo en el 2000 en Brasilia, Brasil, en el marco de la conmemoración de los quinientos años de la conquista de ese país. Los doce mandatarios de los países independientes de esta región del mundo participaron de un evento histórico y pionero, que buscaba estimular la organización del espacio suramericano a partir del desarrollo de un área singular de integración y de desarrollo económico y social compartido, teniendo en cuenta “la contigüidad geográfica, la identidad cultural, y los valores compartidos de los países vecinos suramericanos [y su complementación] con el desarrollo de los procesos sectoriales necesarios para optimizar la competitividad y sostenibilidad de [las] cadena[s] logísticas)” (Flórez, 2007, p. 34).

En términos geopolíticos, en el relanzamiento de la Iirsa se vislumbró una expansión del liderazgo de Brasil por medio de proyectos de integración que están dirigidos a formar un *Brasil libre de amenazas regionales*. En este sentido, el discurso integracionista y progresista de la política exterior brasileña se basa en asegurar una zona de influencia fronteriza con los siguientes propósitos: 1) consolidar canales de comunicación y flujos comerciales que logren ubicar sus productos en

mercados fronterizos; 2) acceder a fuentes de energía para la extracción o la generación de electricidad; 3) ejercer un papel de liderazgo regional a partir de una imagen que presenta un país con estructura política sólida para la región y como un actor de relevancia internacional, y 4) lograr una seguridad tanto interna como externa a partir de sinergias del Gobierno con la empresa privada que determinan las políticas comerciales y diplomáticas del país. Estudios han señalado así que las empresas privadas brasileñas demuestran un amplio control de las diversas propuestas de integración —a partir de la modernización de la infraestructura física de la región— que los diferentes gobiernos de Brasil (presidencia de Fernando Henrique Cardoso, los dos gobiernos de Lula da Silva y la actual presidencia de Dilma Rouseff) han propuesto para la región suramericana (Arreaza Moreno, 2012)².

Ahora bien, la Iirsa irrumpió en el escenario regional en un momento de innovación institucional. Lo anterior se ve reflejado en el amplio consenso político en el que se fundamentó, así como en la propuesta de conceptualizar la integración regional como un espacio de cooperación y como un mecanismo para ganar influencia política y económica a nivel internacional. En el Comunicado de Brasilia, firmado por los mandatarios participantes en el evento del 2000, se expuso que “[las] fronteras suramericanas deben dejar de constituir un elemento de aislamiento y separación para tornarse en un eslabón de unión para la circulación de bienes y personas, conformándose así un espacio privilegiado de cooperación” (Comunicado de Brasilia, 2000). Lo anterior con el propósito de complementar la identidad regional con la modernización de un espacio económico ampliado, a partir de la convicción de que la integración física puede actuar como un catalizador de otras dimensiones de la integración regional. Es en este sentido que a partir de la Iirsa se buscó impulsar la integración y

² En términos históricos, la política exterior integracionista de Brasil de igual forma se enmarca en el contexto de la relación antigua y compleja de este país con la Amazonía colombiana a través del río Putumayo.

modernización de la infraestructura física bajo una concepción regional del espacio suramericano (BID-Intal, 2011).

Desde el 2000, la Iniciativa se ha enfocado en dos ámbitos de acción. Primero, el ordenamiento espacial del territorio suramericano, a partir de un reconocimiento de la realidad geopolítica y geoeconómica del continente, definiéndose ejes sinérgicos de integración y desarrollo económico (bajo la premisa de que el *recurso humano* es un factor fundamental en la construcción de futuro). En ese sentido, se han diseñado franjas de desarrollo concentradoras de flujos de comercio e inversión en función de los negocios y las cadenas productivas, con economías de escala para el consumo interno de la región o para la exportación a mercados globales. Segundo, un esfuerzo por generar una convergencia entre normas y mecanismos institucionales, removiéndose las que se consideran como barreras de orden regulatorio, legal, operativo e institucional que limitan el uso eficiente de la infraestructura existente. Estos procesos sectoriales de integración buscan “implementar instituciones *independientes de presiones políticas*, tanto de los gobiernos como de los actores afectados” (BID-Intal, 2011. Énfasis añadido) para impulsar en un futuro la creación de instituciones supranacionales que continúen apuntando a la competitividad regional.

En el marco de la Iirsa, los países suramericanos han tenido como prioridad la conformación de redes multimodales de transporte para una mejor articulación de las vías terrestres, fluviales, marítimas y aéreas, que faciliten el tránsito fronterizo de vehículos, mercancías y personas, y contribuyan a hacer más dinámico el comercio y las inversiones de capital en el conjunto de la región. La materialización de la Iirsa en cada país depende de la complementación y expansión de los proyectos de infraestructura de transporte existentes, así como de la identificación de nuevos proyectos, con capacidad de atracción de capitales extrarregionales —acá el sector privado desempeña un papel fundamental— y de generación de efectos multiplicadores intrarregionales (Comunicado de Brasilia, 2000).

Desde la Primera Reunión de los Presidentes de Suramérica en Brasilia se han llevado a cabo doce cumbres suramericanas, durante las cuales fue progresando la conformación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), cuyo tratado constitutivo se firmó en el 2008. En el marco de este mecanismo regional de concertación e integración se celebraron las últimas seis reuniones presidenciales. En la tercera reunión de Unasur (llevada a cabo en Quito, Ecuador, en el 2009) los presidentes suramericanos decidieron la creación del Consejo de Infraestructura y Planeamiento (Cosiplan) el cual, a su vez, decidió incluir a la Iirsa como su foro técnico en el tema de infraestructura para la integración.

1.2 UN EJE DE SINERGIA, INTEGRACIÓN Y DESARROLLO PARA EL AMAZONAS

La Iirsa se está concretando a partir de Ejes de Integración y Desarrollo (EID), dentro de los cuales se diseñan y construyen tramos que buscan unir los sectores productivos de los países de América del Sur en función de los negocios y las cadenas productivas, tanto para el consumo interno de la región como para la exportación a los mercados globales. Se trata de franjas multinacionales de territorio en donde se concentran zonas productivas, flujos comerciales, espacios naturales y asentamientos humanos.

Los principales criterios técnicos utilizados para el análisis del territorio en la conformación de estos ejes fueron la cobertura geográfica de los países y las regiones, los flujos económicos existentes, los flujos potenciales y la sostenibilidad ambiental y social del territorio. Se han identificado diez EID en el marco de Iirsa, los cuales constituyen diez áreas geográficas concretas de desarrollo económico del subcontinente.

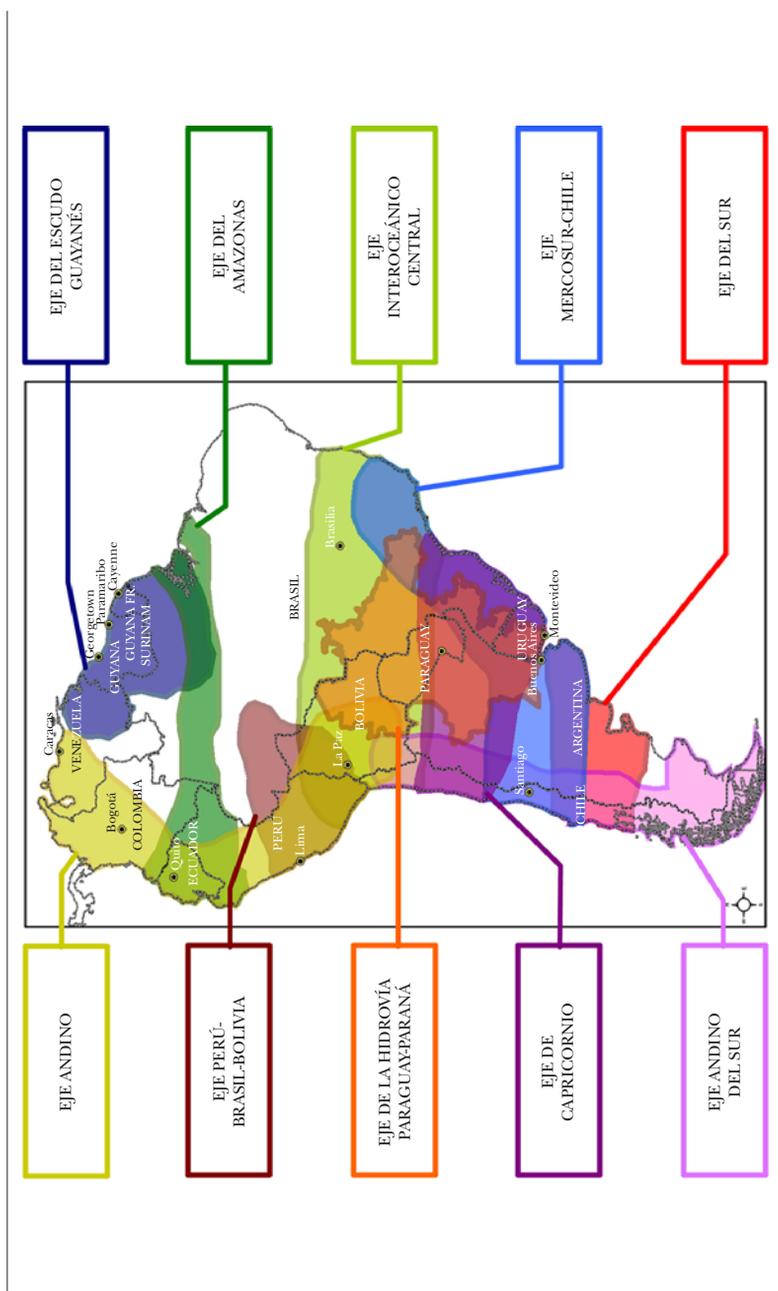


Figura 1. Ejes de Integración y Desarrollo en el marco de la lisa Fuente: BID-Intal, 2011.

Colombia se integra en la Iirsa en los EID Andino y Amazónico, a partir de los cuales se busca vincular al país con los principales centros urbanos de los cinco países andinos e interconectarlo con puertos fluviales del Atlántico en Brasil. En Colombia se han identificado veintisiete proyectos y programas de infraestructura en transporte vinculados directamente a la Iirsa: quince forman parte del eje Andino, tres exclusivamente del eje Amazónico y nueve son compartidos. De estos últimos doce, la mayoría están localizados en la región del piedemonte Andino-Amazónico, entre los departamentos de Putumayo y Nariño, lo cual convierte a estos dos departamentos en escenarios geopolíticos claves tanto en el presente como en el futuro cercano, además de ser regiones estratégicas para otras dinámicas nacionales.

Centrándonos en el Eje del Amazonas, este ha sido definido a través de la delimitación de una región a lo largo del sistema multimodal de transporte que ocupa las regiones amazónicas de Brasil, Perú, Colombia y la totalidad de Ecuador, y que vincula puertos del Pacífico como Buenaventura, en Colombia; Esmeraldas, en Ecuador, y Paita, en Perú, con los puertos brasileños de Manaus, Belém y Macapá. Su área de influencia es relativamente dinámica en términos socioeconómicos, por lo cual se propone la construcción de trece puertos, cinco aeropuertos, once carreteras y puentes, ocho vías de navegación y una red de electrificación³. La construcción, adecuación o mejoramiento de estas obras de infraestructura puede generar impactos biogeofísicos y socioeconómicos sobre su área de influencia, de modo que este es el eje de mayor sensibilidad ambiental y social.

³ Tradicionalmente se ha insistido en el desarrollo del eje como un corredor bioceánico, con el propósito de aprovechar el recurso hidrológico del Amazonas y los puertos ubicados tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Sin embargo, en la práctica, los movimientos comerciales son inexistentes por razones económicas. No obstante, el área de influencia de este eje representa un mercado de más de 61,5 millones de habitantes en un área extendida de aproximadamente 5,66 millones de km², con un PIB de aproximadamente USD 150.534,9 millones (Bara Neto, 2007).

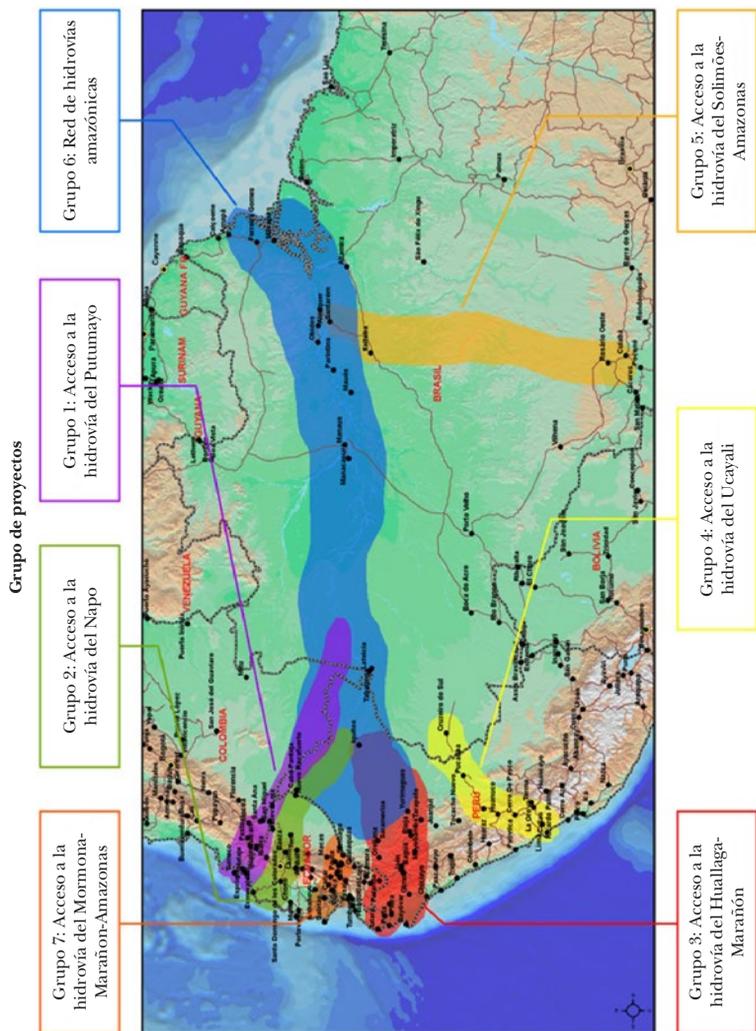


Figura 2. Eje del Amazonas

Fuente: Iirsa, 2008.

1.3 “TRAMOS” PARA LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO

En la región amazónica de Colombia, la Iirsa se materializa en el corredor intermodal Tumaco-Puerto Asís-Belém do Pará, por lo cual el proyecto Pasto-Mocoa, entre los departamentos de Nariño y Putumayo, es un proyecto “ancla”. Esta calificación proviene “del hecho de que [es] la solución para resolver el cuello de botella que representa para el transporte de carga pesada entre las costas del Atlántico y del Pacífico, y entre Ecuador y Colombia” (Flórez, 2007, p. 44). El principal objetivo del proyecto Pasto-Mocoa es el de integrar, en términos comerciales, los departamentos de Nariño, Putumayo y Amazonas con Bogotá y los países vecinos, acercando los principales centros de producción y consumo mediante la conexión transversal de las tres principales troncales: la Troncal de Occidente, o carretera Panamericana, la Troncal Central, o del Magdalena, y la futura Troncal Oriental, o Marginal de la Selva, y el Piedemonte Llanero.

La construcción de la variante San Francisco-Mocoa en el marco del corredor vial Pasto-Mocoa, ubicada entre estos dos municipios en el departamento del Putumayo (pero con influencia en los municipios de Colón, Santiago y Sibundoy), forma parte de esta iniciativa de integración física para el desarrollo económico de América del Sur⁴. El tramo actual fue construido a principios del siglo xx (fue terminado a propósito del conflicto con Perú), y tiene una longitud de 78 km y entre 4 y 5 m de ancho. Esta carretera es una vieja aspiración de los habitantes de la región⁵, pues la vía actual es muy rudimentaria y se

⁴ El corredor vial Pasto-Mocoa consta de cuatro tramos: (i) Pasto-Encano (19,5 km); (ii) Encano-Santiago (27,5 km); (iii) Santiago-San Francisco (20 km); y (iv) San Francisco-Mocoa (78 km).

⁵ Como ejemplo de esto se resalta que en el 2004 más de 3000 habitantes de los trece municipios de Putumayo participaron en manifestaciones que tenían como punto principal la ampliación y adecuación de la vía que de Mocoa conduce a Pasto.

mantiene en muy malas condiciones, ya que está localizada en un terreno inclinado y se caracteriza por la presencia de altas pendientes, curvas cerradas, sitios inestables, profundos abismos y un gran número de cruces de corrientes hídricas, lo cual la ha hecho merecedora del nombre de “el Trampolín de la Muerte”⁶. Para este tramo crítico, se ha propuesto como alternativa la construcción de una variante de 46,5 km que será financiada con recursos de crédito externo del BID, enmarcada dentro de la estrategia del BID para el país, orientada “[a]sentar las bases para reactivar y dinamizar la economía”⁷. En el contexto nacional, esta vía forma parte del Plan de Expansión de la Red Nacional de Carreteras.

Una de las políticas del BID ha sido apoyar de manera permanente el mejoramiento de la infraestructura de los países, como parte de una estrategia de fortalecimiento de la conectividad y la competitividad nacional. Colombia, por su parte, ha concertado diversas operaciones de crédito con este organismo multilateral, el cual a su vez ha acompañado al país no solo en términos financieros, sino también técnicamente, en el proceso de actualización de los diseños de ingeniería de este tipo de obras y en la elaboración de diversos estudios ambientales. Para la construcción de la variante se estima necesario un monto de

⁶ En conversaciones informales llevadas a cabo con líderes indígenas durante el primer viaje realizado al valle del Sibundoy se resaltó el hecho de que la vía actual está en mejor estado. Esta percepción se diluye una vez uno viaja por la carretera y ve que son solo tres líneas amarillas que dicen “Peligro” las que efectivamente separan los carros cargados de pasajeros, papas y plátanos de los precipicios que presenta la montaña. Los paisajes más asombrosos de Colombia contrastan, entonces, con la dinámica de competencia-cooperación que camiones, *jeeps*, carros y ambulancias protagonizan para poder pasar por tramos tan angostos que solamente un carro puede cruzar a la vez. De igual forma, las más preciosas cascadas, de todos los tamaños, contrastan con los diferentes avisos en la vía que auguran derrumbes, caídas y accidentes como los ya ocurridos, en los cuales son muchas las familias que han sido protagonistas.

⁷ Información tomada del texto *Corredor vial Pasto-Mocoa, variante San Francisco-Mocoa. Perfil de proyecto* (2006). Documento de trabajo suministrado por Amazon Conservation Team Colombia.

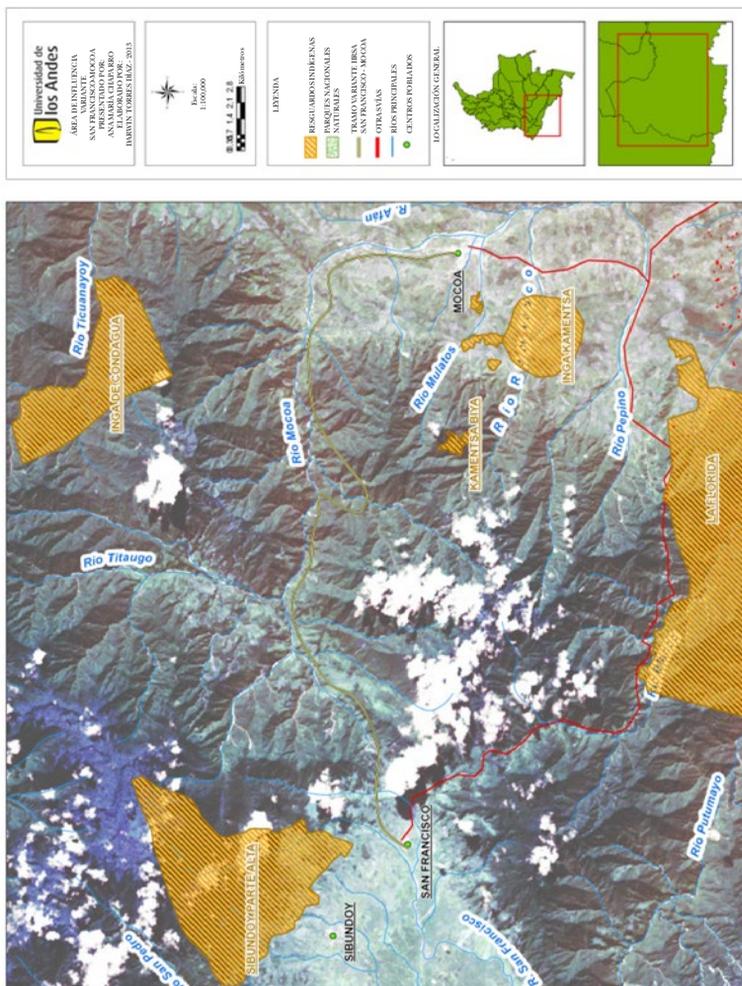


Figura 3. Variante San Francisco-Mocoa. Vías proyectada y antigua.

Fuente: Comunidades indígenas, elaboración de Darwin Torres, 2013.

USD 203 millones, los cuales se dividirán en dos operaciones de crédito (Conpes 3610 del 2009). La celebración de las operaciones de crédito público está en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Ministerio de Transporte. El Instituto Nacional de Vías (Invías), a través de la Gerencia de Grandes Proyectos, es el organismo ejecutor del proyecto.

En el 2011 se llevó a cabo el primer desembolso del BID, por un monto de USD 53 millones, el cual se realizó una vez creado el Comité Asesor Técnico Independiente del Proyecto (CATI) y entrado en vigencia su *Manual de operaciones*. El proceso de construcción de la variante San Francisco-Mocoa dio inicio a su etapa precontractual con la apertura de la convocatoria en mayo del 2010. Dicha etapa finalizó en julio de ese mismo año con la expedición de la Resolución No. 3332, que adjudica la licitación pública al Consorcio Vial del Sur⁸. La construcción de la variante comenzó en el 2012, a su inauguración asistieron el director del Invías y el presidente de la República.

1.4 ZONA CLAVE EN TÉRMINOS SOCIALES, POLÍTICOS Y ECONÓMICOS

Según la posición oficial, la precaria conectividad de la región del piedemonte Andino-Amazónico, en especial en el departamento del Putumayo⁹, ha resultado en su bajo nivel de desarrollo, débil pre-

⁸ El Consorcio Vial del Sur es un convenio de asociación entre cinco empresas: Sonacol S. A., Cass Constructores & Cía. S. C. A., CSS Constructores S. A., Construcciones el Cóndor S. A. y Puentes Torones S. A. Casi todas estas empresas son objeto de análisis de la Contraloría de Bogotá, ya que representan un alto grado de concentración en la contratación de la capital del país (período 2004-2009) (Tenjo, 2011).

⁹ El departamento del Putumayo está ubicado al suroccidente del territorio continental colombiano en el extremo noroccidental de la cuenca del río Amazonas. Cubre una extensión territorial que varía entre los 24.855 km² y los 26.061 km² (Martínez,

sencia institucional, altos índices de violencia y actividades económicas ilegales, y un alto rezago en términos de competitividad. Con respecto a la calidad de vida de la población de este departamento, el *índice de desarrollo humano* (IDH)¹⁰ es de 0,759 para el año 2010 (PNUD, 2011), ocupa el puesto 26 entre los departamentos del país y está solamente por encima de Caquetá, Chocó y La Guajira. Al tener en cuenta el *índice de pobreza multidimensional* (IPM)¹¹, en el Putumayo la incidencia de la pobreza es del 76%. En los municipios de influencia de la variante San Francisco-Mocoa la incidencia de la pobreza multidimensional aumenta para las áreas rurales. Para municipios como Colón, Sibundoy, San Francisco y Santiago la incidencia de la pobreza asciende a 51, 50, 64 y 74% para las áreas urbanas, y a 62, 78, 81 y 85% para las áreas rurales respectivamente (DNP, s. f.).

El 36% de la población del departamento presenta *necesidades básicas insatisfechas* (NBI)¹² y la población en las áreas urbanas con NBI alcanza el 27%. Ahora bien, este indicador presenta condiciones más precarias en las áreas rurales del departamento, alcanzando un porcentaje del 46% (DANE, 2010). Del total de viviendas, el 67% cuenta con el servicio público de energía eléctrica, mientras solo el 48% con el servicio de alcantarillado, y el 44% con el servicio de acueducto (DANE,

2007). Dividido en 13 municipios, cuenta con 5 corregimientos, 62 inspecciones de policía y 917 asentamientos conocidos como veredas, en los que, según los datos ajustados del DANE para el censo de 2005 (DANE, 2010) viven 326.093 personas: 151.916 en el área urbana y 174.177 en el área rural. Del total de la población del departamento el 50,7% son hombres y el 49,3% mujeres.

¹⁰ El *índice de desarrollo humano* (IDH) es estimado a partir de los índices de esperanza de vida, logro educativo y PIB ajustado (PNUD, 2011).

¹¹ El *índice de pobreza multidimensional* (IPM) toma como base cinco dimensiones para medir la pobreza: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, trabajo, salud y acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda, los cuales son medidos a través de quince indicadores.

¹² Las *necesidades básicas insatisfechas* se calculan a partir de indicadores que reflejan el estado de las viviendas, los servicios sanitarios, la educación básica y el ingreso mínimo de las personas para medir la pobreza.

2010). En términos educativos, el 51% de la población residente en el departamento ha alcanzado el nivel de básica primaria y el 26% ha alcanzado secundaria. Solo el 5% de la población ha alcanzado el nivel superior y de posgrado en términos de educación. La población residente sin ningún nivel educativo es del 11%.

Una de las problemáticas en términos políticos presentes en el departamento es la falta de legitimidad del Estado y de las políticas públicas que se implementan. Se considera que las “posibilidades de participación e injerencia de las instituciones públicas y privadas de la región en la definición de políticas públicas relacionadas con el desarrollo son mínimas” (Martínez, 2007, p. 38). Otro factor que influye en este aspecto son los altos niveles de corrupción que presenta el departamento. El Putumayo muestra los mayores índices de incumplimiento de normas de anticorrupción según el Consejo Privado de Competitividad (2013). De igual manera, la gobernabilidad se ve afectada por la descoordinación interinstitucional, el deficiente desempeño de las entidades e instituciones, los bajos niveles de formación para la organización y la participación activa de la población y, por consiguiente, los bajos niveles de participación política (Martínez, 2013).

Lo anterior se une a la situación generalizada de violencia en la cual vive el departamento, que se agudiza debido a la disputa de actores armados por el control del territorio y de las actividades ilícitas. Los cultivos de uso ilícito han absorbido una parte importante de la mano de obra no calificada del departamento desde finales de la década de los setenta. Durante el 2011, el Putumayo contribuyó con el 13% de la producción de coca del país: 6148 has cultivadas (Unodc, 2013). Las consecuencias se manifiestan en los altos índices de homicidios y muertes violentas —las principales causas de mortalidad registradas para el año 2005 en este departamento están agrupadas en la categoría *externas o violentas* (Martínez, 2007)— y en procesos de desplazamiento forzado hacia los centros urbanos.

La política estatal frente a esta región del país ha sido extractiva; los aportes técnico-económicos para la construcción de la infraestructura y el equipamiento social han sido escasos. El departamento del

Putumayo ha estado expuesto a diferentes olas de colonización de tipo espontáneo, campesino y empresarial, que han estado impulsadas por la ampliación de la frontera agrícola (caracterizada por una marcada tendencia hacia la ganadería) desde la década de los cuarenta, el auge petrolero alrededor de 1960 y, en décadas recientes, la actividad minera¹³.

El principal renglón de la producción primaria del departamento es la explotación de hidrocarburos, que tuvo sus inicios a finales de la década de los sesenta con producciones que superaban los 120.000 barriles diarios pero que, en la actualidad, se encuentra en 44.882 barriles por día (*Diario del Huila*, 2013). Cerca de 8500 km² han sido reservados por el Estado colombiano para ser sometidos a actividades relacionadas con la minería de hidrocarburos en el Putumayo en los próximos años. Además del petróleo, la actividad minera en la región corresponde a la extracción artesanal de oro, en especial en algunos sectores del río Caquetá, y la explotación de piedras en la parte andina del departamento (Martínez, 2007). Otro aspecto importante de la actividad productiva primaria está relacionado con el *aprovechamiento* forestal; en el departamento del Putumayo se presentó una tasa media anual de deforestación de 218,1 km² al año entre el 2002 y el 2007 (Murcia et ál., 2010).

En términos de infraestructura vial, en el departamento existen aproximadamente 1640 km de vías entre primarias, secundarias y terciarias. Dicha longitud representa menos del 1% del total de carreteras del país y solo el 9% cuenta con pavimento. La conectividad de la red vial es entonces precaria debido al estado de las vías y a que solo 5 de los 13 municipios se unen a la red nacional en 85 km de carretera inadecuada (Plan Departamental de Desarrollo, 2012-2015). En este sentido, el departamento es uno de los más rezagados en términos de competitividad (Martínez, 2007)¹⁴. Son diferentes los tipos de tráfico

¹³ <http://www.youblisher.com/p/437143-Plan-Regional-de-Competitividad-Putumayo/> (consultado el 15/03/2013).

¹⁴ El departamento del Putumayo no fue incluido en el índice departamental de competitividad (IDC) 2013.

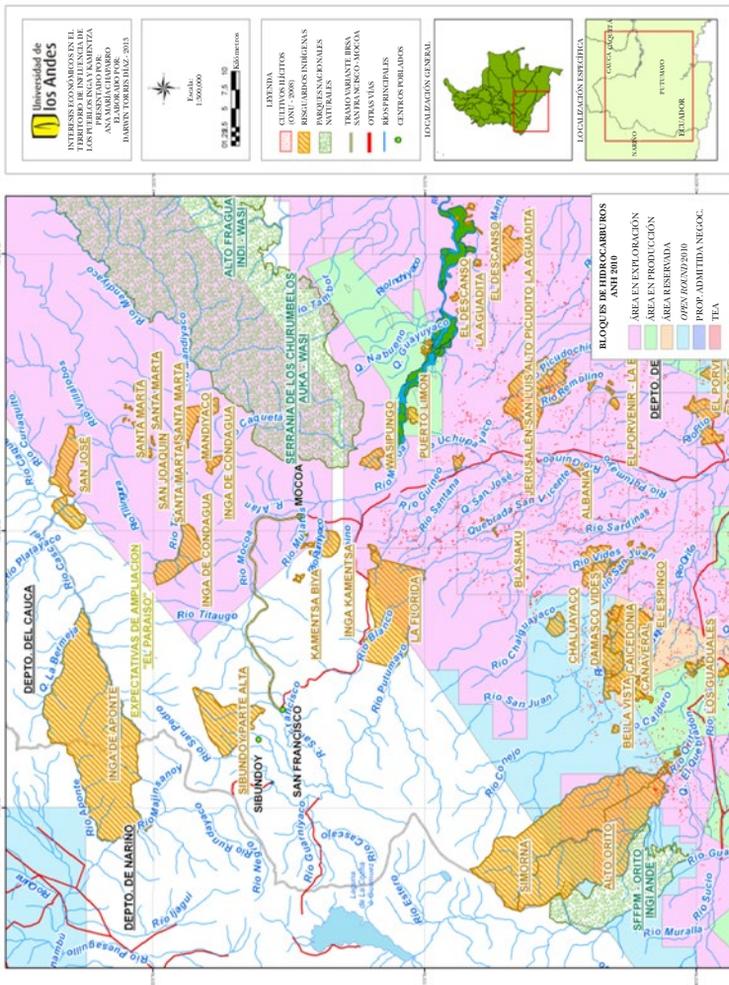


Figura 4. Intereses económicos en la región del piedemonte Andino-Amazónico

que se espera pasen por el territorio, para potenciar procesos de competitividad nacional y supranacional, gracias a esta actividad de modernización de la infraestructura. El aumento en el tráfico nacional y regional implica la entrada de productos brasileños como pescado, frutos amazónicos y madera; el flujo de soya entre Brasil y Colombia, y el comercio de recursos agrícolas andinos y recursos forestales amazónicos, hidrocarburos y gas natural, materiales de construcción (del Putumayo hacia Manaus), cobre, oro y arena, y acero de Brasil hacia Colombia, entre otros¹⁵.

1.5 LA VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCHOA Y EL DESARROLLO AMBIENTAL DEL TERRITORIO

Este proyecto presenta características especiales en términos ecológicos y culturales. Descenderá desde las montañas de los Andes hacia la llanura Amazónica, atravesando de este a oeste el piedemonte Andino-Amazónico, una de las áreas más estratégicas, en términos ambientales, de la cordillera Oriental de Colombia. Así, el proyecto presenta características especiales, ya que el 68%¹⁶ de su trazado cruza un área legalmente protegida: la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa, creada en 1984. Gran parte de la diversidad biológica de esta región radica en que ella es el punto de confluencia de especies andinas, amazónicas y del Pacífico. Además, es una importante estrella fluvial, ya que en sus montañas nacen numerosos ríos pertenecientes a la gran cuenca del Amazonas, como el Mocoa, el Caquetá y el Putumayo. Debido a su amplio rango de elevaciones, esta región

¹⁵ <http://www.bicusa.org/es/feature/corredor-multimodal-pasto-mocoa-e-hidrovia-del-putumayo-es/> (consultado el 15/03/2013).

¹⁶ De los 47 km de distancia que tendrá la variante, 31 km atravesarán la reserva forestal.

también cuenta con un sinnúmero de microclimas, desde páramos hasta llanuras amazónicas.

Desde el año 1984 la variante San Francisco-Mocoa empieza a ser estudiada por el antiguo Ministerio de Obras Públicas y Transporte de Colombia. En aquella época se analizó una alternativa sobre la margen izquierda del río Mocoa que fue descartada por los altos impactos ambientales que podría tener la obra. Fue en 1996 cuando el Ministerio de Ambiente inició el estudio de la licencia ambiental para la construcción de la variante, con dos alternativas: 1) la construcción de la variante que se propone actualmente, y 2) el mejoramiento de la vía actual. En ese momento, el Ministerio respondió de manera negativa a la propuesta, argumentando que el “desarrollo de la región no podía verse desde una perspectiva meramente económica, pues la dimensión ambiental, necesaria, tiene que ver con las relaciones que establece una sociedad determinada con su entorno natural” (*Semana*, 2011) y requiriendo la presentación de un estudio de impacto ambiental para la rehabilitación del corredor vial actual.

Ahora bien, en 1999 las autoridades políticas del Putumayo (gobernador, alcaldes de Mocoa y San Francisco, y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, Corpoamazonía) celebran una audiencia pública durante la cual queda explícito su apoyo al proyecto. Es en ese momento cuando el Invías presenta nuevamente al entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial un estudio con tres alternativas para la vía, tras lo cual se avala la variante. Según la posición oficial, esta alternativa fue escogida porque la rehabilitación de la carretera actual era demasiado costosa. Se privilegió así un segmento más directo y corto, para reducir los tiempos y los costos de viaje¹⁷ (BID, 2009). Se solicitó entonces, una vez más, el estudio de impacto ambiental, que fue presentado en el 2005 y puesto en una fase de complementación que duró hasta el año 2008.

¹⁷ Aunque se aumentan los costos sociales (al no haberse realizado una consulta previa libre e informada) y ambientales.

Tras considerar las características ambientales del proyecto, desde el 2006 el Gobierno de Colombia le solicitó al BID asistencia técnica y financiera para complementar los estudios socioambientales necesarios para garantizar la viabilidad y factibilidad económica del proyecto. Fue así como el BID tramitó una cooperación técnica no reembolsable del Fondo de Infraestructura de Integración Regional por más de un millón de dólares, con el objeto de apoyar dos estudios de carácter ambiental y sociocultural: el Plan Básico de Manejo Ambiental y Social para la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa (PBMAS) y la Evaluación Ambiental Regional de la vía Pasto-Mocoa (EAR) (Perfil de proyecto, 2006).

Según la posición oficial, se llevó a cabo un proceso de consultas públicas en dos etapas: una de amplia difusión de los términos de referencia de esos estudios, la cual contó con la participación de entidades gubernamentales (el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible), ONG (WWF, Conservación Internacional e IIRSA), autoridades territoriales (alcaldías) y población local; y otra de difusión de los estudios técnicos socioambientales, en el marco de la elaboración misma de estos (entre el 2007 y el 2008) que contó con la participación de 1844 personas¹⁸. De igual forma, esta versión asegura que durante el proceso de consulta no se identificaron reacciones contrarias al proyecto y resalta que en el área no existe presencia física indígena, por no haberse identificado algún resguardo constituido de manera legal. Así pues, en el 2008 se otorga la licencia ambiental para avanzar con la construcción de las obras (Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación, 2011).

En el 2009 se elabora el Plan de Manejo Ambiental y Social Integral y Sostenible (PMASIS), que comprende las medidas de mitigación y compensación por la construcción de la variante y las medidas de

¹⁸ Algunos líderes indígenas aparecen en los documentos como asistentes a las consultas de actualización del estudio de impacto ambiental en el marco de construcción colectiva de los aspectos positivos y negativos de la variante.

seguimiento y monitoreo durante su operación, en cumplimiento de la licencia ambiental otorgada al proyecto¹⁹. El PMASIS consolida en un solo instrumento los siguientes estudios realizados en el ámbito del diseño del proyecto: 1) la actualización y complementación del *Estudio de Impacto Ambiental* (EIA), finalizada en el 2008; 2) la Evaluación Ambiental Regional de Carácter Estratégico (EAR) del corredor vial Pasto-Mocoa, realizada en el 2008, y 3) el Plan Básico de Manejo Ambiental y Social (PBMAS) de la Reserva Forestal de la Cuenca Alta del Río Mocoa, realizado también en el 2008. Cada uno de estos estudios posee una metodología y un alcance distintos²⁰.

La estrategia de mitigación de los impactos ambientales consignada en el PMASIS consiste en conformar un corredor biológico de conservación, una Reserva Forestal Ampliada (RFA), a partir de las siguientes actividades: 1) la ampliación de la Reserva Forestal de la Cuenca Alta del Río Mocoa existente, hacia la cuenca del río Blanco, para que conecte al norte con el complejo volcánico de Doña Juana, lo que implica pasar de las 34.600 has de la reserva actual a 76.448 has, lo cual representa un aumento del 221% en área de conservación; 2) la constitución del Distrito de Manejo Integrado (DMI) de Mocoa al oriente, el cual tendrá un área total de 48.391 has, para que conecte la Reserva con el Parque Nacional Churumbelos y la Reserva Forestal de la Amazonía, y 3) la constitución de la Reserva Forestal Productora-Protectora de San Francisco, de 5297 has, en donde están asentadas las comunidades de las veredas Minchoy, Patoyaco, La Esperanza, Titango y San Pablo. Con estas tres áreas protegidas, que suman un área total de 130.136 has, se busca conectar la zona sur del macizo colombiano con el norte de la Amazonía.

¹⁹ El BID aportó a los estudios una cooperación de 1,7 millones de dólares. El presupuesto para el PMASIS es de once millones de dólares (*Semana*, 2011).

²⁰ <http://www.corpoamazonia.gov.co/index.php/verdes/pmasis> (consultado el 17/04/2012).

Por su parte, las estrategias de conservación de esta Reserva Forestal Ampliada cuentan con tres ejes de acción: un eje de investigación, monitoreo y seguimiento de los recursos naturales; otro de deforestación evitada y un último eje de proyectos de uso sostenible y de conservación, enfocado en la financiación de proyectos preestablecidos. Por último, se incluye un proceso de fortalecimiento de Corpoamazonía, y la creación de un fondo para el manejo de la Reserva (PMASIS, 2008).

1.6 UN TERRITORIO “INHABITADO”

El departamento del Putumayo está habitado por aproximadamente 45.000 indígenas —el 20,94% de la población se autorreconoce como indígena (DANE, 2010)— pertenecientes a 13 grupos étnicos (kofán, awa, nasa, siona, inga y kamëntza, entre otros), asentados en los 13 municipios que lo componen, con alrededor de 157 comunidades representadas por sus cabildos (autoridades tradicionales), 66 resguardos legalmente constituidos y 5 reservas indígenas, que cubren una extensión aproximada de 2743 km² (DANE, 2005).

También se encuentra asentado un número importante de campesinos que llegaron al departamento como resultado de los procesos de colonización. Cerca del 80% del territorio de este departamento ha sido declarado baldío o perteneciente al Estado. Por su parte, los grupos inga y kamëntza de la zona están organizados en nueve cabildos: seis se encuentran en el Alto Putumayo (Inga de Santiago, Inga de Colón, Inga de San Pedro, Kamëntza de Sibundoy, Inga-Kamëntza de San Francisco y Quillacinga de El Encanto) y tres en Mocoa (Inga, Kamëntza Biyá e Inga-Hamëntza) (DANE, 2005).

A lo largo del proceso de diseño y preparación del proyecto de construcción de la variante, Invías solicitó en varias oportunidades el pronunciamiento de la autoridad competente en materia indígena (en la actualidad, el Ministerio del Interior) sobre la presencia de

comunidades indígenas en la zona de influencia de aquel. Estos pronunciamientos han tenido consecuencias importantes en el tratamiento de la cuestión indígena en el territorio. En un primer momento, la Dirección Nacional de Asuntos Indígenas (2001) certificó la “existencia de las comunidades indígenas Kamëntza e Ingá, Kamëntza-Biyá y Belén del Palmar” en el área de influencia de la carretera y dictaminó el inicio del proceso de consulta previa libre e informada con las mencionadas comunidades. No obstante, en dos oportunidades posteriores (2002 y 2008), el Ministerio certificó la no existencia de comunidades indígenas que puedan verse afectadas por la construcción de la variante (*Semana*, 2011). Solo en el 2010, y luego en el 2011, el Ministerio del Interior reconoce ante la Procuraduría General de la Nación que existen comunidades en la jurisdicción de los municipios de San Francisco y Mocoa, y registra la presencia de los resguardos indígenas Kamëntza-Biyá, Inga de Condagua, Sibundoy de la Parte Alta y San José en la zona de influencia directa del Proyecto de Ampliación de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del río Mocoa.

A pesar de los anteriores pronunciamientos, la variante San Francisco-Mocoa coincide en gran parte con un camino real, conocido como “Camino de Sachamates”²¹ (que significa “lugar por donde caminaban y había totumo silvestre”) y utilizado desde tiempos ancestrales por las comunidades indígenas Kamëntza e Inga como vía de comunicación y trueque con las del Bajo Putumayo, e inclusive con algunas del Caquetá, como los Korebaju²², y como despensa para la recolección de plantas medicinales, por lo cual forma parte de un territorio considerado ancestral.

La mayor preocupación de las comunidades indígenas es que en el proceso de preparación de la construcción de la variante San Francisco-Mocoa se hizo caso omiso de la presencia de indígenas en el área de influencia de esta, lo que supone una privación del espacio y

²¹ Denominado por los colonos “Camino de los Capuchinos”.

²² Taita kamëntza (63 años), comunicación personal, 8 de marzo de 2013.

la cultura indígenas, y una negación de los impactos ambientales y sociales sobre las comunidades. Estas exponen que la falta de una adecuada consulta previa libre e informada con ellas viola sus derechos en cuanto que tales y les impide la posibilidad de pronunciarse de fondo sobre la construcción de la variante. Se alega que las consultas realizadas no fueron adecuadas, ya que tuvieron una naturaleza unidireccional, no participativa, y no dieron respuesta a las preocupaciones de dichos grupos (Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación, MICI, 2011).

A pesar de que no se llevó a cabo un proceso de consulta previa, el PMASIS incluyó un plan de apoyo para comunidades indígenas que contiene los siguientes proyectos prioritarios: 1) proyecto de apoyo a la constitución de una zona minera indígena; 2) proyecto de apoyo a mesas de trabajo con comunidades lideradas por el Ministerio del Interior; 3) proyecto de fortalecimiento de los cabildos y 4) programa de desarrollo de los planes integrales de vida (PIV), que incluye procesos de mejoramiento e implementación de los planes, fortalecimiento de capacidades para la articulación con municipios y fortalecimiento de la adecuación intercultural de servicios de etnoeducación y etnosalud.

Una de las críticas lanzadas desde diferentes organizaciones interesadas en el tema es que la adopción de este proyecto se ha realizado sin rigurosas evaluaciones socioambientales estratégicas o regionales. Se conocen las estimaciones sobre los posibles logros económicos que se alcanzarán con el aumento de la conectividad, pero no el impacto del conjunto de las obras sobre los ecosistemas y las poblaciones indígenas y campesinas localizadas en su zona de amortiguación. Como proyecto que procura responder a intereses y dinámicas globales (por ejemplo, salida por el Pacífico de productos brasileños e intereses de empresas de hidrocarburos, mineras y de biocombustibles), surgen inquietudes con respecto a la manera en que se compagine y pueda ser armónico con el cuidado del medioambiente y las necesidades locales.

**REFERENTES CONCEPTUALES:
UNA CARTOGRAFÍA DE IDEAS TEÓRICAS
SOBRE DECOLONIALIDAD, MOVIMIENTOS
SOCIALES, IDENTIDAD Y PODER**

*Me asusta cuando hay truenos, cuando llueve, cuando se descarga
unos aguaceros, y yo se me acordar de eso que ellos decían, que cuando
los blancos se metan a la montaña va a haber truenos y relámpagos,
no será por eso que están allá derrumbando madera y todo eso, hay
tempestades que da miedo.*

Mama kamëntza (81 años)¹

Para entender la percepción, participación e incidencia de las comunidades indígenas del Putumayo en un proyecto como la variante San Francisco-Mocoa, desarrollado en el marco de la Iirsa, quise ubicarme en una perspectiva de comprensión crítica² de la “realidad”

¹ Comunicación personal, 8 de marzo de 2013.

² La distinción entre teoría tradicional y teoría crítica, de Max Horkheimer (1937), es importante para comprender la intención de este capítulo. Para este autor, la teoría tradicional trabaja sobre el supuesto de que la actividad teórica es pura y se centra en un objeto desligado precisamente de quien lo estudia. Por su parte, las teorías críticas se deben basar en la comprensión de que el sujeto y el objeto de la investigación se encuentran marcados por su propia historia, de modo que el trabajo crítico está mediado por “la supresión de la injusticia social” (Horkheimer, 1998, p. 270).

con el propósito, no de presentar conceptos “universales” sobre percepciones, y acción colectiva y política de comunidades subalternas, sino ideas teóricas de carácter político que giran en torno a nociones tales como *decolonialidad*, *movimiento social indígena*, *identidad* y *poder*. Así, este capítulo es un intento por cartografiar mi propia percepción y posición como investigadora en torno a la relación entre estas nociones, no sin reconocer que mi propia construcción textual está mediada por prácticas de poder y tomas de posición ante la “realidad”. Se trata, entonces, de reconocer de manera explícita que este capítulo presenta una toma de postura marcada por mi trayectoria personal y profesional, la cual ha estado permeada por la relación con los “otros” que han sido subalternizados en sus formas de pensar, conocer, decir, actuar o inclusive callar.

Como politóloga, las discusiones sobre el poder y la acción política en el marco de procesos/proyectos de desarrollo siempre han sido parte fundamental de mis intereses académicos. No obstante, son las propuestas que van más allá de una disciplina concreta y aquellas que resaltan la importancia de los entendimientos transdisciplinarios en los que no se presentan teorías acabadas sino reflexiones abiertas sobre los conceptos escogidos, las que considero permiten comprender los conflictos y contradicciones que están en el núcleo de los procesos de desarrollo y su dimensión humana. Este capítulo reúne así ideas de diversas corrientes de pensamiento, como las teorías marxistas heterodoxas, los enfoques poscolonialistas, posestructuralistas y posdesarrollistas, los debates latinoamericanos sobre modernidad/posmodernidad, los estudios culturales y subalternos, los estudios foucaultianos y los feminismos de frontera, con el propósito de acercarnos al giro decolonial que proponen los investigadores del Programa de Investigación Modernidad/Colonialidad. Así mismo, desde esta perspectiva, se pretende abordar conceptos como “percepción”, “identidad y discursos colectivos”, “participación política y movimientos sociales” y “poder”.

2.1 EL GIRO DECOLONIAL: UN RECONOCIMIENTO A LAS FORMAS DE SABER Y PENSAR DE GRUPOS SUBALTERNIZADOS

Los diferentes análisis realizados en el marco del Programa de Investigación Modernidad/Colonialidad proponen un paradigma que permite hablar desde las diversas historias locales en América Latina y el Caribe a las cuales históricamente les fue negado su potencial epistémico y político, a partir de la convicción de la necesidad de nuevas formas de utopía y de hablar de un “paradigma otro” (Flórez Flórez, 2010; Mignolo, 2000). Esta red de pensamientos comparte referentes de análisis en distintas disciplinas, que confluyen en la importancia de avanzar hacia un *giro decolonial*, hacia el reconocimiento de aquellas formas de pensar y saber de grupos sometidos/subalternizados por la visión eurocéntrica del mundo, es decir, hacia la revaluación del conocimiento práctico de trabajadores, mujeres y sujetos racializados/coloniales (Castro-Gómez & Grosfoguel, 2007)³.

El giro decolonial aporta elementos para complementar algunas suposiciones del análisis del sistema-mundo y de los estudios poscoloniales anglosajones. Por un lado, se basa en la teoría del sistema-mundo de Wallerstein (1974), a partir de la cual se asume que el capitalismo y su desarrollo desde el principio involucraron a todos los países, que ocuparon posiciones de poder diferencial en la división internacional del trabajo y en las luchas militares geopolíticas. Ahora bien, para escapar al reduccionismo económico, y a la tensión entre estructura y agencia, hablar de procesos decoloniales también

³ Aunque esta perspectiva toma como unidad de análisis el sistema-mundo y los diseños globales que se desprenden de este, se reconoce la necesidad de avanzar en nuevos procesos de utopía a partir de una *corpopolítica del conocimiento*, una política del conocimiento que no tenga pretensión de neutralidad ni objetividad (Castro-Gómez & Grosfoguel, 2007).

implicará reconocer la estrecha relación entre capitalismo y cultura que proponen los estudios poscoloniales. Se resalta, entonces, que los imaginarios, los discursos y la práctica social son todos elementos constitutivos de lo político y que, como lo muestran algunos autores (Escobar, 2000; Mignolo, 1995), el lenguaje “sobredetermina” no solo la economía sino la realidad social en su conjunto. Así pues, el giro decolonial entiende el capitalismo no solo como

... un sistema económico (paradigma de la economía política) ni tampoco como un sistema cultural (paradigma de los estudios culturales/ poscoloniales en su vertiente “anglo”), sino como una *red global de poder*⁴, integrada por procesos económicos, políticos y culturales, cuya suma mantiene todo el sistema (Castro-Gómez & Grosfoguel, 2007, p. 17. Énfasis en el original).

A partir esta perspectiva, se concibe la *modernidad* en un sentido mundial, como constituida desde el momento en que Europa empieza a tener una centralidad en la configuración del sistema-mundo y los diferentes sistemas culturales dejan de coexistir en condiciones de relativa igualdad para pasar a ser concebidos como las periferias de un solo centro: Europa (Flórez Flórez, 2010). La dominación colonial por parte de Europa estableció procesos de control sobre espacios y

⁴ La economía y la cultura siempre están entrelazadas, no a partir de una estructura jerárquica o unilineal, sino en términos de estructuras heterárquicas en las cuales todos los niveles ejercen algún grado de influencia sobre los demás. El pensamiento heterárquico del cual parte el giro decolonial es un intento de proponer un nuevo lenguaje capaz de conceptualizar las estructuras sociales a partir de dispositivos de poder heterónomos vinculados en red. La integración de los elementos al sistema nunca es completa; por el contrario, siempre es parcial, lo cual significa que en el capitalismo global “no hay lógicas autónomas ni tampoco una sola lógica determinante ‘en última instancia’ que gobierna sobre todas las demás, sino que más bien existen procesos complejos, heterogéneos y múltiples, con diferentes temporalidades, dentro de un solo sistema-mundo de larga duración” (Castro-Gómez & Grosfoguel, 2007, p. 18).

territorios, pero también patrones de poder basados en una jerarquía racial y en una distribución específica de identidades sociales (blancos, mestizos, indígenas y negros), con lo cual borró las diferencias históricas de estas comunidades al limitarlas a identidades negativas. Así, la *colonialidad del poder* instaló diferencias no solo raciales, sino coloniales que se convirtieron en valores; diferencias que aún se mantienen en los países andinos (Garcés, 2007; Quijano, 2000; Walsh, 2010).

Más adelante, durante el proceso de organización de los nuevos Estados en América Latina, compuestos casi en su totalidad por una población de negros, indígenas y mestizos, es precisamente a estas comunidades a las cuales les es negada toda posible participación en las decisiones sobre la organización social y política. La estructura de poder y su articulación espacial y territorial continuaron articulándose alrededor del eje colonial, de modo que

... el proceso de independencia de los Estados en América Latina, sin la descolonización de la sociedad, no pudo ser, no fue, un proceso hacia el desarrollo de los Estados nación modernos, sino una rearticulación de la colonialidad del poder sobre nuevas bases institucionales (Quijano, 2000, p. 236).

Se asistió, por el contrario, a una *transición del colonialismo moderno a la colonialidad global*, proceso que ha transformado las formas de dominación desplegadas por la modernidad, pero no la estructura de las relaciones centro-periferia a escala mundial (Castro-Gómez & Grosfoguel, 2007). El colonialismo no solo se mantuvo durante el período de la Independencia, sino que se agravó, convirtiéndose en un dinámica social que atraviesa actualmente no solo territorios, sino espacios públicos y privados, culturales, mentales; es un modo de vivir tanto para quienes se benefician de él como para quienes buscan superarlo (Santos, 2010).

La diferencia colonial se articuló a la colonialidad del poder mediante la *modernidad*, “la cual en su práctica y en su racionalización, implica y construye un nuevo ordenamiento epistémico y lingüístico:

la subalternidad de conocimientos y lenguas” (Garcés, 2007). La modernidad, entonces, ha permitido la reproducción de los mecanismos de subalternización de poblaciones, instituciones, saberes y prácticas que han ocupado el último escalón de la pirámide social durante el período de la Colonia, el de la creación de las repúblicas independientes y democráticas, y ahora el del capitalismo globalizado.

La necesidad de rescatar al sujeto históricamente marginado retorna con ímpetu, pues los estudios subalternos han resaltado con descontento que aquel no haya tenido lugar como sujeto de lucha (Guha, 1982). Ahora bien, el debate se centra en considerar si los grupos dominados pueden, a partir de sus puntos de vista, tener voz propia o si, por el contrario, siempre son los grupos dominantes quienes construyen los imaginarios y discursos alrededor de “los otros”. Se abre y propone la posibilidad de un contraconocimiento, una historia subalterna (Spivak, 1985). Según el giro decolonial, se necesita de una decolonialidad que complete la descolonización llevada a cabo en los siglos XIX y XX, dirigida a las múltiples relaciones y heterarquías raciales, étnicas, sexuales, epistémicas, económicas y de género que la primera descolonialización dejó intactas. Este supone “impulsar interrelacionamientos que no tienen la pretensión de asumir la perspectiva del otro, sino de permitir que la diferencia intervenga en uno” (Flórez Flórez, 2010, p. 91). El giro decolonial denota, entonces, un camino de lucha continuo, en el cual se pueden identificar, visibilizar y estimular construcciones alternativas

... en el sentido de concepciones nuevas de lo humano y de las relaciones materiales que no se [conforman] con la dictadura del capital, ni se restringen al imperio de la ley en el Estado-nación moderno/colonial la cual es constitutiva del mundo moderno (Ávila Pacheco, 2010, p. 98).

Un nuevo lenguaje es necesario para dar cuenta de la complejidad de las jerarquías de género, raza, conocimiento y espiritualidad

en los procesos geoculturales, geopolíticos y geoeconómicos del sistema-mundo⁵.

Ahora bien, no se está proponiendo una misión de rescate fundamentalista o esencialista de la autenticidad cultural o epistémica en el proceso de visibilizar los *otros conocimientos* que han sido marginados. Por el contrario, se trata de ubicarnos en espacios transmodernos, en los cuales se pueden estar creando formas alternativas de racionalidad económica, política y ética, ubicados en la intersección entre lo considerado tradicional y lo moderno. Son formas de conocimiento intersticiales, híbridas, en el sentido de complicidad subversiva con el sistema. Es “*resistencia semiótica* capaz de resignificar las formas hegemónicas de conocimiento desde el punto de vista de la racionalidad posteurocéntrica de las subjetividades subalternas” (Castro-Gómez & Grosfoguel, 2007). Según Touraine (1992), en ningún momento se debe rechazar a la visión racionalista que nos propone la modernidad, ya que es el arma crítica más poderosa para contrarrestar los holismos y proponer el surgimiento del sujeto humano como libertad y creación constante.

2.2 LA CONSTRUCCIÓN DE PERCEPCIONES, IDENTIDADES Y DISCURSOS COLECTIVOS

Las diferentes maneras de conocer, saber y decir se transformaron, como se mencionó en el apartado anterior, paulatinamente en una única manera de mirar las distintas dinámicas que se dan en un territorio, lo cual confiere a los filtros culturales, disciplinares e ideológicos una omnisciencia, universalidad e inmutabilidad que han empoderado

⁵ Aquí se entiende al sujeto como un producto histórico. Esto, lejos de condenarnos a repetir elementos negativos de la historia, nos ofrece la libertad de desprendernos de nosotros mismos y de crear nuevas prácticas para reinventarnos en lo cultural, lo político y especialmente en lo económico.

a unos y paralizado a otros (Nazarea, 1999). La reducción de las dinámicas locales, arraigadas en la historia y en la política, a categorías homogéneas nos ha impedido ver la capacidad que tienen los diferentes grupos sociales para autodeterminarse y balancear opciones creativas de persistencia, adaptación y cambio desde sus propias visiones. La idea, entonces, es explorar los diferentes puntos de vista de las comunidades subalternizadas, teniendo en cuenta que estos no son accidentales, sino, por el contrario, sistemáticos, lo cual permite y a la vez restringe sus dinámicas, y da claves para entender sus procesos de decisión y de acción.

El debate se centra en cuestionar si estas percepciones pueden entenderse de manera universal o si se relacionan directamente con elementos culturales. Por un lado, Berlin (1992) expone, partiendo de la etnoecología, que los

... grupos de plantas y animales se presentan al observador humano como una serie de discontinuidades cuyas estructuras y contenidos son vistos por los seres humanos esencialmente de la misma forma, percepciones dadas que son ampliamente inmunes a las variables culturales que se encuentran en otras áreas de la experiencia humana⁶ (Berlin, citado en Nazarea, 1999, p. 5).

El otro lado del debate sugiere, por el contrario, que la cultura da forma a los modelos cognitivos y media en las percepciones y el comportamiento de los grupos. Para ahondar en este tema, según Melucci (2001), mientras que otros lazos de pertenencia grupal se pueden debilitar o disolver, la solidaridad étnica responde a necesidades identitarias que operan no solo en el plano material sino también en el simbólico. Es “[como] si la identidad étnica proporcionase un espacio simbólico para la expresión de fuerzas conflictivas que van más allá de la condición específica del grupo étnico en cuestión” (p. 102).

⁶ Traducción personal.

Para cerrar la brecha entre ambos lados del debate, Bourdieu (1987) propone que los puntos de vista son una visión subjetiva, pero, de igual forma, una perspectiva elaborada desde una posición determinada en el espacio social objetivo. Contra la falsa antinomia entre objetividad y subjetividad, según este autor, los grupos sociales se caracterizan por ser grupos de agentes que ocupan posiciones similares en el espacio social —con lo cual la distribución de poder se determina a partir de tres criterios: el volumen global del capital, la composición del capital y las trayectorias sociales (Bourdieu, 1987)—, que están condicionados por circunstancias y factores similares y que, como resultado, están predispuestos a desarrollar prácticas similares. Pero, a la vez, los grupos sociales están determinados por las representaciones que sus agentes elaboran con el propósito de enfrentar las exigencias diarias y enriquecer el “vocabulario” disponible para nombrar y pensar lo social. Las percepciones de los grupos subalternos por un lado internalizan el punto de vista que propaga la autoridad dominante, el cual puede considerarse como una *realidad objetiva*, y por otro, contribuyen a construir, o deconstruir, dicha visión de mundo a partir de sus propias *subjetividades*, teniéndose en cuenta su posición en la esfera social (Nazarea, 1999).

A partir del anterior planteamiento, Bourdieu plantea que los grupos sociales son “clasificados”, pero de igual forma “clasifican” dependiendo de su posición en el *continuum* de “clasificaciones”. Los grupos sociales son así afectados por las circunstancias en las que se encuentran y por las condiciones correspondientes a su posición en la *esfera social multidimensional*, definida *intrínsecamente* (condiciones materiales de existencia) y de manera *relacional* (a partir de su relación con respecto a otras posiciones, arriba o abajo de estas, o en el medio —neutrales, ni dominantes, ni dominadas—). Bajo esta lógica, el mundo social es uno de constante lucha, donde los grupos aparecen equipados de manera desigual para imponer su verdad o percepción del mundo a los demás. Un aspecto clave de esta lucha es precisamente la definición y configuración de estos grupos —la autodiferenciación (Barth, 1969)—, al declararse y manifestarse como tales para

convertirse en fuerzas políticas capaces de imponer su propia visión y, por ende, de asegurar el triunfo de los intereses asociados con su posición en el espacio social.

Por su parte, Castells (1997) propone que la identidad colectiva de las comunidades indígenas se origina en tres fuentes. La primera es el reconocimiento de los actores étnicos a partir de la institución estatal dominante (*identidad legitimadora*). La segunda fuente son los procesos de resistencia que desde la década de los setenta han contribuido a definir su identidad (*identidad por resistencia*). Por último, las comunidades indígenas están construyendo una nueva identidad sobre la base de sus tradiciones étnicas, y en relación con los discursos transnacionales de la ecología, la diversidad cultural, el desarrollo alternativo y los derechos humanos (*identidad por proyecto*). Por lo tanto, las comunidades indígenas, como identidades colectivas, tienen un espacio político para proponer y cuestionar el sistema oficial.

Así, las percepciones se relacionan con la construcción de discursos subalternos por parte de estos grupos, los cuales tienen como propósito plantear formas de resistencia ante “discursos” externos, y formas dominantes de ver y construir el mundo. Los discursos subalternos reflejan no solo el punto de vista según el cual la autoridad dominante propaga su verdad y esta es a su vez internalizada, sino también la capacidad para la deconstrucción discursiva diaria que tiene lugar entre los grupos subalternizados (Ibrahim, 1996). Estos discursos, además de transmitir contenido cultural, representan relaciones de poder: de opresión y subordinación, al igual que relaciones de resistencia tanto implícitas como explícitas. Al respecto, Scott (2000) expone las diferentes formas de resistencia, tanto ocultas (lo que él considera la *infrapolítica* de los grupos subalternos) como explícitas, que son utilizadas por grupos considerados como marginados, si bien aclara que la primera declaración pública del discurso oculto tiene una historia anterior que explica su capacidad de producir conquistas políticas futuras.

En contraposición al discurso público —que se constituye a partir de las relaciones explícitas entre los grupos subordinados y la élite—, la atención se debe centrar en las formas de resistencia discretas que

se expresan a partir de formas indirectas. Lejos de las dinámicas establecidas entre los detentadores del poder y los subalternos, el *discurso oculto*, considerado como la conducta fuera de escena, permite el surgimiento de una cultura política disidente en un conjunto particular de actores y en un espacio social determinado que no contiene solo actos de lenguaje, sino también una extensa gama de prácticas. De este modo,

... para muchos campesinos, la caza furtiva, el hurto en pequeña escala, la evasión de impuestos, el trabajo deliberadamente mal hecho son parte integral del discurso[.] En cada caso, estas prácticas contradicen el discurso público de los respectivos grupos y, en la medida de lo posible, se las mantiene fuera de la vista y en secreto (Scott, 2000, pp. 38-39).

En los grupos subordinados, el lenguaje y las prácticas propias del discurso oculto son utilizados de manera esporádica. No obstante, se aprovecha el anonimato de la multitud para encontrar formas de expresar su resistencia a la opresión política, social y económica por parte de las élites. Ahora bien, existe un tercer ámbito en la política de estos grupos que se encuentra de manera estratégica entre ambos discursos (el público y el oculto). Este ámbito se caracteriza por una política del disfraz y del anonimato que se ejerce públicamente, pero que está hecha para contener un doble significado o para proteger la identidad de los actores. Dentro de esta definición caben perfectamente los rumores, los chismes, los cuentos populares, los chistes, las canciones, los ritos y los códigos.

2.3 LOS “NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES” INDÍGENAS

La proliferación de estudios sobre la acción política en los últimos sesenta años refleja el aumento en la relevancia de la participación

ciudadana, de la participación de los grupos subalternizados con sus percepciones y discursos, en la toma de decisiones políticas. La participación política puede ser definida como las actividades realizadas por los ciudadanos o grupos de ciudadanos para influenciar las decisiones que se toman en el ámbito político. Así, las diferentes definiciones de participación política sugieren que esta supone actuar bajo el rol de ciudadanos (no como políticos ni como funcionarios), entendida como una actividad o una acción voluntaria y no ordenada por una clase dirigente o por normas, y relacionada con el sistema político. Para muchos autores, la estructura latente de la participación se puede resumir en los siguientes tipos: 1) voto, 2) campañas políticas, 3) acción colectiva, 4) contacto directo, 5) acciones directas y 6) violencia política (Van Deth, 2006).

Las formas no convencionales de participación política pertinentes para esta investigación empiezan a ser consideradas por el mundo académico en las décadas de los sesenta y setenta; se resalta la creciente relevancia de grupos y la directa relación entre ciudadanos, funcionarios y políticos. También es en estas décadas cuando se empieza a reconocer la protesta, los actos de resistencia y los nuevos movimientos sociales como formas de participación política (Barnes, Kaase et ál., 1979). No obstante, solo a partir de la década de los ochenta esta continua y firme presencia de la acción colectiva, hasta entonces mantenida en la retaguardia del análisis académico, se convierte en un actor central en el estudio de la acción (Flórez Flórez, 2010). En palabras de Mendiola (2002), un movimiento social

... [designa] un entramado relacional (de límites difusos que expresan los diferentes grados de implicación en el movimiento) aglutinado en torno a una identidad colectiva que, en virtud de los deseos de incidir en los procesos de cambio social propios de todo contexto social, desencadena una movilización no esporádica (caracterizada por formas no convencionales de acción) en donde el movimiento interrelaciona con una multiplicidad de actores colectivos (favorables o desfavorables a sus propuestas: actores institucionales u otro tipo de movimientos

sociales) que afectan y condicionan el propio curso de la movilización emprendida por el movimiento social (Mendiola, 2002, p. 11).

Los nuevos movimientos sociales toman fuerza como temática de debate abarcando realidades sociológicas tan diversas como los movimientos étnicos, ecológicos, feministas, pacifistas, antirracistas y de consumidores, entre otros. Estos movimientos, al identificar formas de dominación que se relacionan con otros aspectos que van más allá de las relaciones de producción —como pueden ser las guerras, el productivismo y la contaminación—, empiezan a abogar por un nuevo paradigma social basado en la cultura y en la calidad de vida, que tenga en cuenta no solo el modo como se trabaja y produce, sino también el modo como se vive (Santos, 2001).

Los movimientos sociales indígenas se insertan en este contexto, y su discurso y dinámica política parten de la relación entre sus prácticas culturales y ecológicas (Ulloa, 2003; Varese, 1996). Sus estrategias políticas de resistencia se enmarcan en cuatro ámbitos: su visión del mundo basada en una ética ecológica, sus relaciones económicas basadas en la reciprocidad, sus conocimientos (que les han permitido explorar y conservar la diversidad biológica de sus territorios), y la flexibilidad política de sus discursos. En consecuencia, los pueblos indígenas reclaman que la contribución de sus culturas al mundo es el respeto que tienen hacia el medioambiente (Ulloa, 2001). Estos dos procesos —ecologismo e indigenismo— comparten muchas características, lo cual permite a las comunidades indígenas consolidarse como *nativos ecológicos*, lo que a su vez ha hecho posible su inserción dentro de la ecopolítica global (Ulloa, 2003). Las propuestas ambientales de las comunidades indígenas se basan en cuatro ejes principales: la relación entre la cultura y el territorio, la autonomía y la autodeterminación, el desarrollo de planes de vida y la seguridad alimentaria.

Las comunidades indígenas y sus vínculos políticos transnacionales han contribuido a formar una sociedad civil global que, igualmente, ha impactado a la sociedad civil local. Así, las dinámicas de los movimientos sociales indígenas se caracterizan por enmarcarse en un

fenómeno de globalización-localización (Santos, 2001): abanderan luchas maximalistas y globalizantes —abogando por aspectos como la cultura, la conservación y la calidad de vida— cuyo carácter global, no obstante, toma lugar en momentos espacio-temporales “locales”, en los cuales la lucha se localiza y, por eso, lo cotidiano deja de ser un ámbito menor para pasar a ser el campo privilegiado de la lucha por un mundo y una vida mejores. Es en este sentido que desde lo local se proponen nuevas formas de interacción entre el conocimiento, la naturaleza y la gestión de los recursos naturales, las cuales se enmarcan en contraglobalizaciones y contragobernabilidades (Ulloa, 2003).

Diferentes análisis tienen en común el reconocimiento de que los movimientos de las comunidades indígenas han estado utilizando escenarios políticos que se han abierto recientemente para construir coaliciones que los han introducido a una larga tradición política nacional e internacional. Esta es, pues, una excelente piedra de toque para analizar cómo es posible la organización de nuevas formas y ejercicios de ciudadanía desde lo colectivo. La novedad de estos movimientos radica también, entonces, en que por un lado muestran los límites de la modernidad, incluidos los límites del Estado moderno —critican la separación absoluta entre los ámbitos económicos y políticos, la regulación social capitalista, la destrucción medioambiental, los “derechos universales del hombre”, entre otras— y, por otro, empiezan a diseñar proyectos alternativos a la modernidad, ensanchan las formas de entender la democracia y apuestan por diversidades identitarias que desbordan las lógicas binarias.

2.4 REIVINDICACIÓN IDENTITARIA EN LOS ESPACIOS Y EL TERRITORIO

En los últimos treinta años, las luchas más avanzadas han sido protagonizadas por grupos subalternizados que habitan lugares remotos (periféricos) de los Andes, las selvas amazónicas y las costas. Sus rei-

vindicaciones son muchas veces presentadas en sus lenguas, de las cuales emergen las nociones de dignidad, autogobierno, buen vivir, Madre Tierra y territorio (Santos, 2010). El concepto de territorio surge aquí no como elemento de control y dominación externo, sino como un instrumento contrahegemónico y anticolonial de supervivencia y reivindicación identitaria. Como ejemplo, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas considera el territorio como un “espacio con propia estructura organizativa, según los usos y costumbres, tradiciones, idioma, cosmovisiones, principios y valores; donde se ejercen los ‘derechos y responsabilidades comunitarios’”, y resalta que “mientras no se resuelva la deuda histórica que los Estados tienen con los pueblos indígenas originarios, [devolviéndoles sus] territorios ancestrales, ningún enunciado o declaración a favor [suyo] tendrá sentido” (Huanacuni Mamani, 2010). El territorio tiene un significado específico, un valor simbólico que identifica, une y determina las dinámicas sociales de grupos como los indígenas.

Tanto en la práctica política como en escenarios académicos, los conceptos de espacio y territorio fueron en su momento tomados como sinónimos, al ser considerados como contenedores inmóviles y permanentes de las relaciones sociales, desprovistos de significado o trascendencia social y política (Gómez Montañez & Delgado Mahecha, 1998). Ahora bien, desde las últimas décadas del siglo xx se empieza a resaltar que ambos elementos, a pesar de ser campos semánticos traslapados, no se constituyen como conceptos absolutos, ni mucho menos neutros (Lefebvre, 1991). Por el contrario, empiezan a tenerse en cuenta elementos socialmente construidos que sirven como herramientas no solo de análisis, sino de acción. Es en este sentido que espacio y territorio, y las dinámicas derivadas de ambos, son ahora considerados formas creadas en las relaciones sociales. Se constituyen, además, como “la esencia de la espacialidad de la vida social. [...] son formas creadas socialmente; no son meros vacíos, y son el producto de la instrumentalidad de espacio/poder/saber, que provee las bases para espacializar y temporalizar el funcionamiento del poder” (Soja, 1989, citado en Gómez Montañez & Delgado Mahecha, 1998, p. 121).

A partir de la introducción de la teoría crítica eurocéntrica (marxismo heterodoxo) se empieza a entender la importancia de considerar al *espacio* como una construcción social, con especial énfasis en su papel en el desarrollo y la transformación de la vida social. El espacio se puede entender, entonces, a la vez como el contenedor y el contenido de las relaciones sociales, que son infinitas y están en constante transformación. Así, se resalta la existencia de múltiples espacios (no solo concretos y materiales, sino subjetivos, ideológicos, y vividos, percibidos y concebidos) y sus modalidades; espacios que se moldean y transforman con respecto a su organización teniendo en cuenta las prácticas dominantes en ese momento en las relaciones sociales (Lefebvre, 1991). Bajo esta lógica, varios autores han afirmado categóricamente que la organización del espacio es central a la estructura y funcionamiento de las relaciones de producción capitalistas (Harvey, 1990; Lefebvre, 1991), aunque también se reconoce que cada sociedad tiene su propia concepción de “espacio”, al ser este, precisamente, un elemento en constante construcción.

Por otro lado, cabe resaltar la idea de que existen espacios heterogéneos dentro de un mismo lugar, una *heterotopía* al estilo foucaultiano (Foucault, 1967). Esta noción centra la atención en las relaciones de poder: la existencia de diferentes espacios en un mismo lugar nos lleva a considerar que es esta lucha constante entre diversos poderes la que determina la organización social. Por su parte, la noción del *tercer espacio* (Bhabha, 1994) nos lleva a resaltar el hecho de que esta multiplicidad de espacios también crea una condición cultural en la cual se filtran influencias tanto de la cultura o las prácticas dominantes como de las subalternizadas; espacios ambiguos de encuentros y desencuentros donde se superponen también las múltiples identidades y lealtades que componen a los seres humanos (Sen, 2006).

En el espacio se constituyen y superponen diferentes territorialidades (mundiales, nacionales, regionales y locales) con valoraciones y actitudes diferentes, que generan relaciones de complementación y cooperación, pero también de conflicto. El *territorio* se constituye como la expresión de la espacialización del poder y de las relaciones

de cooperación o conflicto que se derivan de este (Gómez Montañez & Delgado Mahecha, 1998). El territorio no es solo el marco espacial del dominio de un Estado, sino también el escenario de las relaciones sociales de poder o posesión que tienen lugar en él. Bajo esta lógica, el concepto de “territorio” está relacionado con la idea de dominio o gestión dentro de un espacio determinado por parte de un Estado, un grupo o individuo. Por eso es que el espacio contiene límites, fronteras, formas de apropiación y de jurisdicción.

La identidad, al igual que el ejercicio de la ciudadanía y la participación política, solo adquiere existencia real a partir de su expresión en el territorio. Ahora bien, la actividad espacial o agencia de los actores en un determinado territorio es diferencial, “y por lo tanto su capacidad real y potencial de crear, recrear y apropiar territorio es desigual” (Gómez Montañez & Delgado Mahecha, 1998, p. 123). Además, al ser socialmente construido, el espacio no es fijo sino móvil y desequilibrado, por lo cual requiere permanentemente nuevas formas de organización territorial. Por otra parte, los procesos asociados con relaciones sociales no solo operan en el territorio, sino en el tiempo. La producción de territorio debe pensarse también a partir de lo que implica la temporalidad, es decir, desde el cambio constante, la movilidad y la incertidumbre.

2.5 LAS SUBJETIVIDADES EN LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Ahora bien, si los movimientos sociales deben concebirse como lugares de resistencia (utópica) frente a los dispositivos de poder, también es necesario entenderlos como lugares donde se recrean relaciones de poder. Se deben asumir los movimientos sociales como héroes, pero también como antihéroes de la acción colectiva (Flórez Flórez, 2010). Retomando a Mouffe (1993), quien rescata la doble raíz etimológica de la palabra “política” —por un lado, “vivir conjuntamente” (*polis*)

y, por el otro, “lo polémico” (*polemos*)—, convendría distinguir entre la política, entendida como consenso, y lo político, entendido como disenso, para sustentar que los movimientos sociales se mantienen dinámicos en la medida en que dan cabida al disenso como un ejercicio que posibilita la búsqueda del consenso sobre los principios de acción política. Aunque los movimientos logran articular percepciones y discursos colectivos lo bastante fuertes para diferenciarse de otros actores, deben ser lo suficientemente flexibles para no contrarrestar la diversidad que se ubica dentro de ellos.

Esta perspectiva le otorga importancia metodológica al concepto de *redes sumergidas*, propuesto por Melucci (citado en Flórez Flórez, 2010). Se trata de las relaciones que los actores de un movimiento tejen antes, durante y después de la acción política, y que marcan las rutinas, las dinámicas, las discusiones y las decisiones. Ubicarnos en estas redes nos permite entender que los movimientos son complejos y heterogéneos, y que sus contradicciones y conflictividades no necesariamente conducen a crisis aniquiladoras. Bajo esta lógica, las dinámicas colectivas se deben también a los disensos que existen dentro de los grupos sociales, a sus antagonismos residuales —los cuales persisten después de dar prioridad estratégica a la identidad, a partir de la cual se configura la acción colectiva—, que paradójicamente pueden llegar a potenciar la capacidad grupal de lucha. Se asume así el cofuncionamiento de las lógicas de la equivalencia y la diferencia que un grupo pone en juego para que sus prácticas lleguen a ser hegemónicas (Laclau & Mouffe, 1997).

Esta línea de análisis puede ser ampliada a partir de Deleuze y Guattari (1987), quienes proponen que las asimetrías de poder no solo se presentan a una escala macro, sino que también se reproducen a una escala micro, por la propiedad que tiene el poder de circular de una escala a otra. Estos autores recalcan que el poder no solo tiene un componente *molar*, a partir del cual se codifican y centralizan las múltiples diferencias sociales en categorías binarias y abstractas —etnia, género y clase, entre muchas otras, como lo hace el Estado—, sino que además tiene un componente molecular, que opera a escala micro en

el momento en que se recrean y perpetúan esas macrocategorías en la vida cotidiana y en espacio-tiempos particulares.

La identidad de un movimiento no se construye solo a partir de las diferencias que este establece hacia fuera (con respecto al Estado y otros movimientos sociales u organizaciones, por ejemplo), sino también a partir de las diferencias que existen en su interior. Así, “la identidad colectiva es continuamente hecha y deshecha, implica un constante proceso de sujeción a ella, un proceso de reafirmarla, pero también, de des-sujetarse, de redefinirla, de negarla, de desestabilizarla” (Flórez Flórez, 2010, p. 185). Así, se comprenden los movimientos sociales indígenas como lugares de resistencia frente a diferentes dispositivos de poder, pero también como lugares donde se recrean otras relaciones de poder, donde se reconoce la diferencia como un elemento constitutivo de la identidad.

Igualmente, Mouffe (1993) reconoce que la construcción de la identidad se basa en un inevitable ejercicio de poder que impide la armonía y la coherencia, de modo que, junto con Laclau (1997), sostiene que hablar de identidad también supone hablar de *posiciones de sujeto*. En similar sentido al propuesto por Bourdieu sobre las “clasificaciones grupales”, estos autores proponen que la identidad es un producto contingente de la inscripción del sujeto/agente dentro de un orden hegemónico. Este, al ser producido históricamente, nos conduce a una comprensión antiesencialista (desprovista de características esenciales o atributos inmanentes) y relacional de la identidad, y a entender que en el ámbito micro las tensiones son el resultado de la ocupación, de manera simultánea y contradictoria, de distintas posiciones de sujeto.

Para profundizar en este aspecto, los feminismos de frontera refuerzan la importancia de recuperar la noción antiesencialista de la identidad, y su relación con otros conceptos de la psicología, como el yo, la experiencia, la pasión y la memoria, entre otros. La importancia de las *subjetividades* irrumpe en el análisis. Estas, siguiendo premisas posestructuralistas, evidencian que la identidad es un producto de procesos no acabados que se configuran en complejas estructuras dis-

cursivas y extradiscursivas. Bajo esta perspectiva de análisis, los sujetos de los movimientos sociales son *sujetos de deseo*, que transitan entre los sujetos de derecho —igualdad y consenso— y los sujetos identitarios, a quienes les urge salirse del orden para forzar *otros espacios* de reconocimiento. Al entrelazar subjetividad y deseo se está resaltando que en los movimientos sociales se mueven pasiones y emotividades, pero también, una vez más, que el poder circula en estos a partir de un modelo paradójico según el cual ni el poder determina de manera unilineal al sujeto ni este al poder. Dicho en términos de Butler (2001), para empezar a existir,

... para comenzar a ser sujetos, necesitamos reproducir los deseos que ofrece la estructura simbólica y material que precede nuestra existencia (en este sentido, el poder determina al sujeto); así, el sujeto emerge gracias a que el deseo corre en la misma dirección del poder; el sujeto emerge por el sometimiento al poder, porque para ser debe desear poder. Pero ese deseo de someterse al poder no lo condena; ese deseo puede, pero no tiene que significar subordinación al poder. Mucho menos que la salida sea darle la espalda al poder (fuga pura). Si en el camino queremos existir mejor en el mundo, habrá un momento en el que el sujeto intentará mover los límites de inteligibilidad de esos deseos. No romperlos, ni olvidarlos, sino moverlos. Es el instante en que [el] sujeto determina al poder (citado en Flórez Flórez, 2010, p. 230).

De esta manera, se propone que la constitución de la identidad es un continuo e inacabado proceso de acercamiento y distanciamiento del poder, instalado este en la tensión agencia/estructura. Los movimientos sociales indígenas logran gestionar esto a partir de tácticas de des-sujeción, es decir, prácticas cotidianas que activan un sistemático y leve proceso de apertura y cierre de los límites que definen las percepciones y los discursos políticos del movimiento, de atarse y a la vez desprenderse de la identidad en torno a la cual se articula la resistencia.

2.6 CLAVES FINALES SOBRE PODER Y AGENCIA

El concepto de *poder* ha permeado cada apartado de este capítulo, mostrándose así fundamental para el análisis y la comprensión del estudio de caso de esta investigación. Sin embargo, la analítica del poder presentada por Foucault (1984) durante las décadas de 1960 y 1970, y la presentada por el colombiano Múnera (2005) dan unas claves finales para entender este concepto y su relación con el agenciamiento en el contexto de grupos sociales subalternizados.

Durante las últimas décadas del siglo xx, los estudios foucaultianos sacudieron las nociones del poder que desde la derecha o la izquierda argumentaban a favor de una visión humanista del sujeto. Foucault propuso una redefinición radical del poder, al mostrar su dimensión productiva y no solo represiva; al concebirlo no como una propiedad que se detenta, sino como una práctica que se ejerce y, por último, como una relación inmanente y no trascendente. En vez de ver el poder como resultado de la capacidad económica (recursos) o discursiva de ciertos grupos, esta perspectiva sugiere que el poder está construido a partir de una alineación específica de aspectos económicos, ideológicos y fuerzas organizacionales que presentan una estabilización social (Levy & Evan, 2003). Ya que el poder consiste en trazar líneas estratégicas que cierran espacios de libertad, su revés es la resistencia⁷: donde hay poder existe la resistencia y viceversa, ya que este existe en función de puntos de resistencia que dan cabida a prácticas liberadoras.

Para ahondar en esta perspectiva, la dimensión productiva del poder nos permite entender que el Estado es productor sistemático

⁷ Introduzco, además, la noción de resistencia para distinguir entre poder y dominación. Cuando se restringen las prácticas de resistencia, estamos hablando de dominación, siendo esta la situación donde las posibilidades de subvertir las relaciones asimétricas son pocas (Foucault, 1984).

de diferencias sociales y, la vez, creador de verdades que legitiman dichas diferencias. Por su parte, la idea de que el poder es inmanente nos obliga a ubicarlo en el plano de la vida cotidiana —lo que se llamará *biopolítica*—, que, como se ha señalado en anteriores apartados, es donde se crean y reproducen las relaciones de poder. Ahora bien, ya que el Estado (moderno y democrático) es un regulador del poder, más que un factor de dominación, la resistencia a él no implica una lucha de suma cero en la cual el ganador puede instaurar un nuevo contrato social, ni mucho menos un momento en el que desaparezcan las relaciones de poder a partir de una revolución. No hay una única forma de resistencia, ni es posible, entonces, que desaparezcan las relaciones de poder.

Por otro lado, es importante señalar la dicotomía que encierra el concepto de “poder” (como *fuera* o como *consenso*) para resaltar la necesidad de no tomar sus dos partes como alternativas excluyentes, sino como una tensión constitutiva de dicho concepto, que permite comprender la naturaleza dinámica del poder en las sociedades contemporáneas. Así, Múnica (2005, p. 46) expone que

... [la] fuerza pura sin el consenso, tiende a desgastarse en una guerra ininterrumpida, que en el devenir destructivo de la violencia hace imposible la existencia social. El consenso puro sin la fuerza se pierde en la utopía racional del hombre sin deseo; la unidad y homogeneidad de sentido que presupone llama necesariamente a una nueva batalla por la diferencia, en la cual la fuerza recobra su protagonismo. Por consiguiente, la política no puede prescindir del ir y venir entre la fuerza y el consenso, pues en él van tomando forma las diferentes manifestaciones del poder.

Es precisamente dentro de este *continuum* que se enmarcan las diferentes concepciones de política o, visto de otro modo, las diversas fuerzas que deben conformar los consensos sociales. Se entiende así el consenso como la confluencia de fuerzas para alcanzar objetivos comunes. Por “fuerza” se entiende la movilización de las energías

sociales contenidas en las regulaciones institucionales/estructurales y en los recursos que permiten la praxis del poder de los actores —la acción política de los grupos sociales— dentro de ámbitos decisionales y de producción de sentido en los cuales se disputa la orientación de las relaciones sociales (Múnica, 2005). Teniendo en cuenta estas definiciones, en la configuración del poder se privilegia la praxis social, la existencia de una capacidad para la realización de acciones o interacciones, que conforma un conjunto de prácticas estructuradas y también estructurantes del fenómeno social. Al ser estructuradas transforman facultades concretas en acto político, y al ser estructurantes impulsan acciones que facultan y posibilitan otras acciones.

Por último, los conceptos de agencia y poder se relacionan de manera estrecha con el consenso y el disenso en el accionar político de grupos subalternizados. El marxismo heterodoxo, que tiene como uno de sus expositores relevantes a Gramsci, aporta elementos para entender la agencia⁸ de un grupo subalterno en un contexto donde tiende a primar una visión hegemónica de desarrollo. Según esta tradición, la agencia se relaciona de manera estrecha con la noción de hegemonía, ya que es ante esta fuerza que las personas tienen o no capacidad para actuar. Según Gramsci (1971), un *bloque histórico* (configuración específica de grupos, estructuras económicas y superestructuras ideológicas) ejerce una *hegemonía* que descansa, entre otras cosas, más en un consenso amplio basado en coaliciones y compromisos (cultura e ideología) que en el control coercitivo de una pequeña élite. En el mismo sentido, para Laclau y Mouffe (1997) la agencia política deja

⁸ El concepto de agencia desarrollado por Gramsci (1971), bajo el cual se resalta la conciencia democrática de los ciudadanos para convertirse en agentes activos de su propia liberación y de la construcción de prácticas emancipadoras para la transformación de la sociedad y del Estado, debe distinguirse del planteado con el mismo vocablo por Sen (1985), bajo el cual se expone que la 'libertad de agencia' es lo que una persona es libre de hacer y alcanzar cuando busca la realización de las metas o los valores que considera importantes.

de situarse en la lucha de clase y se acepta la naturaleza múltiple de los antagonismos.

Por lo tanto, la *hegemonía* es contingente e inestable, pues depende de la capacidad de agencia de diferentes grupos para retar las posiciones “superiores”. Desde esta perspectiva, los grupos sociales, pueden llegar a utilizar el dominio de la ideología como un escenario clave de confrontación política entre diferentes ideales y grupos sociales. Estos agentes no están por fuera de la “ideología” dominante; por el contrario, están ubicados en las contracorrientes que se mantienen en las márgenes de los espacios políticos y culturales. Los movimientos sociales negocian permanentemente los sentidos hegemónicos del “sistema-mundo europeo/euro-norteamericano, capitalista/patriarcal, moderno/colonial” y al mismo tiempo, paradójicamente, el despliegue de diferentes estrategias de transformación es constante, al punto que desbordan este sistema.

La razón y la palabra textual no quedan por fuera de esas luchas por ganar espacios de poder; luchas que se dan en los márgenes, en los espacios/territorios que tienen como protagonistas a los grupos subalternos. No obstante, estas luchas, tal como las identidades de quienes las desarrollan, son antiesencialistas y se dan también entre los aliados o los contrarios cercanos o distantes a ellas. Es así como quienes hablan, investigan, disienten o apoyan las diferentes formas de resistencia forman parte de ellas. Ahí me ubico como investigadora, en la frontera polémica, en la complicidad subversiva con el sistema, marcada por mis propias y contradictorias posiciones políticas, pero junto a determinadas prácticas y formas de entender el mundo.

REFERENTES METODOLÓGICOS: UNA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA SOBRE LA DIMENSIÓN HUMANA DEL DESARROLLO

Abordar reflexiones abiertas sobre conceptos como el “giro decolonial”, la “identidad” y los “discursos colectivos”, la “participación política” y el “movimiento social indígena”, y la “agencia” de la que pueden dar cuenta estas comunidades implica avanzar en una investigación cualitativa que integra dos estrategias: la *investigación narrativa*, que se construye a partir de las experiencias de las comunidades indígenas expresadas en los “relatos” vividos y contados por las personas en historias de vida, entrevistas, discusiones entre grupos y documentos escritos por las mismas comunidades u otros actores relevantes (Creswell, 2013); y el *estudio de un caso*¹ contemporáneo, que considera la percepción y las formas de organización y de participación política de las comunidades indígenas kamëntza e inga ante un megaproyecto de desarrollo como la construcción de la variante San Francisco-Mocoa, en el marco de la Iirsa (Silverman, 2005). La propuesta metodológica de esta investigación incluye el análisis de información primaria, recolectada a partir de un trabajo de campo en el cual se observaron

¹ En esta investigación se llevará a cabo un estudio de caso de tipo *instrumental*. En este tipo de estudio de caso, el investigador se enfoca en una problemática y luego escoge el caso que mejor le permite entender e ilustrar el problema (Stake, 1995, citado en Silverman, 2005).

los conceptos anteriormente expuestos (*inferencia deductiva*). También incluye información secundaria (análisis documental), con el propósito de tener en cuenta tanto la *ética* (la forma en que percibo el problema como investigadora) como la *émica* (la forma en que las comunidades indígenas lo continúan percibiendo) durante el proceso de investigación (Chambers, 1994).

A lo largo de este estudio, se buscó recoger las perspectivas de las comunidades indígenas

... expresándolas en términos, no de saber experto, sino de saberes cotidianos: las *señales de cambio*. Se trata de un método por medio del cual se busca identificar las transformaciones y dinámicas que los diferentes grupos involucrados en la puesta en marcha de los programas, proyectos y políticas identifican como resultado de los mismos [sic] (de los programas, proyectos y políticas) y las formas en que estos valoran tales cambios (Serje, 2010, p. 19).

En este sentido, se recogieron las percepciones, reflexiones, propuestas, cuestionamientos y valoraciones que las comunidades indígenas inga y kamëntza tienen sobre el megaproyecto y sus efectos en su visión de futuro. Esto permitió, igualmente, establecer de manera *inductiva* la posición que tienen estas comunidades sobre el concepto de desarrollo².

Las variables dieron cuenta, entonces, de estas *señales de cambio* (pasado, presente y futuro) que han tenido y pueden tener lugar en el contexto cercano de las comunidades indígenas. Los impactos sociales

² En el diseño de esta investigación se determinó la importancia de identificar la posición de las comunidades indígenas kamëntza e inga sobre el concepto de desarrollo como un punto de llegada —a partir de una inferencia inductiva—, y no como un concepto previamente definido. Esto con el propósito de no centrar la investigación a partir de un concepto que para estas comunidades tiene una connotación polémica, ya que es entendido de manera unívoca como “desarrollo económico”.

y culturales que traen consigo megaproyectos como los de la Iirsa se pueden situar en diferentes dimensiones de la vida social.

Un primer ámbito de análisis es el de las formas de articulación de estas comunidades indígenas a la economía local (para garantizar su sustento), regional, nacional y global, de modo que

... [es] importante señalar que la producción del sustento (*livelihoods*) no puede reducirse a las cadenas de producción, comercialización y consumo de bienes y servicios dirigidos al mercado moderno, sino que hace referencia a la globalidad de las actividades y formas de organización y relaciones sociales que las hacen posibles (Serje, 2010, pp. 15 y 16).

Un segundo ámbito de análisis es el ambiental, el cual incluye las relaciones que tienen las comunidades indígenas con los ecosistemas que se encuentran en el territorio.

El tercer ámbito de análisis es el que incluye los procesos de organización social y participación política, y las relaciones con diversos grupos o actores sociales. Todo lo anterior a partir de comprender cómo las comunidades interpretan la vida cotidiana e intervienen en ella.

Para avanzar en esta investigación se utilizaron tres tipos de métodos: entrevista a profundidad, entrevistas semiestructuradas y discusiones en grupos focales³. Cada método fue utilizado para interactuar con un grupo poblacional específico (autoridades tradicionales; autoridades políticas, líderes indígenas y funcionarios gubernamentales, y jóvenes indígenas, respectivamente), con el propósito de incorporar en la investigación sus múltiples visiones. Son variadas las dificultades que se presentan en el momento de establecer una discusión abierta con comunidades indígenas sobre los elementos que caracterizan las transformaciones que se han dado en territorio

³ Las actividades de investigación en el territorio tuvieron lugar en dos oportunidades: marzo 6-10 y 23-26 del 2013.

que les pertenece. Desconfianza y desesperanza ante procesos de investigación que no tienen implicaciones claras en la toma de decisiones o en la formulación de políticas públicas que los beneficien directamente, son dos características que siempre están presentes en este tipo de procesos. De manera particular, mi desempeño laboral⁴, que ha estado relacionado en los últimos años con proyectos que buscan aprender de, y proteger la forma de vida indígena y su relación con la naturaleza, me permitió trabajar de la mano con un líder indígena kamëntza, quien actuó como *gatekeeper* o filtro en el proceso de identificación y acercamiento a autoridades tradicionales y a informantes claves.

Para lograr una aproximación a los relatos de las autoridades tradicionales indígenas (mamas y taitas) se llevaron a cabo dos entrevistas a profundidad a partir de *historias de vida*. Las historias de vida son relatos autobiográficos, desarrollados con el propósito de recoger información sobre acontecimientos y sobre las valoraciones que los entrevistados han hecho de estos y de su propia existencia. Estos relatos son de tipo cruzado, “porque buscan generar una perspectiva polifónica y multicéntrica, al recoger distintos relatos respecto a una experiencia en común, en los cuales las personas entrevistadas han sido, a la vez, observadoras y protagonistas” (Flórez Flórez, 2010, p. 144). Más que buscar veracidad en la narración de los acontecimientos, esta técnica abrió un espacio intencional y formal para que los protagonistas resignificaran su pasado, dándole prioridad a la recreación de procesos sociales a partir de la experiencia de quienes contaron su historia (Osorio, 1994. Ver anexo 1). A lo largo de estos relatos autobiográficos, dos autoridades de la medicina tradicional discutieron, desde sus hogares, diferentes acontecimientos que transformaron en términos territoriales, sociales, políticos y económicos la región. Historias sobre el desarrollo del camino real conocido como el Camino de Sachamates y su utilización como canal de comunicación con las

⁴ Durante cuatro años trabajé en la ONG International Amazon Conservation Team.

comunidades indígenas del Medio y Bajo Putumayo, y del Caquetá, sobre el cuidado de la naturaleza en el Alto Putumayo y la reacción de esta ante el paso de las comunidades por el camino de herradura, la progresiva construcción de los municipios y de la actual carretera San Francisco-Mocoa, y los cambios territoriales y sociales que esto trajo consigo, fueron algunos de los elementos mencionados. La utilización, en gran medida, de palabras de la lengua kamëntza, aunque posteriormente dificultó el análisis de la información, les permitió a estas autoridades tradicionales expresar sus percepciones y valoraciones sobre las señales de cambio en el territorio en el marco de un escenario caracterizado por la confianza y la franqueza.

Las *entrevistas semiestructuradas* se llevaron a cabo a partir de un diálogo abierto con pocas pautas, en el que mi función básica fue la de estimular a la persona entrevistada a que explicitara, de la forma más amplia posible, las referencias a terceras personas, ambientes y lugares concretos en los que transcurren los distintos episodios biográficos con respecto a la construcción de la variante San Francisco-Mocoa (Flórez Flórez, 2010). Estas entrevistas se llevaron a cabo con *informantes claves*⁵ que tienen conocimiento sobre el tema tratado o que han intervenido de manera directa en procesos de participación política, en este caso autoridades políticas, líderes indígenas y funcionarios gubernamentales (ver anexos 1 y 2). El escenario propicio para realizar las entrevistas fueron las casas de los cabildos indígenas, en las cuales se llevó a cabo un diálogo técnico con respecto al proceso de identificación de la necesidad de construir la variante San Francisco-Mocoa, los aspectos negativos y positivos de esta construcción, la organización de las comunidades indígenas en torno a una posición común hacia el proceso, el desarrollo de alianzas estratégicas con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, las acciones jurídicas y de participación política que se han adelantado para contrarrestar su

⁵ Se llevaron a cabo ocho entrevistas con nueve informantes claves de las comunidades indígenas inga y kamëntza.

construcción y la incidencia de estas acciones, y la visión de desarrollo que tienen para su territorio.

Por último, se desarrollaron discusiones en grupos focales⁶ a partir de una convocatoria abierta a jóvenes y líderes indígenas de entre veinte y treinta años de ambas comunidades. La idea era que participaran en actividades que les permitieran a su vez avanzar en talleres de formación en “Herramientas cartográficas y lecturas del territorio”. Se articularon esfuerzos con el Grupo Estepa, en el cual participan geógrafos y profesionales de otras disciplinas de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, los cuales desarrollan ejercicios con comunidades en temas de espacio, tecnología y participación. Estos talleres incluyeron actividades como la elaboración de la línea del tiempo sobre la historia de la ocupación del valle del Sibundoy, el análisis de los cambios en el uso del suelo en las últimas décadas, un recorrido por el territorio, el desarrollo de cartografía social, el manejo de GPS (*Global Positioning System*), entre otras.

Durante estos grupos focales se llevó a cabo el mapeo cultural o cartografía social con representantes de ambas comunidades. El mapeo cultural es un instrumento cartográfico que tiene como objetivo demostrar aspectos culturales, históricos, económicos y de ordenamiento territorial de un territorio considerado tradicional de una o varias comunidades (Amazon Conservation Team, 2008). Contribuyó a la comprensión de los problemas sociales y ambientales, en la medida en que los participantes sistematizaron el conocimiento de su territorio y sus prioridades sobre este ilustrando en mapas los elementos/componentes más importantes de la vida en comunidad, así como los conflictos sociales, ambientales y culturales presentes en dicho territorio (ver anexo 3). La elaboración de la cartografía social también contribuyó a desarrollar la visión de futuro que tienen los

⁶ Las discusiones con grupos focales son diseñadas para obtener opiniones/percepciones sobre un tema definido, en un ambiente propicio para esto (Krueger & Casey, 2000).

jóvenes indígenas para su territorio, ahondándose en el concepto de desarrollo y en las diferentes características que este debe incorporar. La comprensión de los problemas sociales y ambientales que presenta el territorio, así como la identificación de elementos propios de la cultura indígena en un territorio considerado tradicional, fue un ejercicio que implicó mayor discusión y apropiación del tema por parte de los participantes. Por el contrario, analizar el territorio en términos prospectivos demostró ser un proceso de menor interés y, por consiguiente, de mayor dificultad. Paradójicamente, el *futuro* es un elemento alejado de las conversaciones de los jóvenes kamëntza e ingas.

MEGAPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA:
LA REPARICIÓN DEL DISCURSO ESPACIAL
Y TERRITORIAL DE LA CONQUISTA
EN LA AMAZONÍA COLOMBIANA

*Han comprendido que para desempeñar su misión y librar
de su esclavitud a tantos miles de salvajes no queda otro arbitrio
que romper los Andes y... los Andes caen hechos añicos y ceden
al empuje de estos héroes de la civilización.*

Periódico *La Sociedad*¹

Para avanzar en un entendimiento de la capacidad de las comunidades indígenas para incidir en su propia visión de futuro y articularla con la visión de desarrollo planteada por la comunidad internacional y la política pública nacional, se hace pertinente entender el entorno radicalmente nuevo que se plantea a partir de la construcción de la variante San Francisco-Mocoa en el marco de la Iirsa. La adopción de un modelo de desarrollo como el planteado por dicha iniciativa —desarrollo a partir de la gestión de infraestructura, que privilegia la conexión internacional sobre la nacional, comprendido en una dimensión geopolítica que tiene en cuenta las relaciones de poder globales que dinamizan y le dan un nuevo valor a espacios como la Amazonía— ha reencauchado un discurso espacial particular que le

¹ Citado por Vilanova, 1947, I: 235, en Bonilla, 2006, p. 162.

permite al capital operar como si en las diferentes espacialidades no existiese más que lo que le interesa a la *Empresa*. Es esta misma idea la que está implícita en el acto central de la Conquista: la negación de la historia de quienes ocupan el respectivo territorio, de sus puntos de vista, de la existencia de dinámicas locales de producción, distribución y consumo, así como de cosmovisiones particulares que generan organizaciones territoriales distintivas y relaciones de poder particulares.

4.1 INFRAESTRUCTURA PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN AMÉRICA LATINA

Varios autores concuerdan en afirmar que desde la década de los setenta, el modelo económico a nivel global empieza a dar un giro que Joseph Stiglitz ha resumido como *la supremacía del mercado con fervor ideológico* (2000). Este modelo, el cual se ha ido imponiendo de manera paulatina pero dominante a nivel mundial (con particular ímpetu en los países de América Latina), ha reafirmado que el libre mercado es el mejor regulador de las actividades sociales. Al considerar que el discurso económico se sustenta en la ciencia, imaginada de manera errónea como neutral y objetiva y no como una más de las “formaciones simbólicas diseñadas alrededor de ideales políticos” (Peet, 2002, p. 2), este discurso hegemónico sostiene que las políticas económicas deben orientarse a fortalecer la competitividad nacional a partir de una inserción al mercado global, lo cual favorece las iniciativas de comercio exterior liberalizado y con amplia participación del sector privado. Lo anterior, en un contexto donde “solamente los mercados mundiales ofrecen la escala, el grado de competencia y el acceso a cambios tecnológicos necesarios para producir eficientemente la inmensa mayoría de bienes” (Gallup et ál., 2004, p. 42). Bajo esta perspectiva, se ha vuelto a considerar que la adecuada cantidad y calidad de la infraestructura es el factor que determina la capacidad de

los países de competir en los mercados internacionales (BID, 2004). En este contexto se enmarca el desarrollo de la Iirsa.

Desde finales del siglo pasado, América Latina se alineó con una modalidad explícita que plantea una nueva ocupación espacial, una supuesta “reterritorialización” del capital y la población. En el contexto de la globalización, las obras de infraestructura, antes consideradas como parte de una estrategia de integración nacional de territorios “aislados” y de acceso a áreas turísticas y nuevos recursos naturales para el comercio internacional, “cambian de escala en la planificación pasando de regiones subnacionales articuladas a iniciativas subcontinentales que aprovechan la infraestructura preexistente, la redimensionan en términos jurídicos y administrativos nacionales, la modernizan (clúster [sic] tecnológicos, aduanas virtuales, etc.) y amplían” (Rodríguez, s. f.).

Es así como este rediseño o *reajuste* espacial (Harvey, 2003) considera que el éxito territorial se alcanza con la inserción en la economía global, para lo cual se requiere atraer inversión privada, motor de la economía actual, mediante la modificación de los marcos regulatorios (regímenes laboral y medioambiental). No obstante, bajo esta lógica económica se continúa privilegiando la competitividad de las empresas y no la competitividad territorial, ya que las corporaciones multinacionales y la política gubernamental son las que determinan las decisiones de localización, y no el capital territorial, ni los aspectos sociales y culturales de un territorio, ni la demanda ni la competencia local, regional o nacional².

² Contrapuesta a la lógica funcional que caracteriza la Iirsa, la *perspectiva territorial* de la competitividad adoptaría para el análisis una perspectiva sistémica que reforzaría los vínculos y relaciones entre la actividad económica y el ambiente local, donde el desarrollo depende, entonces, fundamentalmente de variables endógenas. Esta perspectiva reconoce que los territorios son diversos, sensibilizando las respuestas en materia de políticas públicas —de abajo hacia arriba— y valorizándose las capacidades y recursos propios. Se pone de relieve el carácter localizado de los factores que apalancan el proceso de desarrollo, donde se habla del carácter estratégico que en

Según un estudio del Banco Mundial, para el caso de América Latina y el Caribe cada punto porcentual en el crecimiento económico se asocia con un crecimiento proporcional en la infraestructura (BID, 2004). No obstante, aunque el mejoramiento de la calidad de vida de personas y grupos sociales como el indígena efectivamente requiere de una infraestructura adecuada que permita acceso a bienes y servicios, algunos estudios dan cuenta de la dificultad de relacionar de manera causal la existencia de infraestructura con el desarrollo económico de un territorio, si este no es el propósito central e incluso si se restringe este último concepto al crecimiento económico, como lo sugiere el fervor ideológico dominante.

No es claro, entonces, que la inversión en infraestructura se convierta en un factor ineludible para superar problemáticas sociales de acceso a bienes y servicios económicos, políticos y culturales. En primer lugar, pareciera que la infraestructura tiene un efecto positivo en aquellas regiones que tienen un crecimiento económico mayor debido a que las diferentes firmas del sector privado no quieren establecerse en lugares específicos, a menos que “la infraestructura y los servicios ya estén operando bien y que otras firmas también se establezcan. [Por su parte,] la recuperación de los costos de infraestructura no es posible, a menos que esta atraiga un buen número de firmas” (Gallup et ál., 2004, p. 129). En segundo lugar, la construcción de obras de infraestructura no tiene un impacto efectivo a no ser que venga acompañada de otras políticas sectoriales, ambientales, educativas, entre muchas otras, que propicien las sinergias necesarias para avanzar hacia la competitividad territorial y el consecuente logro de indicadores robustos de desarrollo.

el proceso tienen las instituciones, la historia, la cultura y la política local, entre otros aspectos. Así, “[...] el territorio es factor de desarrollo, el cual está socialmente organizado y tiene su expresión en los agentes locales, esto es, en las organizaciones sociales y productivas, en las instituciones públicas, en los actores privados y en el conjunto de la sociedad civil” (Ocampo, 2005).

Las iniciativas continentales de infraestructura actuales están promoviendo la conexión geográfica y de espacios económicos. Entendida la historia del capital como una búsqueda constante de eliminación de barreras espaciales (Harvey, 1990, 2003) y con el propósito de crear condiciones para la continua acumulación de capital a nivel global, el discurso económico propone una articulación espacial vertical tipo “túnel” entre los centros de producción de materias primas y los centros de transformación y de consumo. Lo anterior ha generado un discurso espacial particular, caracterizado por la prevalencia de nodos articulados por canales que a su vez forman redes, lo que permite operar como si en el espacio no existiese más que lo que le interesa a la *Empresa* (por ejemplo, petróleo, minas, grandes centros de consumo) (Sánchez Calderón, 2008).

4.2 UNA PROPUESTA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA PARA COLOMBIA

La propuesta de *desarrollo* en Colombia, directamente relacionada con proyectos de infraestructura en el país, debe ser comprendida en el marco más amplio del fervor ideológico por el mercado, en el cual se inserta la lirsá, que es parte de una política de articulación del país con el resto de América Latina³. Los proyectos de mejoramiento de la infraestructura se desarrollan con el propósito de incidir en la “integración vertical” entre los diferentes espacios del subcontinente, tal como lo explicita el documento *Visión Colombia 2019*, en el cual de lo que se trata es de “aprovechar las oportunidades de la globalización e integrar al país con el mundo, en general, y con el eje Panamá-Puebla y

³ Esto lo muestra claramente la visión de largo plazo del gobierno colombiano en su documento *Colombia 2019*, donde se plantea que ha habido un error histórico en la economía nacional, pues antes que integrarse a una economía mundial, se ha volcado sobre “el pequeñísimo mercado interno” (citado en Flórez, 2007).

con Suramérica, en particular; con esquemas empresariales eficientes” (en Sánchez Calderón, 2008, p. 13). Los proyectos que se desarrollarán en el país deben comprenderse desde una dimensión geopolítica, teniéndose en cuenta las relaciones de poder globales que dinamizan y le dan un nuevo valor a espacios regionales como el amazónico.

Desde la década de 1990, Colombia se convirtió en uno de los pioneros de la región en adoptar medidas de apertura (ejemplo de esto es el sector agrícola), privatizaciones de servicios públicos y leyes de flexibilidad laboral. Colombia tradicionalmente ha adecuado sus instituciones de manera rápida a los requerimientos externos. Por su parte, la infraestructura se encuentra en la tercera generación de proyectos que desde los años noventa han contado con la participación sistemática y creciente del sector privado. A pesar de estas transformaciones institucionales y políticas, varios documentos oficiales coinciden en afirmar que Colombia aún presenta limitaciones para garantizar su competitividad en el sistema económico mundial, lo cual a su vez ha afectado la actividad empresarial (Consejo Privado de Competitividad, 2013).

Este tipo de proyectos permite caracterizar a Colombia como un espacio geográfico que ha presentado “formidables” obstáculos para la integración del país y la consolidación de una economía nacional que se inserte en el mercado mundial a partir de formas modernas de producción. El “subdesarrollo” del país, para muchos, ha sido producto de la fragmentación y el aislamiento de territorios considerados inhabitados, resultado de las “murallas” constituidas por las tres cordilleras, los llanos y las selvas. Bajo este contexto, uno de los principales “retos” de las últimas administraciones ha sido el de integrar estas zonas a los centros de consumo y al mercado internacional. La forma de intervención privilegiada es la de conectar estos espacios salvajes a la nación —y, por supuesto, al mercado global— a partir de políticas de enclave. Son estas las que constituyen las “*avanzadas del progreso*”, es decir, aquellas empresas de gran envergadura, que han constituido históricamente la punta de lanza y uno de los principales

instrumentos del colonialismo, del desarrollo, y hoy, bajo el nombre de megaproyectos, de la llamada globalización” (Serje, 2011, p. 261)⁴.

La abundancia ecológica y cultural aún presente en esta geografía sin dueño es el principal obstáculo, pero, de igual forma, el principal patrimonio de una nación que continúa en una búsqueda *férrea* de la felicidad (Serje, 2011). Para potenciar este “patrimonio” se ha adoptado una estrategia integral (nuevas inversiones, cambios institucionales y modificaciones en la regulación) que promueve una interconexión multimodal (terrestre, marítima y ferroviaria) en los ámbitos regional, nacional e internacional, que da prioridad a los corredores principales (troncales) que integran centros de consumo y producción (Bogotá, Cali, Medellín, Eje Cafetero) con puertos y pasos de frontera a través de la política de concesiones viales.

Esta situación ha llevado a la formulación de políticas de mejoramiento de los diferentes tipos de infraestructura, que se plasman en documentos como la *Agenda interna general en infraestructura* (Confecámaras, 2005; CGA, 2005), producida por una coalición entre el Gobierno y los gremios; el *Plan estratégico de transporte* del Ministerio de Transporte (Mintransporte, 2003), el *Plan nacional de expansión* de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME, 2004) y los planes nacionales de desarrollo. Al sobrepasar los cuatrienios, la meta queda entonces formulada en *Visión Colombia 2019*.

A esto se suma el hecho de que los objetivos de política planteados a partir del marco institucional colombiano entran a menudo en contradicción, oscilando entre el desarrollo extractivista y la conservación —armonización de la satisfacción de las necesidades básicas de las comunidades locales con el uso racional de los recursos naturales— (Beaufort Camargo, 2010). Así, los esfuerzos político-

⁴ Aunque los análisis sobre los megaproyectos de infraestructura son de reciente data, diversas investigaciones se han desarrollado, las cuales dan cuenta de la negación de las dinámicas sociales y culturales presupuesta en los proyectos de gran envergadura, como por ejemplo los estudios realizados por el Grupo de Investigación Naturaleza y Sociedad de la Universidad de los Andes (Serje, 2010).

institucionales han sido dispersos, en muchos casos resultado de compromisos internacionales mas no de una decidida voluntad política relacionada con el interés nacional y el desarrollo sostenible de las comunidades locales⁵.

Aunque el marco institucional ambiental para la Amazonía colombiana ha tenido como sus principales determinantes los objetivos y los principios que se han acordado en el ámbito internacional —por ejemplo la Conferencia de Río, el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) y el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA)—, y se ha realizado una serie de esfuerzos por incluir estos principios y objetivos en la Agenda 21 para la Amazonía y el Plan de Acción Regional de la Biodiversidad del Sur de la Amazonía Colombiana 2007-2027, en la región opera una institucionalidad ambiental descoordinada y débil en los diferentes niveles, que no ha logrado superar los conflictos en torno al acceso y el uso de los recursos naturales (Beaufort Camargo, 2010). El caos institucional está caracterizado por la superposición y el conflicto jurisdiccional y de competencias entre las diferentes entidades que trabajan en la región. Algunos de los conflictos jurisdiccionales tienen relación con la superposición de políticas de desarrollo y conservación implementadas en las últimas décadas y con el actual ordenamiento político-administrativo de la región (Zárate, 2002).

⁵ Por ejemplo, las políticas públicas del gobierno Uribe Vélez 1) seguridad democrática, 2) confianza empresarial, 3) Estado comunitario y 4) relaciones internacionales basadas en la alianza Uribe-Bush) se constituyeron en el contexto institucional del desarrollo de políticas ambientales y de aquellas con implicaciones relevantes para el medioambiente, lo cual tiene una implicación en la gobernanza ambiental del país. El éxito relativo de la primera administración Uribe, en detrimento del sistema ambiental colombiano, forzó a todas las políticas a responder a los requerimientos de seguridad y crecimiento económico (Palacio Castañeda, 2010). Esto se evidencia en el desarrollo, el deterioro y la debilidad del Ministerio de Ambiente en Colombia durante las dos administraciones del presidente Uribe, teniéndose en cuenta elementos como la agenda institucional de esta entidad, su capacidad y posicionamiento (Mance, 2008).

4.3 LA NEGACIÓN DE LAS DINÁMICAS LOCALES EN PROYECTOS DE DESARROLLO

Bajo el discurso de generar condiciones de desarrollo regional y competitividad nacional, la Iirsa se ha constituido en Colombia como un hecho tal que el factor *población* (los habitantes de las regiones incluidas, con sus complejidades económicas, políticas, culturales y de relación con los recursos naturales) no han tenido una participación, aparte de hacerse referencia a sus números absolutos y su bajo índice de desarrollo humano (Rodríguez, s. f.). Por el contrario, la Iirsa se ha enmarcado en una visión que justifica “sus gentes y sus paisajes como tierras de nadie, como minas sin dueño” (Serje, 2011, p. 271). Esta política pública subcontinental y nacional niega así el territorio, considerado como “el piso más la población, esto es, una identidad, el hecho y el sentimiento de pertenecer a aquello que nos pertenece” (Santos, 2004, p. 80).

El mejoramiento de la calidad de vida, objetivo secundario, se ve supeditado entonces a una mejor inserción a los mercados nacionales, con lo cual se plantea la necesidad de articular estrategias nacionales con otras de carácter regional que permitan tal inserción en este nuevo modelo, hecho que, por “derrame”, se reflejará en un crecimiento económico de los países involucrados (BID, 2000). Aunque esta iniciativa no tiene una temporalidad definida, está desencadenando procesos que incidirán durante las próximas décadas en los grupos poblacionales del subcontinente.

Es esta misma idea la que está implícita en el acto central de la Conquista: la negación de la historia y los puntos de vista de quienes ocupan los territorios. La magia de los paisajes tropicales, descubierta preliminarmente hace ya más de 520 años, vuelve con la misma fuerza ilusoria al considerar a estos territorios como “naturaleza prístina, salvaje y disponible, poblada de seres desechables, que apenas si aparecen como un teatro de sombras” (Serje, 2001, p. 258). Los referentes de la “integración” dejan de ser las comunidades locales o nacionales.

Pasan a serlo las dinámicas locales impuestas que generan grandes transformaciones sociales, culturales, económicas y ambientales en los territorios donde se está llevando a cabo tal integración.

Aumentan entonces las complejidades sociales y espaciales si se toman en cuenta

...la carencia de propuestas de desarrollo a escala incluyentes de pluralidad y [disidencia, y] la ignorancia provocada en pueblos [indígenas] y afroamericanos, rurales y urbanos, para la toma de decisiones territoriales sobre sus recursos sociales y naturales en la construcción de su futuro y como parte de proyectos sociales mayores (Rodríguez, s. f.).

La percepción de las comunidades y culturas en la formulación de iniciativas de desarrollo regional como esta se continúa invisibilizando ante las “bondades” (paraíso económico en una región con infinidad de problemáticas sociales) del proyecto, ampliamente difundidas por gobiernos estatales, cámaras de comercio e industria, empresas transnacionales —biotecnológicas, turísticas, mineras, forestales, de construcción, energéticas (de gas, de petróleo, de electricidad), bancarias multilaterales y comerciales, etc.—, entre muchos otros.

DIMENSIÓN HUMANA DEL DESARROLLO:
VISIÓN DE FUTURO INDÍGENA
Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO
EN COLOMBIA

Entonces lo que uno cree que es sagrado alguien lo va a administrar y dentro de esa administración hay un paquete turístico donde el indígena es un componente [...]. Ya sabemos a qué viene la variante, pero la gran pregunta es qué hay que hacer.
Alguacil Mayor del Cabildo Indígena (27 años)¹

Contrario a lo que las fuerzas globales que buscan reterritorializar su capital piensan, diversas comunidades indígenas, entre las cuales se destacan la kamëntza y la inga, son centrales en las dinámicas socio-políticas y culturales de regiones como la del valle del Sibundoy, en el piedemonte Andino-Amazónico. Así, se hace pertinente caracterizar tanto la percepción de las comunidades indígenas kamëntza e inga ante la construcción de la variante San Francisco-Mocoa como parte de la Iirsa, como la visión de futuro que dichas comunidades tienen de un territorio que consideran ancestral, y explorar si esta visión de futuro se articula con la acción política adelantada por parte de las comunidades indígenas como reacción ante tal megaproyecto, e identificar los mecanismos usados por dichas comunidades para tal efecto. La defensa

¹ Comunicación personal, 9 de marzo de 2013.

del territorio por parte de las comunidades indígenas ha implicado la creación de sentidos de pertenencia ligados a la construcción política de un proyecto de vida colectivo, pero también la constante redefinición de las relaciones que se sostienen con la sociedad dominante a nivel macro, a partir de acciones individuales o tácticas de *sujeción* cotidianas desde las cuales continuamente las personas se atan y a la vez se desprenden de la identidad en torno a la cual se articula la resistencia ante la construcción de la variante San Francisco-Mocoa.

5.1 DINÁMICAS TERRITORIALES DE KAMĚNTZA E INGAS EN EL VALLE DEL SIBUNDOY

Un breve recuento histórico permite evidenciar que tanto kamĚntza como ingas, originarios y habitantes del valle del Sibundoy respectivamente, empiezan a ser protagonistas de ambiciones culturales y territoriales externas tan solo en el siglo xx, como consecuencia de los procesos de evangelización y colonización a los que fueron expuestos por parte de la misión católica establecida por monjes capuchinos en 1899² (Bonilla, 2006). El período durante el cual la misión estuvo presente en el Alto Putumayo fue la época de mayores transformaciones

² El primer proceso de evangelización se llevó a cabo por parte de misiones jesuitas en 1597 (Bonilla, 2006). Durante el siglo xix, con el cambio de régimen político operado en 1886, a partir del cual empieza la Hegemonía Conservadora, la legislación en materia indígena se sintoniza con los compromisos contraídos con la Iglesia católica. En 1890 se expide la Ley 89, por medio de la cual se divide en dos grupos a las comunidades indígenas del país. El primer grupo se compone de los grupos considerados salvajes, nómadas o selváticos, mientras el segundo se compone de las comunidades indígenas que habitan poblados permanentes. Esta ley garantiza el establecimiento de los cabildos y gobernadores indígenas ancestrales, reconoce sus derechos territoriales por medio de la propiedad sobre resguardos y establece una tutoría estatal sobre estos. A partir de la expedición del Decreto 74 de 1898, la Gobernación del Cauca le confiere a los responsables de las misiones del Sur la categoría de jefes superiores, dotándolos de privilegios educativos, económicos, administrativos y policivos.

culturales y territoriales. Así lo expone Bonilla (2006), al sugerir que estuvo caracterizada por: 1) transformaciones demográficas a partir de la disminución de la población indígena y el aumento de colonos en el territorio (enfermedades, servidumbre, éxodos a la selva, y actos de sabotaje —a manera de *discurso oculto* o *infrapolítica* indígena (Scott, 2000)—, suicidios y huelgas de hambre, entre otros aspectos), 2) apertura del camino del Oriente y de diversos frentes de colonización, y 3) procesos intensivos de escolarización y catequización. La misión

... [forzó así] a los Kamëntza no solo para hacerlos habitar el pueblo rectilíneo que estaban decididos a imponer contra todas las tradiciones indias sino para que comparecieran al trabajo obligatorio en provecho de la Misión y del nuevo poblado, y para que abandonaran, rápidamente, sus normas de vida (Bonilla, 2006, p. 135).

Ahora bien, a la llegada de la misión capuchina al valle del Sibundoy, los derechos territoriales de los pobladores indígenas fueron reconocidos por esta (Bonilla, 2006). Las comunidades indígenas exponen que el terreno atravesado por la variante San Francisco-Mocoa fue comprado a la Corona española (por cuatrocientos patacones de oro) por el taita Carlos Tamoabioy en 1700, cuyo legado de origen colonial fue protocolizado en la Notaría Segunda de Pasto en 1927 y supone un área de 12.000 ha (Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación, 2011). No obstante, durante la misión este mismo terreno fue objeto de tácticas históricas de colonización —como la invasión, la compra, la expropiación o la usurpación por vía legal o de hecho—, cuyo culmen fue la declaración legal del valle del Sibundoy como un territorio baldío nacional a partir de la Ley 51 de 1911 (Bonilla, 2006). Según Juajibioy (2013), “el despojo de tierras llegó al límite de expulsarlos de su propio pueblo *Tabanoc*³ y enviarlos hacia las partes bajas del valle del Sibundoy, es decir fueron desplazados de

³ *Béngbe Tabanok* significa “sagrado lugar de origen” en lengua kamëntza (socióloga kamëntza [30 años], comunicación personal, 25 de marzo de 2013).

su territorio”. La política agraria capuchina, que se materializó en la concentración de más de 3000 ha, ha sido estipulada como la principal causa de empobrecimiento indígena en esta parte del país⁴. Durante este período, el Estado colombiano, más que garante del derecho a la propiedad de kamëntza e ingas, fue utilizado como instrumento de poder mediante interpretaciones particulares de la ley y modificaciones de esta. Ahora bien, las manifestaciones de descontento por parte de ambas comunidades llevaron a que el mismo Estado colombiano, tres décadas después, adelantara efímeros procesos de protección de territorios indígenas en el Alto Putumayo.

En 1939⁵ se constituyó un resguardo con una extensión de 6445 ha en el área montañosa (Decreto 2075) y se estableció una reserva territorial de 5000 ha en la parte céntrica del valle del Sibundoy. Ahora bien, “la inexistencia de funcionarios permanentemente encargados de defender los intereses indígenas permitió la continuidad de la situación que se venía dando” (Bonilla, 2006, p. 292) con la dinámica impuesta por la misión capuchina, lo cual implicó que estas determinaciones no tuvieran mayores repercusiones efectivas en el asunto de los derechos territoriales. Por otra parte, en 1956 se dictó el Decreto 1414, que transformó la reserva en resguardo con el propósito de que las tierras que no estuviesen tituladas fueran ocupadas por habitantes indígenas. Sin embargo, este decreto no estipuló una entrega material de territorios (funcionaria del Incoder, 2013), los cuales en ese momento comprendían propiedades que ya habían sido adjudicadas por el Ministerio de Agricultura en calidad de baldíos y que lo seguirían siendo hasta los últimos años de la misión⁶.

⁴ Memorial al Ministro de Economía por parte del abogado Adolfo Romero, Sibundoy, Archivo de la Misión Capuchina, 1938, en Bonilla, 2006, p. 289.

⁵ Estos cambios coinciden con el fin de la Hegemonía Conservadora en el país y la instauración del período de la República Liberal.

⁶ En 1969 empiezan las conversaciones relativas a la actualización del Concordato y el Convenio de Misiones, negociaciones que terminan con la abolición de este último (Bonilla, 2006, p. 46).

Es debido a este contexto que una de las principales e históricas preocupaciones de las comunidades indígenas kamëntza e inga es la tenencia y el manejo de territorios que consideran ancestrales. Para 1979, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) constituye el Resguardo de Sibundoy Alto, a partir de la Resolución n.º 173, con una extensión de 3252 has. Los desafíos que actualmente exponen las comunidades indígenas giran alrededor de la ampliación del resguardo existente, el reconocimiento legal del territorio a partir de la constitución de nuevos resguardos para cada uno de los seis cabildos del valle del Sibundoy (Inga de Santiago, Inga de Colón, Inga de San Pedro, Inga de San Andrés, Kamëntza de Sibundoy, Inga-Kamëntza de San Francisco) y su saneamiento.

Los seis cabildos inga y kamëntza están esperando desde 1984 que el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder) les legalice este territorio. Los indígenas radicaron las peticiones para el reconocimiento de su terreno y manifiestan que aún no están resueltas las siguientes solicitudes: 1) la ampliación del área denominada Paraíso por los cabildos Inga-Kamëntza de San Francisco y Kamëntza de Sibundoy, y 2) la solicitud de ampliación del territorio denominado Mulachaque por el cabildo Inga-Kamëntza de San Francisco.

Aunque “ellos nunca han dejado de estar al lado del Incoder, siempre están ahí diciendo ‘oiga, por favor nos atienden; oiga, por favor nos escuchan’” (funcionaria del Incoder, 2013), las comunidades indígenas kamëntza e inga se acercan con más fuerza a esta entidad durante el 2012. Es en este año que se establece una nueva ruta para adelantar los procesos de ampliación y constitución de resguardos, y se determina continuar los procedimientos estipulados por ley (como la elaboración de los estudios socioeconómicos, etnohistóricos, jurídicos y de tenencia de tierras)⁷ a partir de un convenio entre el Ministerio

⁷ “Infortunadamente, en este proceso no se está debatiendo la vigencia del testamento y del Decreto 1414 de 1956 debido a que implicaría un análisis etnohistórico que ni el Estado ni las comunidades van a financiar” (funcionaria del Incoder, 2013).

del Interior, el Invías⁸ y el Incofer. El reconocimiento de este territorio habría impedido que se les negara el proceso de consulta previa libre e informada ante la construcción de la variante San Francisco-Mocoa.

5.2 KAMËNTZA E INGAS: ENTRE DOS VISIONES DE FUTURO

Los puntos de vista de comunidades subalternizadas, como los kamëntza y los ingas, ante las dinámicas propias de su territorio no son accidentales; por el contrario, son sistemáticos, lo cual permite y restringe a la vez sus dinámicas socioculturales y económicas, y, por consiguiente, claves para entender sus procesos de decisión y acción política (Nazarea, 1999). Un mapa político del valle del Sibundoy les permitió a representantes de las comunidades indígenas identificar los conflictos presentes en el territorio y discutir sobre cómo afectarán estos el futuro de la región. Problemáticas territoriales, ambientales, demográficas, económicas y culturales se entrelazan para presentar un escenario futuro complejo.

Elementos tan disímiles, y al mismo tiempo interrelacionados, como la falta de titulación de resguardos indígenas, los conflictos territoriales con colonos, los problemas de saneamiento básico y tratamiento de aguas residuales, la construcción de la variante San Francisco-Mocoa y sus vías secundarias, se entremezclan con los problemas ambientales que estas obras traen consigo, así como con la tensión urbana y el crecimiento de la población (la posibilidad de que las ciudades se vuelvan ciudades-satélite), los procesos de extracción de minerales como el oro y de materiales de arrastre, la ampliación de la frontera agrícola sobre el área montañosa —lo cual incluiría la ampliación de monocultivos y

⁸ Aunque el Invías participa en el proceso “porque tendría intereses de que las cosas fluyeran de la mejor manera” (funcionaria del Incofer, 2013), no firma el convenio de finales del 2012.

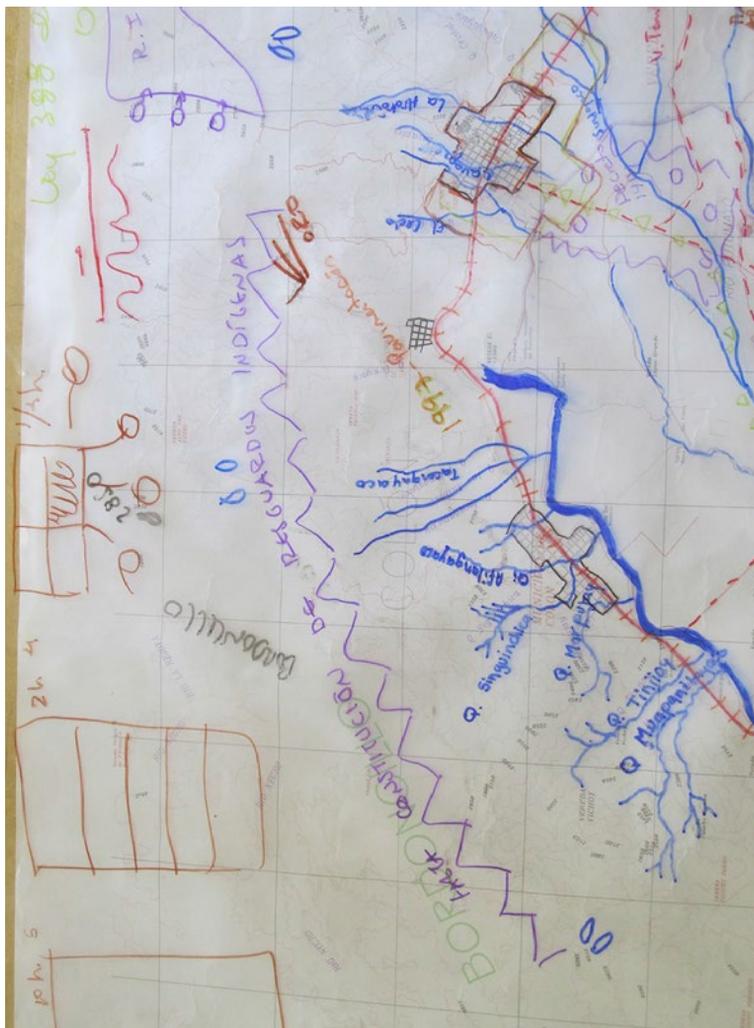


Figura 6. Conflictos territoriales en el valle del Sibundoy

Fuente: Grupo focal, 25 de marzo de 2013. Cabildo indígena de San Pedro, Colón, Sibundoy.

el uso de químicos—, la administración privada de bosques y ríos, y el deterioro cultural de las comunidades indígenas por la pérdida de los cultivos de chagras⁹ y plantas nativas (Grupo focal, 25 de marzo, 2013. Cabildo indígena de San Pedro, Colón, Sibundoy).

5.2.1 Percepción actual ante la variante San Francisco-Mocóa

En cuanto a la construcción de la variante San Francisco-Mocóa, diferentes líderes indígenas, tanto de la comunidad kamëntza como de la Inga, coinciden en los efectos negativos en términos económicos, ambientales y socioculturales que está trayendo consigo dicha construcción. Su percepción se enmarca en las condiciones correspondientes a su posición en la esfera social multidimensional (Bourdieu, 1987), en este caso definida por sus escasas condiciones materiales de existencia y por su relación de subalternidad económica, política y cultural con respecto a otros grupos poblacionales a nivel regional, nacional e internacional.

Es así como, en términos económicos, manifiestan que a “ellos (el Estado) lo que les interesa es el desarrollo del capital, no más, en una vía siempre hay desarrollo de capital, nosotros somos pobres, los indígenas, ¿cómo vamos a participar en el desarrollo económico?” (alcalde mayor de cabildo indígena, 33 años, 2013). A partir de esta perspectiva, exponen que la construcción de la variante es un tema que se relaciona con la expansión de la economía y el movimiento de nuevos capitales y productos de otros países (“de países competitivos donde los productos son más económicos”) por parte de grandes inversionistas, “donde la comunidad indígena no tiene ni un vehículo colectivo para decir que por aquí va a pasar la economía del kamëntza”. Se señala también:

⁹ La chagra es el lugar donde se cultiva y protege la diversidad de plantas alimenticias, medicinales y arbóreas autóctonas; un lugar importante y vital para enseñar, aprender y compartir la educación propia.

¿Desarrollo? Va a haber quien se pueda desarrollar en este tipo de economías, va a haber muchas entradas de colonos, y que van a venir a invertir, con mucho dinero que ni siquiera los empresarios del municipio van a igualar ese capital, van a terminar siendo empresarios controlados por otros más poderosos, así la economía no funciona porque ya aquí se va a regenerar oferta y demanda, si en este mercado no hay cadena productiva que diga que sí tiene en sus productos este valor agregado. Necesitamos saber dentro del proceso de la variante cómo vamos a ver nuestro sistema productivo (alguacil mayor de cabildo indígena, 27 años, 2013).

Por otro lado, exponen las pocas garantías de trabajo que tienen como indígenas en la construcción de la obra,

... ya que si usted va a mirar sobre el contrato, no hay más de un tres por ciento de implicaciones del personal de la comunidad trabajando allá. Y con maltratos laborales, donde salen a las cuatro de la mañana y regresan a las nueve o diez de las noche y reciben un salario que no es justificable al trabajo que se presenta sobre el sector” (alcalde mayor de cabildo indígena, 33 años, 2013).

Reconocen de igual forma que la construcción de la carretera no es solo para reducir el tiempo de transporte, sino para facilitar la extracción de minerales que se encuentran en territorios considerados ancestrales¹⁰. Una mama kamëntza (81 años, 2013) expone:

Ahora ya hay mucho cambio porque ahora es diferente, no andan con el pensamiento de cuidar sino de cómo explotar las minas. Yo creo que el camino que se empeñan en hacer es por la minas, buenas minas puede haber, no son las minas que matan, el oro, el cobre, cosas valiosas que deben haber por ahí.

¹⁰ “Detrás de la vía están los intereses extractivos, está la minería para el oro, cobre [...] hacia abajo están las petroleras” (lideresa kamëntza, 34 años, 2013).

También cuenta:

Hablaban ellos [sus antepasados] de oro. Desde que llegaron los blancos se acabó el oro. Y nosotros ni sabíamos qué hacer con el oro que había, eran morrocotas de oro [...]. Blanco que llegaba, él sí sabía para qué era que servía, les regalaba sal y panela y con eso se llevaban el oro, a la fuerza cargando ese oro. Después les fueron quitando por las buenos y por malas, ya comenzaron a minar decían ellos [...] Nos da mucha pena que todo eso se acabó, no queremos que se metan para allá todavía. A la montaña hay que cuidarla porque para allá sí hay oro.

Las percepciones que las comunidades indígenas tienen de la variante San Francisco-Mocoa también se enmarcan en sus trayectorias sociales (Bourdieu, 1987) y, por consiguiente, en su paulatina consolidación como nativos ecológicos, lo que les ha permitido insertarse dentro de la ecopolítica global como protectores del medioambiente (Ulloa, 2003). Es en este sentido que, resaltando la importancia ambiental del territorio, identifican los efectos negativos que la construcción de la variante está trayendo consigo y traerá en un futuro cercano, ya que manifiestan: “A nosotros nos consideran como los guardianes de la naturaleza” (taita kamëntza, 64 años, 2013) y

Hoy la comunidad científica dice que nosotros le estamos aportando al mundo, porque su sistema de vida, su sistema económico, comunitario, social, cultural es la que menos hace daño que otros sistemas de otros asentamientos, como el consumista, que no ve por el ambiente sino por la economía, en eso nos diferenciamos muchos (alguacil mayor de cabildo indígena, 27 años, 2013).

“Las montañas están más flojas y se van a venir con todo”, comenta una lideresa kamëntza (34 años, 2013), y agrega que el valle del Sibundoy es nuevo y ecológicamente frágil, un ecosistema único y estratégico tanto para el Alto como para el Bajo Putumayo, en especial por los nacimientos de agua. Todo lo que pasa en la montaña repercute

en la parte plana: estancamiento de aguas, sedimentación de los suelos, avalanchas, huracanes, “se cerrarán las salidas de agua y de viento”, entre otros aspectos. De igual forma, resalta que “aquí está en juego el recurso de vida que es el agua y el oxígeno. Al hacer esa vía, van a venir las instituciones y les tendremos que pagar todo, hasta el vaso del agua que nosotros nos tomamos”. En términos ambientales, la variante San Francisco-Mocoa afectará recursos naturales fundamentales para las comunidades indígenas, como la biodiversidad, y los recursos hídricos y forestales existentes en el área del tramo.

Así mismo, consideran que este proyecto tiene el potencial de acelerar la pérdida de la identidad indígena y de sus usos y costumbres, incluida su lengua, lo cual afecta la relación de estas comunidades con el territorio y con el acceso a recursos naturales. Un gobernador mayor de cabildo indígena (74 años, 2013) resalta la necesidad de que, por el contrario, se fortalezca la autonomía de las comunidades indígenas como parte del *necesario* desarrollo de este territorio:

Por la pervivencia de nosotros no podemos ir aceptando que esto para nosotros va a traer desarrollo. Porque el concepto del desarrollo es un mejoramiento del nivel de vida. Y para hacer el mejoramiento no estaría como dentro del desarrollo que va a surtir con la variante, tenemos otros aspectos, nuestra comunidad entraría en desarrollo si nuestra comunidad fortalece nuestra autonomía, entonces ¿cómo fortalecería la variante San Francisco-Mocoa?, como difícil dimensionar.

Por otra parte, un alcalde mayor de cabildo indígena (33 años, 2013) comenta que

... el desarrollo es con obras de infraestructura, pero las obras de infraestructura no se dan cuenta que a nosotros cada vez nos dividen más. Primero porque a veces la comunidad no estamos en condición de aceptar unidos, sino que unos a favor y otros no. La prueba está en la variante, algunos dicen: eso trae progreso, y otros no.

Ahora bien, lo anterior implica resaltar que aunque se identifican las problemáticas que trae consigo este “tramo de integración y desarrollo”, también existen líderes indígenas que reconocen que la construcción de la vía puede favorecer el desarrollo económico de la región, siempre y cuando se presenten las correspondientes garantías por parte del Estado. En ese sentido, dicho alcalde también expone: “La visión que tienen ellos es que no se haga [la variante]. El caso mío es que puede ser viable con garantías”.

Son, por consiguiente, dos *visiones de futuro*, dos “espacios” heterogéneos en una *heterotopía* al estilo foucaultiano (Foucault, 1967), las que se presentan en el valle del Sibundoy ante la construcción de la variante San Francisco-Mocoa. Al ser actores relevantes de la región, las comunidades kamëntza e inga actualmente están expuestas a la ola de la globalización, la cual presenta una intensificación de los intercambios que les permiten experimentar sus efectos “localizadores” y “transnacionalizadores” (Santos Granero, 1996). Por un lado, los grupos indígenas se han visto incluidos en procesos guiados por el “fortalecimiento de la cultura propia” (por ejemplo, valoración como guardianes del bosque, como también se vio reflejado en sus percepciones sobre los efectos que trae consigo la variante). Por otro, se han visto imbuidos en mayores procesos de “modernización” (modificación de sus discursos y nuevos proyectos económicos) y empujados a su integración al mercado mundial a través del ciclo exportador, que transforma sus recursos, de igual forma, en mercancía para el mercado global (Serje, 2011).

Son dicotómicas las relaciones que se presentan en el escenario complejo de la Amazonía: el discurso de conservación y la revalorización de la cultura indígena como garante de esta protección ambiental (Ulloa, 2001) frente a la entrada al mercado internacional de los recursos naturales de esta región y la modernización de las relaciones sociales de sus grupos poblacionales. Son estas relaciones contradictorias, donde se resalta la simbiosis entre múltiples escalas espaciales en el actual período de la globalización, las que dan cuenta de dos visiones de futuro en el territorio por parte de ambas comunidades ante la construcción de la variante San Francisco-Mocoa.

5.2.2 Visión 1. Consolidación territorial y ambiental desde lo indígena

Hay posición política, hay autonomía, hay geopolítica porque tenemos territorios, y ya no hablamos de las 3.252 ha, sino de que ojalá se nos titulen 35.000 hectáreas. Cuántos ecosistemas hay, tienen que ser de control de la comunidad. Si controlamos nuestros sistemas y seguimos las reformas que están haciendo nos volveremos autoridades ambientales dentro de nuestros territorios, entonces quiere decir que los beneficios de los territorios son nuestros (alguacil mayor de cabildo indígena, 27 años, 2013).

Bajo esta perspectiva, el territorio tiene un valor simbólico que identifica, une y determina las dinámicas sociales de ciertos grupos dentro de las comunidades indígenas kamëntza e inga. El concepto de “territorio” surge aquí no como elemento de control y dominación externo, sino como un instrumento contrahegemónico y anticolonial de supervivencia y reivindicación identitaria (identidad entendida como *resistencia* y como *proyecto* [Castells, 1997]). El territorio empieza a considerarse como un elemento socialmente construido y propio, que sirve como herramienta no solo discursiva, sino de acción política. En este sentido,

... la educación gira sobre el territorio, la lengua materna gira en torno a ese espacio, lo simbólico, artesanías, música, la medicina; hay un territorio simbólico y físico, político, autónomo, las costumbres, la historia. Todo está en el territorio. La comunidad indígena empieza a definir espacios dentro de su ordenamiento, empieza a ver espacios, lugares sagrados, y sabe el kamëntza que la manera para retrasar la desaparición es reclamar sus derechos sobre los territorios, porque si no los tenemos se acelera el proceso de desintegración (alguacil mayor de cabildo indígena, 27 años, 2013).

El territorio, además, se presenta dotado de “otra” geografía: “Para nosotros es claro que eso es nuestro [...] es claro que el municipio de Sibundoy, así esté con sus calles, con sus infraestructuras, con su desarrollo, que es un poco ajeno al nuestro, sigue siendo nuestro” (alguacil mayor de cabildo indígena, 27 años, 2013). Sigue siendo propio cuando aún se reconoce como un territorio ancestral sin límites “políticos” y con múltiples espacios (Lefebvre, 1991), no solo concretos y materiales (con sus caminos tradicionales, ríos principales y quebradas), sino ideológicos (con sus cabildos) y subjetivos, vividos, percibidos y concebidos —con sus lugares sagrados, como el páramo (montañas), la laguna (círculo), los salados (la danta), los cementerios (vasijas), las plantas sagradas (árboles) y las aguas termales (vasija de agua caliente)—.

Ahora bien, la reivindicación de la relación mimética de los grupos indígenas con la naturaleza también se ha convertido en las últimas décadas en un eje estratégico de reclamaciones identitarias; reclamaciones que se interrelacionan con la defensa del territorio por parte de las comunidades kamëntza e inga. En el imaginario colectivo se resalta actualmente el diálogo intenso entre estas comunidades y el medioambiente a partir de sus visiones ecocéntricas y su estrecha relación sociocultural con el “paisaje” (Pizarro, 2005); su pensamiento es “inseparable de una ética del medioambiente” (Serje, 2011, p. 288). Una mama kamëntza (81 años, 2013) lo representa de la siguiente manera:

Siempre les prevenía que al caminar por ahí por las montañas, lejos de donde estamos, hay que cuidar la naturaleza, porque si no se cuida también se resiente la naturaleza, comienza a explotar, los ríos se ponen bravos, decían ellos, y a hacer estragos. Para que no suceda hay que andar con cuidado.

Es a partir de este pensamiento que estos grupos indígenas se autorreconocen por su relación y respeto por la naturaleza; su conocimiento ecológico parte de su experiencia y sus dinámicas cotidianas.

Incluso, la relación entre grupos indígenas y naturaleza ha comenzado a estar enmarcada en la dimensión de lo sagrado, con lo cual se ha venido constituyendo como

... uno de los ejes más importantes de los discursos étnicos e indigenistas, que invocan de diversas maneras categorías como las de la madre tierra, los sitios sagrados y los territorios ancestrales; haciendo énfasis en el misticismo, el chamanismo, la cura espiritual, las medicinas y los saberes tradicionales (Serje, 2011, p. 251).

Para ejemplificar lo anterior, así lo expone un alguacil mayor de cabildo indígena (27 años, 2013):

Hay gente que dice: “¿Y por qué no viven ahí por donde va a pasar la variante”? Pues cómo usted va a ir a vivir a un lugar donde es sagrado, las montañas y bosques que producen agua. Dentro de la concepción Kamëntza no podemos ir a vivir donde hay agua porque eso puede causar daños, y por eso dentro de la cosmovisión territorial teníamos los lugares productores de agua, nichos para distintos tipos de animales, lagunas, ríos, cuencas, bosques muy importantes para la comunidad, donde no se puede ir a tocar; son tan sagrados que los médicos tradicionales hacen un ritual para poder entrar y buscar plantas, y ellos tienen un plan de manejo, por la luna, el ritual, otras plantas. En lo propio hay un respeto por eso. No nos pueden decir que tenemos que vivir por allá.

Es bajo esta lógica que cada vez se insiste más en la importancia de los conocimientos indígenas en el campo de los saberes sobre la naturaleza. Desde la Cumbre de la Tierra, en 1992, se empieza a resaltar el carácter innovador e interdisciplinario de los conocimientos étnicos en el análisis de los impactos ambientales. Esto, enmarcado en un esfuerzo discursivo por encontrar en las visiones no-occidentales las recetas alternativas para recuperar lo que se perdió al *desterritorializary*

desnaturalizar las dinámicas sociales, políticas y económicas¹¹. La visión de futuro en la cual se busca la consolidación del territorio y de la relación ecológica con este se refuerza, una vez más, al plantearse que

... sin embargo, hay gente que dice que somos radicales con nuestros pensamientos, pero si entendieran que cuando hablamos de preservar no es solo para los kamëntza, es casi para todo el planeta y el mundo. Porque hoy hay declaratorias, por ejemplo de 1977 por la Unesco, que dice que es una zona de la biosfera, donde están habitando los kamëntza, es una zona estratégica para el mundo, que si eso se daña el mundo va a tener más repercusiones, cambios climáticos, tantas cosas que se vienen dando por la zona industrial. Y les hemos dicho: hoy la autonomía del pueblo kamëntza ha cambiado, hoy no es la radical, hoy pensamos la autonomía, y esa autonomía involucra la vida del otro (alguacil mayor de cabildo indígena, 27 años, 2013).

Es en este sentido que, desde lo local, algunos líderes indígenas continúan proponiendo nuevas formas de interacción entre el conocimiento, la naturaleza y la gestión de los recursos naturales, las cuales se enmarcan en contragobernabilidades o en formas alternativas de racionalidad ambiental (Ulloa, 2003):

¹¹ Ahora bien, es contradictorio que este reconocimiento se deba a la concepción que ve a las comunidades indígenas como inmersas en las leyes de la naturaleza, mientras que, por otro lado, se busca cada vez más la cientifización de sus conocimientos tradicionales. Cada vez con más ímpetu, los saberes tradicionales están siendo definidos y representados a partir de las lógicas objetivas de *la* ciencia, e incorporados de manera desfigurada a las técnicas de la planeación del desarrollo (el Banco Mundial ha comenzado a incluir una dimensión espiritual en las políticas desarrolladas y promovidas en territorios indígenas tradicionales. Se trata, en este sentido, de un “proceso que necesariamente implica su reificación y su reducción, buscando explicaciones a través de analogía y homología con los principios y conceptos del conocimiento [moderno]”) (Serje, 2011, p. 251).

Como somos pasajeros, somos prestaditos. Si los antepasados no hubieran conservado el territorio y no hubieran visto el valor de la vida en armonía con la naturaleza, nosotros ya estuviéramos aquí sobre un desierto, porque el ecosistema se presta para eso. Como está en detrimento, si no se le pone cuidado ya no va a haber santo que valga (líderesa kamëntza, 34 años, 2013).

5.2.3 Visión 2. La lógica de adaptación y competitividad

La multiplicidad de “espacios” en un mismo territorio también crea una condición cultural en la cual se filtran influencias tanto de la cultura o las prácticas dominantes como de las subalternizadas; espacios ambiguos de encuentros y desencuentros donde se superponen también las múltiples identidades y lealtades que componen a los grupos humanos (Bhabha, 1994; Sen, 2006).

Siguiendo la misma lógica a partir de la cual los conocimientos occidentales se han constituido como los instrumentos de comprensión de la visión indígena, los proyectos de gran envergadura, como los que se enmarcan en la Iirsa, ahondan en la paulatina vinculación de las comunidades indígenas a la economía de mercado, siendo continuamente modificados sus sistemas de producción y sus relaciones con el ecosistema (Trujillo, 2007). Así lo reconoce un líder inga (37 años, 2013) al resaltar que la “cultura” debe cambiar para adaptarse a los nuevos contextos, que se debe cambiar la metodología de la chagra para pasar a tecnificar la agricultura. También así lo manifiesta un alcalde mayor de cabildo indígena (33 años, 2013):

Que nuestra comunidad conozca y aprenda, y se capacite en la parte agropecuaria, porque nosotros no somos directamente empresarios en la tecnificación agropecuaria, donde nosotros tengamos la garantía de que los productos de nosotros sean transformados y comercializados, y poder nosotros pervivir, porque en un futuro es la tecnología la que viene por aquí. Desarrollo es que nosotros vayamos con la tecnología,

nuestras capacitaciones, *sin olvidarnos de lo que nosotros somos* (énfasis añadido).

El sistema nacional jurídico brinda una protección ambiental a los territorios de las comunidades indígenas (Laborde, 2010); pero, por otro lado, el desconocimiento estatal de esta protección constitucional lleva a dichas comunidades a adoptar nuevas estrategias de resistencia y adaptación basadas en figuras institucionales ajenas a sus modelos tradicionales:

Ahorita nosotros estamos exigiendo garantías de apoyo agroindustrial, para que se hagan las propias industrias, para que las comunidades puedan hacer el producto y nosotros transformarlo. Si nosotros no tenemos esa garantía, en un futuro no vamos a tener la garantía de la pervivencia [...]. Primero, uno de los acuerdos, que el Estado garantice que los productos que se sacan de aquí sean comercializados, sean comprados aquí (alcalde mayor de cabildo indígena, 33 años, 2013).

Como lo exponen los líderes indígenas, las comunidades siempre están en contacto con las diferentes ofertas de integración no autónoma desde una posición de subalternidad. Ahora se presentan nuevas maneras de emprender negocios minero-energéticos, forestales, ecoturísticos, de servicios ambientales y de productos promisorios de la biodiversidad con lejanos centros empresariales, dinámicas propias de la lógica del intercambio mercantil y del desarrollo pensado de manera convencional.

5.2.4 El desarrollo deseado

Ahora bien, ambas visiones de futuro indígena por parte de kamëntza e ingas nos permiten realizar un acercamiento al concepto de “desarrollo”. Nuevas concepciones flexibles de lo “indígena” afloran, con el fin de hacer frente a las contradicciones de la modernidad y, particularmente, del Estado.



Figura 8. El desarrollo deseado

Fuente: Grupo focal, 25 de marzo de 2013. Cabildo indígena de San Pedro, Colón, Sibundoy.

Diferentes elementos, tanto tradicionales como actuales (modernos, posmodernos y transmodernos) se pueden visualizar en un mapa que contiene elementos como: 1) mantenimiento de ríos a partir de la reforestación con plantas nativas; 2) acueductos y alcantarillados propios en administración y diseño, según necesidad de electricidad en el territorio; 3) centros de salud integral y casas de sanación; 4) escuelas y colegios bilingües en cada asentamiento indígena; 5) rutas de comunicación, las actuales pero mejoradas; 6) la chagra como la totalidad del territorio (reconociéndose como un “lugar de conocimiento”), cultivos cerca de los asentamientos; 7) centros culturales y de formación para mujeres; 8) universidad entendida como universalidad y centros de investigación propia (se resalta la importancia de la biotecnología, el uso de la tecnología actual para beneficio propio); 8) red de tejido de turismo comunitario; 9) asociación de autoridades del valle del Sibundoy; 10) hogares infantiles y 11) cabildos indígenas (o guardia indígena).

Por su parte, así lo expone una lideresa kamëntza (34 años, 2013):

El verdadero concepto de desarrollo es generarle el bienestar integral de la persona, la familia y el colectivo. El primer requisito es el sostenimiento alimentario, productos naturales, como los cultivan nuestros mayores, [...] condiciones de salud donde prima la medicina tradicional y centros de salud donde se dé una atención humana. Cuando la gente tenga garantizado el derecho a la educación, una población educada es autónoma en sí. Cuando ya tienen estos derechos dentro de su tierra, el valor por la tierra, la tierra no es para explotarla, es para compartir con ella, el alimento, la medicina, el agua, el oxígeno.

5.3 LA DEFENSA DEL TERRITORIO: ACCIONES SIMBÓLICAS, POLÍTICAS, JURÍDICAS

El “desarrollo es saber que tengamos garantías [...]. ¿Quién se va a comprometer a que si hay un problema económico, ambiental, cultural, nos compensen? Esas garantías son las que a nosotros nos van a permitir desarrollar” (alguacil mayor de cabildo indígena, 27 años, 2013). ¿Pero, cómo pedir garantías? La rápida expansión, en los últimos sesenta años, de los estudios sobre la acción política refleja el aumento en la relevancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas. La acción colectiva (Van Deth, 2006) en sus diferentes manifestaciones, como lo fue para los nuevos movimientos sociales en la década de los ochenta, ha sido uno de los tipos más utilizados por las comunidades indígenas para definirse como grupo social, autodiferenciarse de otros (Barth, 1969) y convertirse en una fuerza política capaz de asegurar el triunfo de los intereses asociados con su posición en la esfera social multidimensional.

Las comunidades kamëntza e inga han hecho parte del movimiento indígena en Colombia, cuyos procesos de resistencia y movilización han combinado varias estrategias, tales como la lucha armada (particularmente por parte de los grupos indígenas del Cauca) y la jurídica. El uso de ambas formas de lucha —con un período de predominio de lucha armada en la década de los ochenta, durante la cual se relaciona la historia de las movilizaciones populares (campesinas) con reivindicaciones étnicas— condujo al proceso de incorporación de los derechos indígenas a la Constitución de 1991, que puede ser considerado como una de las declaraciones más importantes que se han dado en Colombia en las últimas dos décadas sobre el tema (Espinel Soares, 2001).

Sin embargo, ya desde 1982 las comunidades indígenas crean la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que tiene como plataforma de lucha los siguientes puntos: 1) defensa de la autonomía indígena; 2) defensa del territorio indígena, recuperación de tierras y

protección de resguardos; 3) control de los recursos naturales en los territorios indígenas; 4) apoyo a las organizaciones indígenas en el desarrollo de proyectos económicos comunitarios; 5) defensa de la historia, las tradiciones y la cultura indígenas; 6) educación bilingüe y biocultural bajo control indígena; 7) recuperación de la medicina tradicional y establecimiento de programas de salud adecuados a las características sociales y culturales de las comunidades; 8) exigencia de respeto por la Ley 89 de 1890 y por todas las leyes que protegen los derechos indígenas, y 9) solidaridad con otras luchas afines¹².

Ahora bien, desde la década de los noventa el movimiento indígena pasa a funcionar a partir de formas de resistencia pacífica (ejemplo de esto es la figura preponderante que toma la Guardia Indígena), del diálogo y la resistencia inclusive desde los ámbitos político y electoral. Así, la resistencia indígena en las últimas décadas pasa a ser “un movimiento bien organizado, generado a partir de las bases y que se propone defender los planes de vida indígenas” (Benavides Vanegas, 2009, p. 38). Según Ulloa (2003), este es un proceso nuevo en el país, ya que por primera vez las comunidades indígenas se encuentran en una posición política que les permite contar con derechos políticos, civiles, sociales y culturales. Ahora bien, las comunidades han construido una identidad colectiva, ya que en virtud de la Constitución de 1991 tienen que ser reconocidas como diferentes con el propósito de acceder como ciudadanos a derechos étnicos¹³ —así se constituye la *identidad legitimadora* (Castells, 1997)—. De esta manera, las comunidades indígenas están disfrutando de la ciudadanía formal, y se están abriendo espacios para el reconocimiento y la ejecución de una ciudadanía “propia” o una ciudadanía “otra”.

Ante la construcción de la variante San Francisco-Mocoa, las comunidades indígenas comienzan a desplegar una serie de acciones

¹² En: <http://cms.onic.org.co/sobre-nosotros/> (consultado el 15/11/2011).

¹³ Las comunidades indígenas tienen que considerarse como “tradicionales” para ser incluidas en el ámbito nacional; *ser diferente con el fin de ser moderno (la paradoja de la identidad)* (Ulloa, 2003).

tanto educativas como políticas, jurídicas y simbólicas, no en función de rechazar los proyectos de desarrollo que se adelantan desde el Estado, pero sí de reclamar sus derechos colectivos a una consulta previa libre e informada para determinar de qué manera participarán en los beneficios y perjuicios que trae consigo la carretera¹⁴. Estos procesos desencadenan una movilización no esporádica, caracterizada por formas convencionales de acción en las que el movimiento se empieza a interrelacionar con una multiplicidad de actores colectivos tanto favorables como desfavorables a sus propuestas.

5.3.1 Acciones simbólicas

A lo largo del proceso, las comunidades indígenas no solo del Alto, sino también del Medio y del Bajo Putumayo, han manifestado estar trabajando la parte espiritual, recorriendo y reconociendo el territorio no solo en lo físico, a partir de “rituales de yagé” que también procuran la recuperación y el fortalecimiento de la tradición indígena.

5.3.2 Acciones educativas

En el 2010 se da la primera acción por parte de las comunidades kamëntza e inga alrededor de la construcción de la variante San Francisco-Mocoa: formación con líderes indígenas e información sobre el tema a la comunidad (alguacil mayor de cabildo indígena, 27 años, 2013). Según líderes indígenas, esta fue una acción política, en la medida en que implicó un primer momento de formación para tener clara la visión territorial y de futuro sobre el territorio. La organización política es vista, así, como un primer elemento para mitigar

¹⁴ Alegan tener la experiencia durante los años 1996 y 1997, durante los cuales el Estado incumple los acuerdos a los cuales se llegó para la realización de la pavimentación entre Santiago y San Francisco.

futuros impactos y avanzar en procesos autónomos de desarrollo. Así lo expone un líder kamëntza (42 años, 2013):

En esa medida empezamos a capacitar a la comunidad: somos ancestrales, tenemos un testamento, un decreto, la ley para poder agilizar los títulos que nos digan que somos dueños de las tierras, somos autónomos en la administración, se beneficiarán de lo que pueda producir sus tierras. Su jurisdicción es sobre el territorio.

5.3.3 Movilizaciones

La protesta pacífica y la movilización de miles de indígenas reclamando su derecho a la consulta previa irrumpieron en el paisaje político del valle del Sibundoy también en el 2010. La primera movilización indígena se realiza en esta región el 26 de junio del 2010 con la participación de más de 6000 indígenas que marcharon de San Andrés a San Francisco. En el marco de un contexto político altamente polarizado, en el cual la discusión gira en torno a quién está de acuerdo o en desacuerdo con el desarrollo, las comunidades, durante la movilización, tienen la oportunidad de aclarar que no están en desacuerdo con el mejoramiento de la vía San Francisco-Mocoa. Por el contrario, el punto de análisis, manifestaron, se debe centrar en los impactos que no se han analizado y que implican directamente las prácticas culturales, sociales y económicas de los indígenas y la comunidad en general. En la segunda movilización indígena, que tiene lugar los días 16 y 19 de julio del mismo año, 450 indígenas, aproximadamente, caminan la ruta ancestral de Sachamates, con pausas en los sitios sagrados de las comunidades kamëntza e inga para evidenciar que por donde transcurrirá la vía es territorio ancestral (*Semana*, 2011).

En este período, se presenta una unificación por parte de los líderes indígenas: “Ahí se unió el pueblo inga y kamëntza” (lideresa indígena, 34 años, 2013), lo cual resalta que la variante se constituyó

como un factor de unidad en la definición de proclamas y discursos colectivos públicos sobre su construcción. En este proceso, la solidaridad étnica desempeñó un papel fundamental, operando no solo en el plano material, sino en el espacio simbólico para la expresión de fuerzas conflictivas que van más allá de la condición específica del grupo étnico en cuestión (Melucci, 2001). Así lo manifiesta un taita kamëntza (64 años, 2013) al referirse a ese momento:

En el 2010 tuvimos como ese valor, esa valentía de salir todos esos cabildos. Aunque algunos de pronto les dio miedo, digamos irse de frente: estaban los medios de comunicación, las cámaras todo eso. Entonces otros se meten por otro lado, en donde no se vean [...], pues eso es una lucha sea donde sea y si tienen que sufrir, pues que los señalen, pues uno lo hace como a lo justo, pues uno como indígena no debe temer.

A partir de estas manifestaciones, que incentivaron otras movilizaciones en todo el departamento del Putumayo, se decide establecer, a finales de agosto del 2010, la Mesa de Concertación y Diálogo Permanente del Putumayo y la Bota Caucana, un espacio en el que se pretende trabajar en torno a las grandes problemáticas generadas en ambos departamentos por la construcción de megaproyectos, entre ellos los viales (como la variante San Francisco-Mocoa) y los relacionados con la ampliación de la infraestructura minero-energética. Una nueva manifestación se registra el 25 de julio del 2012, durante la cual 2500 indígenas y campesinos se tomaron pacíficamente la vía Mocoa-Pitalito a la altura de Yunguillo (Putumayo), para protestar por los incumplimientos del Gobierno nacional: “No ha habido avances del Incodec en materia de saneamiento, ampliación o titulación de resguardos como se acordó, tampoco ha habido avances en los acuerdos del Plan de Desarrollo, ni en los acuerdos logrados en la Mesa Permanente de Concertación” (Congreso Visible, 2012).

5.3.4 Acciones jurídicas

Simultáneamente, las comunidades indígenas presentaron acciones jurídicas con el objetivo de hacer efectivos los derechos consagrados en la Constitución Política de 1991, como el envío de solicitudes de información a las entidades públicas a través de derechos de petición (art. 23) y la puesta en práctica de instrumentos judiciales de procedimiento preferente a través de la acción de tutela (art. 86) y la acción popular (art. 88, reglamentado en la Ley 472 de 1998) (*Semana*, 2011). “Atacar desde la jurisprudencia colombiana es bien importante”, manifiesta una lideresa kamëntza (34 años, 2013). Por su parte, un alguacil mayor de cabildo indígena (27 años, 2013) expone: “Se empieza a ver que hay que reclamar nuestros derechos con mecanismos que no son de la comunidad, pero a los cuales podemos acercarnos, como los de amparo del derecho a la consulta, a través de acciones jurídicas, como tutelas”.

El 21 de abril del 2010, los gobernadores de las comunidades inga y kamëntza del Alto y Medio Putumayo enviaron derechos de petición al Ministerio del Interior y de Justicia, para que explicara los motivos de la negación de la presencia indígena en el área de influencia de la variante San Francisco-Mocoa; al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible, para que agotara la etapa de consulta previa y explicara los motivos en los que se basó para ampliar la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa solicitada por el Invías; al Invías, con el propósito de solicitar información sobre el proceso llevado a cabo para aprobar la licencia ambiental de construcción de la variante San Francisco-Mocoa¹⁵, y al Ministerio de Agricultura, a través del Incoder, para solicitar que se suspendiera toda clase de adjudicaciones de predios en ese territorio indígena argumentando que son baldíos. A raíz de este derecho de petición,

¹⁵ En: <http://territoriotamoabioy.blogspot.com/2011/01/putumayo-pueblos-indigenas-frenan.html> (consultado el 07/05/2013).

en el cual los pueblos indígenas exigen se reconozca su presencia en este territorio, los alcaldes de los municipios de Colón, Santiago, Sibundoy y San Francisco, integrados en la Asociación de Municipios de la Cuenca Alta del Río Putumayo, emiten un comunicado en el cual reconocen la presencia de las comunidades indígenas en la región. No obstante, respaldan la construcción de la variante San Francisco-Mocoa, “que ha sido el anhelo para el Putumayo”, señalan (Comunicado a la opinión pública, 2010).

La acción de tutela fue interpuesta en septiembre de 2010 por el gobernador del cabildo indígena de San Francisco; su objetivo fundamental era impugnar la licencia ambiental aprobada por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible, y solicitar la inaplicación de la certificación expedida por parte del Ministerio del Interior, por la cual se desconocía la presencia de los indígenas en el área de influencia del proyecto. A partir de esta acción jurídica se solicita que se realice la consulta previa libre e informada, según lo reglamenta la legislación colombiana.

La acción de tutela ha obtenido hasta la fecha dos sentencias, en las cuales las peticiones del gobernador han sido denegadas en primera y segunda instancia. La sentencia de segunda instancia se remitió de oficio al Tribunal Constitucional para revisión y actualmente se encuentra en espera de resolución (Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación, 2011). Ahora bien, una lideresa indígena (34 años, 2013) expone sobre este proceso:

La tutela no es que se haya perdido. El Consejo de Estado dice: utilicen otras herramientas. El magistrado no dice “la tutela, no, la pierden, ustedes no tienen el derecho”. Si tú la lees, él dice que es urgente que utilicen otras herramientas y él mismo da las herramientas.

Una de esas otras herramientas es la acción popular. Esta es presentada en noviembre del 2010 por parte de Carmenza Tez Juajibioy, representante en ese momento de los solicitantes, y busca nuevamente impugnar la licencia ambiental, suspender el inicio de la construc-

ción de la variante y que se le ordene a Invías la reestructuración de la vía actual. Esta acción se encuentra pendiente de sentencia en el Tribunal Administrativo de Nariño. El día martes 26 de abril del 2011 se llevó a cabo, ante el Tribunal Administrativo de Nariño (en Pasto), la audiencia de dicha acción popular en el marco del proceso de la demanda, con lo cual se surtió la fase de pacto de cumplimiento, que se determinó fallido porque no hubo ninguna conciliación entre las partes. En consecuencia, en el marco de ese proceso, se entró a la fase de período probatorio¹⁶.

Las acciones jurídicas aún no culminan. Así lo expone un taita kamëntza (64 años, 2013):

Ahorita están corriendo con lo de la acción popular, y últimamente tenemos una última instancia que está en la Corte Constitucional, que es la acción de nulidad¹⁷ [...]. Vemos otra instancia, que es que se expanda la acción popular, que es algo más fuerte y pues la misma Corte lo está autorizando, aunque sea en la primera instancia. Ahorita estamos como en suspenso, pues a ver qué va a pasar; pero lo único que yo quiero es tener la satisfacción de que se haga o no se haga, pero por lo menos que nos hemos pellizado.

Ahora bien, “al Estado le vale nada lo que han dicho las comunidades. El BID, a través del MICI, tiene una queja y esa queja sí está en curso” (lideresa kamëntza, 34 años, 2013). Las comunidades indígenas kamëntza e inga pidieron detener el primer desembolso de la entidad, por 53 millones de dólares, para el comienzo de la obra, instaurando una queja ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del BID. El MICI eligió el proyecto para investigar

¹⁶ Infortunadamente, por escasez de recursos financieros y humanos, la solicitante no ha podido hacerle seguimiento al proceso (lideresa kamëntza, 34 años, comunicación personal, 2013).

¹⁷ Interpuesta por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. No obstante, no está claro este proceso, ni se encontró información pertinente sobre él.

las acciones y omisiones realizadas en el estudio y facilitar el diálogo para encontrar soluciones a la oposición indígena. Una delegación del BID visitó el valle del Sibundoy en octubre del 2011, y trazó una ruta de trabajo con los líderes del proceso para realizar las evaluaciones correspondientes. Este proceso está

... como en *stand by*. Ellos vinieron. Ellos iban a contribuir en la información a las poblaciones de lo que implica el proyecto [...] en el año 2012 se pretendía avanzar [...]; pero ahí nosotros también nos dimos cuenta de que no sé qué intereses tenía el que en ese entonces fue gobernador del Cabildo de Santiago (lideresa kamëntza, 34 años, 2013).

5.3.5 Alianzas y cooperantes

Los procesos políticos que se llevan a cabo para la defensa del territorio implican un proceso de establecimiento de relaciones directas con otras comunidades indígenas y ONG defensoras de derechos humanos y ambientalistas, entre otros actores nacionales e internacionales. Santos Granero (1996) considera que estas uniones han posibilitado un mayor reconocimiento político y la apertura de nuevos espacios de lucha y negociación. Las dinámicas de participación política de las comunidades indígenas inga y kamëntza no han sido ajenas a este proceso. Los espacios de acción política instaurados por estas comunidades se han visto fortalecidos, al haberse reunido en un mismo proceso de reclamación los pronunciamientos de todas las comunidades indígenas del Medio y Bajo Putumayo. Las “comunidades del Bajo Putumayo se han pronunciado, porque ellos ya están dimensionando de manera más clara lo que les va encima” (lideresa kamëntza, 34 años, 2013).

Por otro lado, un taita kamëntza (64 años, 2013) resalta que “esa movilización (junio del 2010) hasta el momento todavía está dando vuelta al mundo, porque pues eso fue algo que hizo conexiones a nivel internacional, derechos humanos, Comisión de Justicia y Paz. Bueno, tantas entidades”. Cabe destacar que son las organizaciones de defen-

sa de derechos humanos (como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos [Ilsa] y una organización que conocen como Colombia Super Network) las que las comunidades en cuestión reconocen como organizaciones aliadas. Por otro lado, “Yo no las conozco, yo no sé” (líderesa Kamëntza, 34 años, 2013) es lo que manifiestan los líderes indígenas al hablar sobre las ONG ambientalistas como la WWF; es “un peligro en el territorio, ha sido dañosa, es una ONG que no tiene legitimidad”.

5.3.6 Antihéroes de la acción colectiva: ¿cómo dirimir los disensos?

Los actores indígenas se constituyen, entonces, no solo por sus orígenes étnicos, sino también por sus trayectorias históricas concretas (Puyana Mutis, 2010). Adquieren sentidos de presente y futuro tanto a partir de su cosmogonía como del entramado de relaciones de cooperación o conflicto con las otras organizaciones sociales y políticas con quienes comparten el territorio, con lo cual su accionar resulta dinámico. Así, en el presente caso, aunque el período de mayor auge en términos de participación política de las comunidades kamëntza e inga significó un proceso de articulación y unión alrededor de sus orígenes étnicos para reivindicar procesos de diálogo y garantías ante los efectos que está trayendo consigo la construcción de la variante San Francisco-Mocoa (*Visión de futuro 1*), en la etapa posterior —en los espacios de latencia durante los cuales se determinan las discusiones y las futuras decisiones (Flórez Flórez, 2010)— afloraron los antagonismos residuales que persistieron después de dar prioridad estratégica a la identidad a partir de la cual se configuró la acción colectiva. Así, las dinámicas de separación entre las autoridades políticas, reconocidas como legítimas ante el Estado, y los líderes indígenas, cercanos a los procesos de resistencia desde las comunidades de base, las negociaciones permanentes de proyectos con los entes territoriales,

y los deseos políticos y económicos de cabildantes particulares, han hecho que paulatinamente la segunda visión de futuro, en la cual se impone la lógica de adaptación y competitividad, predomine en la actualidad en las discusiones que giran alrededor de la construcción de la variante San Francisco-Mocoa.

5.3.7 Dos dirigencias. Autoridades políticas versus líderes indígenas

“Cuando se trata de un dirigente legal, político, elegimos nuestros dirigentes. Pero hay los que se hacen dirigentes por sus capacidades. La comunidad lo acepta, para defender sus derechos. Hay dos clases de dirigentes” (alguacil mayor de cabildo indígena, 27 años, 2013). La primera clase de dirigente a la cual se hace referencia implica reconocer la importancia y legitimidad que tienen hoy en día los cabildos indígenas a nivel nacional. Aunque la comunidad kamëntza, específicamente, años atrás tenía una organización política fundada en el cacicazgo, desde la Ley 89 de 1890 los cargos de gobernador, alcalde mayor, alguacil mayor y alguaciles primero, segundo y tercero son considerados las máximas autoridades tradicionales con representación legal ante el Estado (Juajibioy, 2013). En la actualidad se elige al gobernador y demás cabildantes mediante voto secreto, en un ejercicio que se realiza cada fin de año, en el cual las mujeres mayores de edad también participan¹⁸.

Ahora bien, esta forma de organización es jerárquica, lo que implica el reconocimiento de un único líder (el gobernador) con legalidad y supuesta legitimidad para interactuar con otras organiza-

¹⁸ Según los usos y costumbres kamëntza, a las mujeres no se les ha permitido llegar a ocupar el cargo de gobernadora. Esto los diferencia de la comunidad inga (Juajibioy, 2013).

ciones sociales y políticas presentes en el territorio. Sin embargo, lo anterior ha sido cuestionado:

Si la filosofía de los grupos indígenas es participar, en la comunidad no debería existir un sistema de jerarquización, es ilógico. Pero para el Estado es lo más lógico, porque habrá una sola persona representando una comunidad y con la cual hay que tratar para manejar una comunidad de 10.000 personas, pero con alguien al mando. Años después de la Constitución de 1991, se nos otorgan más derechos a nosotros y dicen que los cabildos ya se pueden organizar de acuerdo a las necesidades de nosotros, nuestras costumbres y usos. Que, si queremos, seguimos como estamos o mejoramos. Bajo los principios de colectividad y por el hecho de ser comunitarios, debemos transformar nuestras formas de gobiernos, de las cuales cabildos que han avanzado sí han sabido utilizar y desarrollar los artículos de la Constitución como el 246, que dice claramente que nosotros ejercemos jurisdicción propia, y como ejercemos jurisdicción somos jueces, porque administramos justicia, hacemos justicia y aplicamos. Nos dicen que somos jueces, somos administrativos, que somos una organización política de carácter especial. Desarrollar esos artículos es tarea de nosotros los indígenas (alguacil mayor de cabildo indígena, 27 años, 2013).

A la organización política legal se le suma el proceso de defensa territorial llevado a cabo por líderes indígenas, ya que aunque “hay un grupo sólido [...] hemos estado sin una organización determinada”. Así lo expone una lideresa kamëntza (34 años, 2013), quien reconoce, además, que “están participando exgobernadores, exalguaciles y algunos miembros de la comunidad; pero como te digo, los cabildos, ellos saben y conocen del equipo, pero también han temido darle un reconocimiento para que continuara”. En esta dinámica se resalta el papel de la mujer, la cual se encuentra en un proceso de transición entre la tradición y la modernidad en términos de participación política (Juajibioy, 2013): “Ha tenido que pasar por unas transiciones, pues porque inicialmente la mujer ha sido bien invisibilizada [...] desde el

principio, ha estado participando, pero muy oculta o no muy visible ante la comunidad” (socióloga kamëntza, 2013).

Al no ser inicialmente escuchada en esferas políticas, la mujer se ha ido incorporando en los espacios de poder al tener nuevas disposiciones para

... participar en los estudios, digamos, en la formación académica. Entonces por eso ha tenido como las condiciones: la percepción y las disposiciones han cambiado. Entonces digamos que esos son los cambios que se han dado, las transacciones que se han dado y, por ende, la mujer ha llegado a participar, a ocupar como un espacio político dentro de la comunidad, algo, un espacio (Juajibioy, 2013).

Lo anterior se manifiesta al reconocer a una mujer como representante de las comunidades kamëntza e inga en las acciones jurídicas interpuestas en el 2010.

No obstante, en los años posteriores, 2011 y 2012, se da un “divorcio entre la dirigencia [cabildos] y el pueblo [...] se estanca [el proceso], es una pérdida gravísima”, sugiere la misma lideresa. Es en este momento cuando los antagonismos residuales y las posiciones de sujeto (Laclau, 1997; Mouffe, 1993) de diferentes cabildantes afloran, superado el primer período de unión, con lo cual se resalta que

... para el 2012 el que llegó como cabeza del resguardo de Santiago, y de paso se realza como el del cabildo mayor, hace un juego de manipulación y manipula a todos los cabildos, y fue grave. Ellos son los taitas y ellos son los que mandan. Lo que se hace por fuera del cabildo no tenía validez y todo el que fuera a hacer algo afuera de la autoridad, la orden en Santiago era que se apresara e iba a ser judicializado según usos y costumbres (lideresa kamëntza, 34 años, 2013).

En este contexto, se pone en juego la confianza para establecer discursos públicos (Scott, 2000) en función de solicitar garantías ante la construcción de la variante San Francisco-Mocoa. Aunque ante los

procesos de solicitud de ampliación, constitución y saneamiento de resguardos están actualmente unificados, “para el caso del proceso peleado del derecho con respecto a la variante están desarticulados y no hay la confianza para la articulación”. Bajo esta lógica, se espera que sean los cabildos los que acompañen el proceso, ya que “cuando la gente se da cuenta de que no es así, se agudiza una confrontación. Como ya nos ha pasado, la idea no es agudizar, sino buscar puntos de encuentro para fortalecerse desde la dirigencia y poder avanzar”. A lo anterior se le une el factor económico, en un proceso de largo plazo —más de cuatro años—:

No hemos tenido apoyos económicos. La mayor parte ha salido del bolsillo de la gente que ha estado interesada en esto. Esa es la mayor limitación. Ahorita hay que trabajar, y si uno no trabaja, no hay comida en la chagra, y si uno no tiene la plata, no la compra (lideresa kamëntza, 34 años, 2013).

5.3.8 Autoridades políticas y relación con el Estado

El mayor daño que yo veo, a término personal, hacia la población indígena es cómo las instituciones y el Estado se meten a la organización del pueblo kamëntza, en términos occidentales, en su organización política. Sobre todo, las instituciones contaminan, permean, son ellas las que los mueven a que hagan campaña, de pronto les dan algunos recursos, y son ellas las que montan a la gente para que dirija al pueblo. Al llegar, esa dirigencia ya pierde el horizonte colectivo y se centraliza al manejo de proyecticos pequeñitos o de sencillos recursos que están ligados al Sistema General de Participaciones (SGP) (lideresa kamëntza, 34 años, 2013).

Así, a los usos y costumbres asociados al manejo de los recursos naturales se les suman nuevas dinámicas económicas y políticas que deben saber manejar las comunidades indígenas kamëntza e inga en

su relación con el mundo occidental, y en su lucha por desarrollarse de manera relativamente autónoma. Las comunidades indígenas aprenden a moverse en el lenguaje del desarrollo (por ejemplo, la necesidad de formular *planes de vida* o planes de desarrollo indígena), estableciendo relaciones políticas con el Estado a través de sus autoridades. De esta manera, reafirman lo que entienden por autonomía y autodeterminación, mientras que reconocen a las instituciones del Estado (Ulloa, 2003) y se relacionan con estas en términos de recursos económicos¹⁹, con el propósito de hablar el mismo lenguaje.

Actualmente, el Estado transfiere los recursos de la nación a través del Sistema General de Participaciones (SGP). La inversión de estos capitales, según lo reglamenta la Ley 715 del 2001, se debe realizar en sectores que garanticen las necesidades básicas de las comunidades en las áreas de educación, salud, vivienda, saneamiento básico y desarrollo agropecuario. Así lo expone un alcalde mayor de cabildo indígena (33 años, 2013) cuando hace referencia a la relación que tienen los cabildos del valle del Sibundoy con las alcaldías de Colón, Santiago, San Francisco y Sibundoy con respecto a estos recursos:

Ellos son los ordenadores del gasto. En el Sistema General de Participaciones ellos son los ordenadores, los ejecutores. Y nosotros buscamos cofinanciar con el municipio algunos proyectos, no de gran magnitud, sino de mediana magnitud y de cumplimiento inmediato. Nosotros no tenemos proyectos macro.

Según Rosas Riaño (2007), los líderes indígenas han establecido procesos de diálogo y negociación con funcionarios públicos de los niveles departamental y nacional aprendiendo a manejar la brujería

¹⁹ El dinero no deja de ser una mediación simbólica que afirma la soberanía de las instituciones políticas dominantes (Rosas Riaño, 2007), ante lo cual es pertinente reflexionar sobre el tipo de autonomía que se está construyendo a través de ella, y sobre el tipo de autoridades públicas y administrativas que se está empoderando en consecuencia.

del blanco: el papel, el idioma, la tecnología y los tiempos burocráticos, con el propósito de avanzar en el impulso económico de sus comunidades y tener

... un programa de proyectos para ejecutar en el campo de la salud, el campo de la justicia, de la cultura, del desarrollo agropecuario, 251 millones al año. Per cápita no merecíamos eso, somos más de 6.000. Entonces no alcanza, eso el Estado no lo ha visto.

El surgimiento de un líder (por lo general un cabildante, aunque no se limita al liderazgo de estos) implica la necesaria adquisición de nuevas capacidades y técnicas de comunicación, ya que ahora su legitimidad no solo se cimienta en los elementos tradicionales, sino también en una serie de conocimientos que deben facilitar las relaciones con agentes externos a las comunidades, como las alcaldías, Corpoamazonía o entidades nacionales como Incoder (Santos Granero, 1996).

El líder político kamëntza o inga cumple así el papel de mensajero entre dos mundos, con lo cual es delegado por la comunidad y por las autoridades tradicionales para desarrollar relaciones que se basan en una apuesta de carácter político, pero que a su vez se materializan en dos elementos: la celebración de convenios, por medio de los cuales se establecen las actividades y compromisos a llevar a cabo por cada una de las partes (entidades estatales, territoriales y autoridades indígenas), y la negociación de presupuestos (recursos económicos).

Bajo dicha lógica, estas negociaciones se relacionan con los “ánimos de cooperación” de los interlocutores, lo cual demanda cierta habilidad social para acordar los términos de referencia, la distribución de responsabilidades entre las partes y la programación de presupuestos. “Entonces hay problemas”. Así lo resalta un alguacil mayor de cabildo indígena (27 años, 2013), tras lo cual ahonda:

Por ejemplo en las alcaldías. Estas se aprovechan de los indígenas. También hay politiquería. No hay independencia. Autodeterminación

entre los cabildos ya no hay, porque viven de la Gobernación. En eso hay muchos cabildos que no han salido de la dependencia.

Los convenios también se celebran con entidades como Corpoamazonía, para avanzar en proyectos de instalación de chagras, construcción de malocas y saneamiento básico. Se resalta que “Corpoamazonía tenía un banco de proyecto y realizaba los que era más *conveniente* realizar” (funcionaria de Corpoamazonía, 2013. Énfasis añadido). Es pertinente, entonces, preguntarse quién decide sobre la conveniencia de los proyectos que se negocian.

5.3.9 Subjetividades en el proceso de participación política

La relación de las autoridades políticas con el Estado nos lleva a reconocer que la construcción de identidad en el ámbito micro implica un inevitable ejercicio de poder que impide la armonía y coherencia total en un movimiento social indígena. Las tensiones que resultan de la ocupación, de manera simultánea y contradictoria, de distintas posiciones de sujeto (Laclau, 1997; Mouffe, 1993) —cabildante, líder político, autoridad tradicional, lideresa, madre, esposo, etc.— resaltan el hecho de que el poder circula en los procesos de participación política y que la constitución de la identidad es un proceso continuo de acercamiento y distanciamiento con relación a aquel.

Bajo esta lógica, se reconoce que existen muchas divisiones internas dentro de las organizaciones indígenas, que han llevado a la competencia política por los recursos financieros nacionales e internacionales (Ulloa, 2003). Evidencia de esto es la preocupación según la cual

... hay dirigentes que están a favor de la variante por intereses personales, que uno podría decir, un puesto en el gobierno o en alguna institución, acomodo en un contrato, una compensación. Sabemos que hay muchos dirigentes que han hecho esto. Intereses personales, siempre

son los que están en contra de la comunidad, no intereses colectivos (alguacil mayor de cabildo indígena, 27 años, 2013).

Por otro lado, los diversos participantes en una organización indígena también son sujetos de deseo (Flórez Flórez, 2010) a quienes les urge salirse del orden para lograr otras dinámicas de reconocimiento; pasiones, emotividades e intereses se entrelazan a veces de manera contradictoria con la reivindicación de la identidad colectiva, los discursos públicos y la participación política en defensa del territorio: “Desafortunadamente, en Sibundoy queda un dirigente que está al interés de la instituciones y hace todo el lobby para la instituciones. Eso es grave, porque se debilita otra vez el interés de un pueblo que quiere arrancar con esa defensa” (lideresa kamëntza, 34 años, 2013).

5.3.10 Tácticas de sujeción: ¿cómo dirimir los disensos?

Los movimientos sociales se mantienen dinámicos en la medida en que dan cabida al disenso como un ejercicio que posibilita la búsqueda constante del consenso sobre sus principios de acción política. Aunque los movimientos logran articular percepciones y discursos colectivos lo bastante fuertes para diferenciarse de otros actores, deben ser lo suficientemente flexibles para no contrarrestar la diversidad que se ubica dentro de ellos. Así lo entiende un alguacil mayor de cabildo indígena (27 años, 2013):

Que en ese proceso tengamos diferencias con otros cabildos lo considero normal. El problema está en no dar una respuesta clara en el momento, para que esas diferencias no se sigan agrandando. Eso es normal, porque apenas nos estamos volviendo fuertes en temas fuertes.

Para que las contradicciones y conflictividades no necesariamente conduzcan a crisis aniquiladoras, la organización indígena debe permitir un leve proceso de apertura y cierre de sus límites; los

antagonismos residuales pueden llegar así a potenciar los procesos de defensa y resistencia.

Ahora bien, nuevamente la identidad colectiva, que oscila entre el indigenismo y el ecologismo, se resalta como elemento de unidad:

Sí estamos claros sobre la filosofía identitaria de qué es ser Kamëntza, ese es el punto de encuentro, de ahí que hagamos estrategias conjuntas. Para unificar pensamientos hay muchas estrategias, hay herramientas unificadoras [...]. El sistema de justicia propia: estamos en discusiones sobre el tema, pero falta ese elemento legitimador de la comunidad; pero tampoco podemos esperar, porque las cosas están sucediendo. Entonces, en la medida en que no se den tenemos que accionar como cabildo (alguacil mayor de cabildo indígena, 27 años, 2013).

5.3.11 Resistencia como complicidad subversiva

No se puede desconocer que los grupos indígenas están constantemente resistiendo, resignificando y reinterpretando las prácticas cotidianas desde su posición de subalternos; desde sus visiones de futuro, sus formas de organización y participación política, y sus disensos potencia-dores de nuevas discusiones y elementos de defensa o reivindicación política, económica y cultural. En la configuración de las dinámicas territoriales (en las cuales se conforman prácticas de poder) se privilegia la praxis social, la existencia de la capacidad de las comunidades indígenas kamëntza e inga para la realización de acciones políticas que facultan y posibilitan nuevas acciones e interacciones sociales. Según la lideresa kamëntza (34 años, 2013),

... como ganancia de todo este proceso, el Inviás se ha visto en aprietos, y también el mismo se prestó para que viniera el Incoder acá. La gente les dijo las cosas y no se salieron con la suya. Por lo menos el Incoder escuchó la pretensión, se retoma otra vez el proceso de constitución y

ampliación de resguardos y el Incoder le está poniendo cuidado a eso ya con el Ministerio del Interior. El pueblo no permitió que el Invías le hiciera esa jugada sucia.

Ahora bien, su resistencia ante el Estado no implica una lucha de suma cero, en la cual el ganador puede instaurar un nuevo contrato social, ni mucho menos un momento en el que desaparecen las relaciones de poder. Por el contrario, implica el diseño de proyectos alternativos a la modernidad, para ensanchar las formas de entender la democracia y apostar por diversidades identitarias que desbordan las lógicas binarias. Estas comunidades indígenas no están por fuera de la “ideología” dominante. Por el contrario, están ubicadas en las contracorrientes que se mantienen en las márgenes de los espacios políticos y culturales. Los movimientos indígenas negocian permanentemente los sentidos hegemónicos del “sistema-mundo europeo / euronorteamericano capitalista / patriarcal moderno / colonial” y, al mismo tiempo, hasta de forma contradictoria, están desplegando estrategias de transformación que desbordan este sistema.

La resistencia, entonces, no se limita solo a obtener beneficios materiales o políticos. Es la lucha por la

... apropiación de los símbolos, sobre la definición de la justicia, una lucha sobre cómo han de entenderse el pasado y el presente, una lucha para identificar las causas y asignar las culpas, un esfuerzo continuo por otorgar sentido a la historia local (Juajibioy, 2013).

Se trata de ubicarse en espacios transmodernos, en los cuales se pueden estar creando formas alternativas de racionalidad económica, política y ética (donde priman valores reales como la solidaridad, la equidad y la justicia) ubicados en la intersección entre lo considerado tradicional y lo moderno. Son formas de conocimiento y participación intersticiales, híbridos en el sentido de *complicidad subversiva* con el sistema.

A MODO DE CONCLUSIÓN: EL DESARROLLO SE HACE Y PUNTO, AUNQUE SEA DESDE LA FRONTERA

A lo largo de este proceso de investigación, se buscó analizar la capacidad de las comunidades indígenas para articular su visión de futuro con la visión de desarrollo planteada por la comunidad internacional y la política pública nacional. A partir de este objetivo, se caracterizó la visión de desarrollo planteada para la Amazonía colombiana desde la Iirsa, la percepción de las comunidades indígenas kamëntza e inga ante la construcción de la variante San Francisco-Mocoa como parte de este proyecto subcontinental, y la visión de futuro que dichas comunidades tienen de un territorio que consideran les pertenece. Así mismo, se buscó explorar si esta visión de futuro se articuló con la acción política adelantada por parte de las comunidades indígenas como reacción ante tal megaproyecto.

La visión de desarrollo planteada desde la comunidad internacional y la política pública nacional expone a la Iirsa enmarcada en la lógica del modelo económico actual, el cual ha implicado un reajuste espacial caracterizado por la organización de nuevas divisiones territoriales de acumulación de capital y de trabajo, y la culminación de la penetración de las relaciones sociales capitalistas en estructuras sociales preexistentes. Aunque esta iniciativa no tiene una temporalidad definida, está desencadenando procesos que incidirán durante las próximas décadas en los grupos poblacionales del subcontinente. Esta política pública subcontinental, y su expresión nacional, ha re-

encauchado en Colombia el discurso espacial de la Conquista, bajo el cual se continúan desconociendo las formas de organización territorial indígena. La percepción de las comunidades y culturas en la formulación de iniciativas de desarrollo regional como esta se continúa invisibilizando ante las “bondades” ampliamente difundidas de los diferentes proyectos de desarrollo convencional.

El contexto en el que se enmarca esta estrategia de integración subcontinental tipo túnel implica, así, que el Gobierno nacional haya construido una mirada sobre el territorio que lo caracteriza como marginal e inhabitado, pero resulta ingenuo creer que esta construcción es legítima. Actualmente es difícil contemplar la posibilidad de hacer escuchar nuevas objeciones o propuestas ante la construcción de la variante San Francisco-Mocoa. Son los discursos técnicos, apoyados en intereses económicos o políticos, los que pueden modificar en algo la estructura de este tramo de integración y desarrollo en el marco de la Iirsa. Este proyecto de desarrollo no menciona, entonces, la perspectiva de las comunidades indígenas, como consecuencia de una lógica que ha venido excluyendo durante siglos las perspectivas, creencias y prácticas que difieren de los modos específicos de conocimientos y de las dinámicas políticas y económicas dominantes. Se ignora que esta mirada depende de la existencia de un “otro diverso” a quien se desconoce y se descalifica constantemente como alternativa de vida posible.

Lo anterior se traduce en que la existencia de grupos llamados tradicionales, locales o subalternos que históricamente han vivido en regiones y territorios periféricos, como los kamëntza e ingas, ha puesto en evidencia que la expansión del progreso va de la mano con la negación que acompaña la violencia del proyecto civilizatorio para comunidades como la indígena, elemento que ha estado implícito en los procesos de articulación de la economía global. Persiste una tendencia a decirles a las comunidades indígenas lo que deben pensar y hacer en torno al desarrollo, en vez de propiciar diálogos horizontales que tengan en cuenta las percepciones, identidades colectivas y subjetividades (la multiplicidad de espacios) que están en constante definición y caracterizan al territorio colombiano.

El territorio se presenta, entonces, como el ámbito privilegiado de confrontación social, política y económica, donde los espacios concretos y materiales, percibidos, concebidos y vividos se combinan, y los intereses políticos y económicos se expresan. Se trata de campos semánticos traslapados, desde donde se constituyen las construcciones sociales, de modo que es allí donde se pueden observar los juegos o luchas de poder que se desarrollan en una sociedad. Hechos tan básicos como nombrar un espacio implican un ejercicio de poder, lo cual moldea finalmente los comportamientos sociales y, por ende, al territorio, en el cual se combinan desde discursos colectivos reivindicatorios hasta dinámicas de poder que operan a escala micro en el momento en que se recrean y perpetúan las macrocategorías —etnia y género, por ejemplo— en la vida cotidiana.

Desde esta perspectiva, el espacio personal o de grupos no coincide necesariamente con el sentido dominante, lo cual evidencia una vez más la existencia de múltiples espacios en un mismo contenedor hegemónico. Es así como los conflictos colectivos que se presentan en el valle del Sibundoy están relacionados con las reivindicaciones y los intereses que tienen los diferentes actores sobre el territorio; intereses de carácter económico, como los expresados por el Gobierno nacional, o reclamaciones sociales y culturales por parte de comunidades indígenas como los kamëntza y los ingas. Se vislumbra así un paisaje humano —relacionado con la superposición de percepciones e imaginarios colectivos de los actores locales sobre su contexto natural— caracterizado por zonas sagradas y de conservación, definidas por las cualidades espirituales de la naturaleza, y zonas de modernidad, definidas a partir de los procesos de urbanización, construcción de la variante San Francisco-Mocoa y extracción y movilización de recursos y productos.

Las dinámicas que se constituyen en este territorio dan paso así a que los diferentes actores, por un lado, determinen estrategias para defender los proyectos de desarrollo convencional y, por otro, enfrenen o resistan las prácticas que consideran imposiciones a su desarrollo deseado. La defensa del territorio por parte de las comu-

nidades indígenas ha implicado, entonces, la creación de sentidos de pertenencia ligados a la construcción política de un proyecto de vida colectivo (*Visión de futuro 1*), pero también la constante redefinición de las relaciones que se sostienen con la sociedad dominante a nivel macro, a partir de acciones individuales o tácticas de *sujeción* cotidianas desde las cuales continuamente las personas se atan y a la vez se desprenden (*Visión de futuro 2*) de la identidad en torno a la cual se articula la resistencia.

En este sentido, las percepciones y prácticas de grupos como los kamëntza y los ingas por un lado internalizan el punto de vista que propaga la autoridad dominante, el cual puede considerarse como una realidad objetiva, y, por otro, contribuyen a deconstruir dichas visiones del mundo a partir de sus identidades colectivas y subjetividades, y desde posiciones de sujeto. Según las comunidades indígenas kamëntza e inga, el “verdadero” concepto de desarrollo se relaciona con el bienestar integral de las personas, las familias y el colectivo. Este bienestar, a su vez, implica tener en abundancia diferentes elementos de la vida humana, pero cada uno de ellos en equilibrio con el resto; abundancia en la dimensión espiritual de la vida, en la dimensión del aprendizaje y el conocimiento, en la dimensión organizativa o política, y en la dimensión económica y ambiental. El sostenimiento alimentario a partir de productos orgánicos, condiciones de salud donde prime la medicina tradicional y recibir una atención humana en los centros de salud, el derecho a la formación y a la investigación propia, y autonomía en los procesos de participación política, son algunos de los derechos de los cuales las comunidad indígenas resaltan deben gozar en un territorio considerado como propio, con el cual a su vez se comparte la biodiversidad, el agua y el oxígeno. Valores reales como la solidaridad, la equidad y la justicia dan paso a racionalidades éticas, económicas y políticas donde deben primar las formas comunitarias de resolver la vida cotidiana.

La construcción y constante redefinición de proyectos de vida colectivos han dado cabida en estas comunidades a procesos permanentes de acción y participación política. Ahora bien, el clima de

novedad que envuelve el potencial de este tipo de movimientos indígenas para propiciar un cambio social, en Colombia y debido al carácter identitario y estratégico que toman desde la década de los ochenta, se diluye al plantearse que estos movimientos difícilmente pueden llegar a transformar las dinámicas de la modernidad. Por otro lado, se reconoce que tales movimientos pierden en organización y combatividad cuando no logran conquistar en cortos períodos las reivindicaciones que los gestaron. Este puede ser el caso de las comunidades indígenas kamëntza e inga, lo cual da paso, en su accionar político, a procesos respetuosos del sistema ordenador del Estado, en los que se adoptan sus procedimientos de resolución de conflictos y se apropian de aquellos contenidos que resultan provechosos a nivel individual. No obstante, no se trata de ver cómo el movimiento indígena culmina el proyecto moderno, sino de ver cómo hace tambalear las jerarquías que dicho proyecto ha producido y cómo sigue creando formas alternativas de racionalidad económica, política y ética, ubicadas en la intersección entre lo considerado tradicional y lo moderno; formas de conocimiento y participación intersticiales, híbridas en el sentido de complicidad subversiva con el sistema.

No estoy ubicada a una “distancia considerable” del “objeto” que se estudió en esta investigación. Por el contrario, estoy completamente “manchada/atravesada” por los hechos presentados en esta tesis de investigación, y por esto mismo me encuentro en una situación contradictoria, entre sujeto-objeto de investigación no siempre distinguible, posición desde la cual insisto en identificar, visibilizar y darle importancia epistémica y política a aquellos lugares/grupos que hablan desde una “exterioridad cercana” a la modernidad (desde la frontera) como una lucha continua y vigente. Bajo esta lógica de pensamiento, y con el propósito de avanzar en futuros procesos de reflexión y análisis, nos acercamos, por último, al concepto de *frontera*, entendida esta como la multiplicidad de voces alejadas del centro, que permite construir una forma de mirar simultáneamente hacia el pasado y el futuro (Anzuldúa, 1987; Castillo Piñero, 2002). Los grupos o personas que se encuentran en la frontera se encuentran en

un estado constante de transición a partir del cual negocian niveles de subordinación y control, pero también tienden a tener una mayor habilidad para hacer conexiones entre “ambos mundos”.

Pensar a las comunidades indígenas, en este caso kamëntza e ingas del valle del Sibundoy, desde esta perspectiva permite resaltar que los “individuos de frontera” están caracterizados por su habilidad para apropiarse de múltiples identidades —un producto de sus procesos de innovación en el plano económico y cultural— y, por consiguiente, mejor capacitados para hacerle frente a las contradicciones y la ambigüedad que les presenta el contexto dominante, y para experimentar entre el centro y la periferia, entre la identidad colectiva y la individual. Esto, a su vez, les permite generar procesos de adaptación y decisión ante la posibilidad de contradecir o estar de acuerdo con el paradigma dominante, con lo cual resultan más empoderados que aquellos que están inmersos en este.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Agudelo, C. (2010, enero-junio). Movilizaciones afrodescendientes en América Latina: una visión panorámica de algunas experiencias contra la exclusión y por el derecho a la identidad. *Colombia Internacional* 71, 109-126.

Amazon Conservation Team Brasil (2008). *Metodología de mapeamento cultural colaborativo*. Brasilia: ACT Brasil Edições.

Anzaldúa, G. (1987). *Borderlands / La frontera. The New Mestiza*. San Francisco, CA: Aunt Lute Books.

Arreaza Moreno, D. (2012). *Impacto de la política exterior brasileña en Sudamérica*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Ávila Pacheco, V. M. (2010). Representaciones bifurcadas en tiempos de futuro: de la colonialidad a la decolonialidad. *Diálogo de Saberes*, 32, 91-102.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2000). *Un nuevo impulso a la integración de la infraestructura regional en América del Sur*. Departamento de Integración y Programas Regionales. Recuperado de: http://www.iadb.org/intal/detalle_publicacion.asp?idioma (consultado el 17/11/2011).

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2004). *Análisis del contexto de inversión privada en infraestructura en América Latina y el Caribe 1995-2003*. Washington, D. C.: Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE).

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2009). BID ayudará a Colombia a construir ruta San Francisco-Mocoa. Recuperado en <http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2009-12-18/bid-ayudara-a-colombia-construir-ruta-san-francisco-mocoa,6167.html>

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2011). *Iirsa 10 años después: sus logros y desafíos*. Buenos Aires: BID-Intal, 2011.

Bara Neto, P. (2007). *Visión de negocios del Eje Amazonas*. Recuperado de http://www.iirsa.org/BancoConocimiento/V/vision_de_negocios_eje_del_amazonas/vision_de_negocios_eje_del_amazonas.asp.

Barnes, S. H.; Kaase, M. et ál. (1979). *Political action. Mass participation in five western democracies*. Beverly Hills, CA: Sage.

Barth, F. (1969). *Ethnic groups and boundaries: The social organization of cultural difference*. Londres: George Allen and Unwin.

Beaufort Camargo, E. A. (2010). Determinantes del marco institucional ambiental para la Amazonía Colombiana. En G. Palacio Castañeda (ed.), *Ecología política de la Amazonía colombiana* (pp. 325-356). Bogotá: Ilsa, Universidad Nacional de Colombia (sede Amazonía), Ecofondo.

Beck, U. (1997). *¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización*. México: Siglo XXI.

Benavides Vanegas, F. S. (2009). *La movilización de los pueblos indígenas y la lucha por sus derechos en Colombia*. Barcelona: Institut Català Internacional per la Pau Barcelona.

Bernal, K. (1999). *Análisis del sistema tradicional de producción indígena y sus transformaciones como consecuencia del contacto con el sistema de mercado occidental en el departamento del Vaupés*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Bhabha, H. (1994). *The location of culture*. Londres: Routledge.

Bonilla, V. D. (2006). *Siervos de Dios y amos de indios: el Estado y la misión capuchina en el Putumayo*. Cali: Editorial Universidad del Cauca y Universidad del Valle.

Bourdieu, P. (1987, abril 9-10). *What makes a social class? On the theoretical and practical existence of groups*. Lecture delivered as keynote address to the Dean's Symposium on "Gender, Age, Ethnicity and Class: Analytical Constructs or Folk Categories?", University of Chicago.

Butler, J. (2001) [1990]. *El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad*. México: Editorial Paidós.

Butler, J.; Laclau, E. & Žižek, S. (2003). *Contingencia, hegemonía, universalidad. Diálogos en la izquierda*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Castells, M. (1997). *The power of identity*. Malden, MA: Blackwell.

Castillo Piñero, M. (2002). Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy. Athens, GA: *Women's Marginality and Biodiversity: Dilemma of Economic Development*. University of Georgia.

Castro-Gómez, S. & Grosfoguel, R. (eds.) (2007). *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.

Chakrabarty, D. (2000). *Provincializing Europe: Postcolonial thought and historical difference*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Chambers, R. (1994). The origins and practice of participatory rural appraisal. *World Development*, 22 (7).

Chávez, M. & Vieco, J. (2005). Indígenas del Alto Putumayo-Caquetá. En *Introducción a la Colombia Amerindia*. Icanh. Enciclopedia Web. Banco de la Republica, mayo 18 del 2005. Recuperado de www.banrep.gov.co/blaavirtual/letra_a/amerindi/putucaqu.htm (Consultado el 17/11/2011).

Comunicado de Brasilia: infraestructura de integración (2000). Recuperado de http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/di1-9-00.htm

Congreso Visible (2012). *¿Qué hay de fondo en las movilizaciones del Putumayo?* Recuperado de <http://www.congresovisible.org/agora/post/que-hay-de-fondo-en-movilizaciones-del-putumayo/3945/>

Conpes 3610 (2009). Recuperado de <https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=FMWtmPQte%2BI%3D&tabid=907>

Consejo Privado de Competitividad. (2013). *Informe Nacional de Prosperidad. Ruta hacia la prosperidad colectiva*. Recuperado de http://www.compitem.com.co/site/wp-content/uploads/2013/11/cpc_inc2013-2014-Informe.pdf

Corredor vial Pasto-Mocoa, variante San Francisco-Mocoa. Perfil de proyecto (2006). Documento de trabajo suministrado por Amazon Conservation Team Colombia.

Curry, G. (2003, octubre). Moving beyond post-development: Facilitating indigenous alternatives for “development”. *Economic Geography*, 79, (4), 405-423.

DANE (s. f.). La visibilización estadística de los grupos étnicos colombianos. Recuperado de http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/visibilidad_estadistica_etnicos.pdf

DANE (2010). Boletín Censo General 2005 Perfil Putumayo. Recuperado de http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/86000T7T000.PDF

Deleuze, G. & Guattari, F. (1987). *Mil mesetas*. Barcelona: Pre-textos.

Diario del Huila. (2013). Putumayo superó al Huila en producción de petróleo. Recuperado de <http://miputumayo.com.co/2013/06/11/putumayo-supero-al-huila-en-produccion-de-petroleo/>

DNP (s.f.). Cifras IPM por municipio y departamento 2005: incidencias y privaciones. Recuperado de www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloSocial/PolíticasSocialesTransversales/PromocióndeLaEquidadyReduccióndeLaPobreza.aspx

Dussel, E. (2000). Europa, modernidad y eurocentrismo. En E. Lander (comp.), *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas* (pp. 41-53). Buenos Aires: Clacso.

Escobar, A. (1992). *La invención del Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo*. Bogotá: Norma.

Escobar, A. (2005). *Más allá del Tercer Mundo. Globalización y diferencia*. Bogotá: Icahn.

Espinal Soares, A. M. (2001, septiembre-diciembre). Los movimientos indígenas de Colombia y los problemas del medioambiente. *Boletín Antropológico*, 3 (53), 373-394.

Franky, C. & Zárate, C. (eds.) (2001). *Imani Mundo: estudios en la Amazonia colombiana*. Bogotá: Unibiblos.

Flórez Flórez, J. (2010). *Decolonialidad y subjetividad en las teorías de movimientos sociales*. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

Flórez, M. (2007). *Selva abierta. Vía Pasto-Mocoa e hidrovía del Putumayo*. Bogotá: Ilsa.

Foucault, M. (1967). *Of other spaces, heterotopias*. Recuperado de <http://foucault.info/documents/heteroTopia/foucault.heteroTopia.en.html> (consultado el 20/03/2010).

Foucault, M. (1997) [1969]. *La arqueología del saber*. Madrid: Siglo XXI.

- Foucault, M. (2000) [1975]. *Vigilar y castigar*. Madrid: Siglo XXI.
- Fung, A. & Olin Wright, E. (2003). *Democracia en profundidad: nuevas formas institucionales de gobierno participativo con poder de decisión*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Gallup, J.; Gaviria, A. & Lora, E. (2004). *América Latina, ¿condenada por su geografía?* Bogotá: Alfa Omega, BID.
- Garcés, F. (2007). Las políticas del conocimiento y la colonialidad lingüística y epistémica. En S. Castro-Gómez & R. Grosfoguel (eds.). *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global* (pp. 217-242). Bogotá: Siglo del Hombre Editores.
- García Canclini, N. (1999). *La globalización imaginada*. México: Editorial Paidós.
- García Canclini, N. (2001). *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Buenos Aires: Editorial Paidós.
- Gómez Montañez, G. & Delgado Mahecha, O. (1998). *Espacio, territorio y región: conceptos básicos para un proyecto nacional*. Recuperado de http://pis.unicauca.edu.co/moodle-2.1.2/pluginfile.php/26563/mod_resource/content/0/montanez_y_delgado_1998.pdf
- Guha, R. (1982). Prefacio a los estudios de la subalternidad. Escritos sobre historia y la sociedad surasiática. En *Debates poscoloniales. Una introducción a los estudios de la subalternidad* (pp. 29-30). Bogotá: Gente Nueva.
- Harvey, D. (1990). Between space and time: Reflections on the geographical imagination. *Annals of the Association of American Geographers*, 80 (3), 418-434.
- Harvey, D. (2003). *El "nuevo" imperialismo: sobre reajustes espacio-temporales y acumulación mediante desposesión*. Buenos Aires: Clacso. Recuperado de <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/social/harvey.pdf>
- Henrich, J. (1997). Market Incorporation, Agricultural Change, and Sustainability among the Machiguenga Indians of the Peruvian Amazon. *Human Ecology*, 25 (2), 319-351.
- Herrera Zgaib, M. A. (comp.). (2009). *Hegemonías y contra-hegemonías en la subregión Andino-Amazónica*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

- Herrera, A. (2011). *La recuperación de tecnologías indígenas*. Bogotá: Universidad de los Andes.
- Herrera, X. (2000). La transformación de la economía y la familia indígena de la selva de Matavén. En M. Lobo-Guerrero, X. Herrera, J. de Greiff & A. Luque, *Matavén: selva corazón de la salud*. Bogotá: Etnollano.
- Huanacuni Mamani, F. (2010). *Buen vivir / vivir bien: filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas*. Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI). Recuperado de <https://www.reflectiongroup.org/stuff/vivir-bien>
- Ibrahim, Z. (1996). The making of subaltern discourse in the Malaysian Nation-State: New subjectivities and the poetics of Orang Asli dispossession and identity. *Southeast Asian Studies*, 34 (3), 568-600.
- Ives, P. (2005). Language, Agency and Hegemony: Gramscian Response to Post-Marxism. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 8 (4), 455-468.
- Krueger, R. & Casey, M. A. (2000). *Focus groups. A practical guide for applied research* (3rd. Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Laborde, R. (2010). ¿Conservación o desarrollo? Análisis de la política ambiental y extractiva en la Amazonía. En G. Palacio Castañeda, *Ecología política de la Amazonía colombiana* (pp. 163-182). Bogotá: Ilsa, Universidad Nacional de Colombia (sede Amazonía), Ecofondo.
- Laclau, E. (2008). *Debates y combates: por un nuevo horizonte de la política*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Laclau, E. & Mouffe, Ch. (1997). *Hegemonía y estrategia socialista: hacia una radicalización de la democracia*. Madrid: Siglo XXI.
- Lefebvre, H. (1991). *The production of space*. Oxford: Blackwell.
- Le Goff, J. (1991). *El orden de la memoria*. Barcelona: Editorial Paidós.
- Levy, D. & Egan, D. (2003). A Neo-Gramscian Approach to Corporate Political Strategy: Conflict and Accommodation in the Climate Change Negotiations. *Journal of Management Studies*, 40 (4), 803-829.
- Maggio, J. (2007). "Can the Subaltern Be Heard?": Political Theory, Translation, Representation, and Gayatri Chakravorty Spivak. *Alternatives*, 32 (4), 419-443.

- Mance, H. (2008). La política de la sostenibilidad: ascenso y declive del Ministerio del Medio Ambiente colombiano. En M. Rodríguez Becerra, *Gobernabilidad, instituciones y medio ambiente en Colombia* (pp. 130-216). Bogotá: Foro Nacional Ambiental.
- Marchand, M. H. & Parpart, J. (1995). *Feminism, postmodernism, development*. Londres: Routledge.
- Martínez, G. (2007). *Construyendo Agenda 21 para el departamento de Putumayo: una construcción colectiva para el desarrollo sostenible de la Amazonía colombiana*. Bogotá: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi).
- Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (2011). *Informe de evaluación variante San Francisco-Mocoa*. Recuperado de <http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36652352>
- Mendiola, I. (2002). *Movimientos sociales. Definición y teoría*. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.
- Mignolo, W. (2000). *Historias locales / diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo*. Madrid: Akal.
- Mouffe, Ch. (1993). *El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, democracia radical*. Barcelona: Editorial Paidós.
- Múnera, L. (2005). Poder: trayectorias teóricas de un concepto. *Coloquio poder y migraciones*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Murcia, G. et ál. (2010). *Cambios multi-temporales de los bosques y otras coberturas de la Amazonía colombiana, a escala 1:100.000, en el período 2002 al 2007*. Bogotá: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi).
- Nazarea, V. (1999). *Ethnoecology: situated knowledge/located lives*. Tucson, AZ: University of Arizona Press.
- Ocampo, L. F. (2005). *De lo regional a lo territorial*. Resumen de la ponencia presentada en el VI Encuentro de Postgrados Iberoamericanos sobre Desarrollo y Políticas Territoriales: Construyendo Espacios para la Colaboración Regional, Toluca, México.
- Ochoa, G.; Zárate, C. & Word, A. (2001). *Análisis local de flujos de materia. Puerto Nariño, Amazonas*. Colombia: Universidad Nacional, Imani.
- Offe, C. (1998). *Partidos políticos y nuevos movimientos sociales*. Madrid: Sistema.

Palacio Castañeda, G. (2007). Amazonía: complejidad, imaginarios y opciones de futuro. En G. Palacio Castañeda & V. Nieto (eds.), *Amazonía desde dentro* (pp. 11-22). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia (sede Amazonía).

Peet, R. (2002). *Geographies of Policy Formation: Hegemony, Discourse and the Conquest of Practicality*. Paper for the Geographies of Global Economic Change Conference. Worcester: Clark University.

Plan Departamental de Desarrollo. Putumayo Solidario y Competitivo (2012-2015). Recuperado de <http://www.putumayo.gov.co/plan-de-desarrollo.html>

Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS) para la región del área de influencia de la variante San Francisco-Mocoa (s. f.). Documento de trabajo suministrado por Amazon Conservation Team Colombia.

PNUD. (2011). Colombia rural: Razones para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Bogotá: INDH-PNUD.

Puyana Mutis, A. M. (2010). Burocracias y comunidades indígenas en la Amazonía global colombiana. En G. Palacio Castañeda (ed.), *Ecología política de la Amazonía* (pp. 99-121). Bogotá: Ilsa, Universidad Nacional de Colombia (sede Amazonía), Ecofondo.

Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En E. Lander (comp.), *Colonialidad del saber, eurocentrismo y ciencias sociales* (pp. 201-246). Buenos Aires: Clacso-Unesco.

Revista *Semana* (2011, 4 de octubre). *Carretera San Francisco-Mocoa, a revisión del BID por reclamos de indígenas*. Recuperado de <http://www.semana.com/nacion/carretera-san-franciscocomocoa-revision-del-bid-reclamos-indigenas/165244-3.aspx>

Rhoades, R. E. (ed.) (2006). *Development with identity: Community, culture and sustainability in the Andes*. Nueva York, NY: Cabi Publishers.

Rivera Páez, M. V. & Bermúdez Vélez, N. (2005). *Tejiendo relatos: aprendizajes metodológicos para la construcción intercultural de alternativas al desarrollo convencional en territorios amazónicos*. Bogotá: Universidad de los Andes, Cider.

Rodríguez, N. (s. f.). *Territorios indios y negros, sustento de los megaproyectos en América Latina. Orientación a la praxis*. Recuperado de http://www.nacionmulticultural.unam.mx/Portal/Central/EDITORIAL/pdfs/09-26-terri_indi_negro.pdf

- Rosas, D. (2007). El dinero aguas arriba en el Mirití-Paraná: cuestión de líderes. En V. Nieto & G. Palacio (eds.), *Amazonía desde adentro: aportes a la investigación de la Amazonía colombiana. Imani Mundo II*. Bogotá: Unibiblos.
- Said, E. (1990). *Orientalismo*. Madrid: Libertarias.
- Sánchez Calderón, F. V. (2008). Elementos para una geopolítica de los megaproyectos de infraestructura en América Latina y Colombia. *Revista Colombiana de Geografía*, 17, 7-21.
- Santos, B. de S. (2001). *Los nuevos movimientos sociales*. Recuperado de <http://www.winisisonline.com.ar/tea/info/TEAO578.PDF>
- Santos, B. de S. (2010). *Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del sur*. La Paz: Plural Editores.
- Santos Granero, F. (1996). Hacia una antropología de lo contemporáneo en la Amazonía indígena. En *Globalización y cambio en la Amazonía indígena* (pp. 8-43). Quito: Flacso, Ediciones Abya-Yala.
- Santos, M. (2004). *Por otra globalización: del pensamiento único a la conciencia universal*. Bogotá: Convenio Andrés Bello.
- Scott, J. (2000). *Los dominados y el arte de la resistencia*. Londres: Yale University.
- Sen, A. (1985). Well-being, agency and freedom: The Dewey Lectures 1984. *The Journal of Philosophy*, 82 (4), 169-221.
- Sen, A. (2006). *Identity and violence. The illusion of destiny*. Nueva York, NY: W. W. Norton.
- Serje, M. (ed.) (2010). *Desarrollo y conflicto. Territorios, recursos y paisajes en la historia oculta de proyectos y programas*. Bogotá: Uniandes.
- Serje, M. (2011). *El revés de la nación. Territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie*. Bogotá: Uniandes.
- Silverman, D. (2005). *Doing qualitative research. A practical handbook*. Londres: Sage.
- Soja, E. W. (1989). *Postmodern geographies. The reassertion of space in critical social theory*. Londres & Nueva York, NY: Verso.
- Spivak, G. C. (1992). Can the subaltern speak? En P. Williams & L. Chrisman (eds.), *Colonial discourse and post-colonial theory* (pp. 66-111). Nueva York, NY: Columbia University Press.

- Stiglitz, J. (2000). *El malestar en la globalización*. Madrid: Santillana.
- Tenjo, M. J. (2011, marzo). Carretera San Francisco-Mocoa: demandas sociales y ambientales aún no resueltas. *Boletín Mensual Biceca*, 24.
- Thomas, P. (2006). Modernity as “passive revolution”: Gramsci and the fundamental concepts of historical materialism. *Journal of the Canadian Historical Association / Revue de la Société Historique du Canada*, 17, (2), 61-78.
- Torring, J. (1999). *New theories of discourse: Laclau, Mouffe and Žižek*. Oxford: Blackwell.
- Touraine, A. (1992). *Crítica a la modernidad*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Trujillo, C. (2007, septiembre). *The effects of markets on the use of tropical rain forest: Land management and market integration by the indigenous inhabitants of the Amazons River*. 4th. Congress of the Latin-American and Caribbean Environmental Economic Program, Italca, Chile.
- Ulloa, A. (2001). El nativo ecológico: movimientos indígenas y medio ambiente en Colombia. En M. Archila & M. Pardo (eds.) (2001). *Movimientos sociales, Estado y democracia en Colombia*. Bogotá: Icanh, CES, Universidad Nacional.
- Ulloa, A. (2003). *The ecological native: indigenous peoples' movement and eco-governmentality in Colombia*. Recuperado de <http://lasa.international.pitt.edu/Lasa2003/UlloaAstrid.pdf>
- Ulloa, A. (2005). *The ecological native: Indigenous peoples' movement and eco-governmentality in Colombia*. Nueva York, NY: Routledge.
- Unodc. (2013). Colombia. Monitoreo de Cultivos de Coca 2012. Recuperado de http://www.odc.gov.co/docs/publicaciones_nacionales/Censo%20de%20cultivos%20de%20coca%202012.pdf
- Van Deth, J. W. (2001). *Studying political participation: Towards a theory of everything?* Mannheim: University of Mannheim. Recuperado de http://www.academia.edu/2233354/STUDYING_POLITICAL_PARTICIPATION_TOWARDS_A_THEORY_OF_EVERYTHING
- Varese, S. (1996). *Pueblos indios, soberanía y globalismo*. Quito: Ediciones Abya-Yala.

Wallerstein, I. (1974). *The modern world system: Capitalist agriculture and the origins of the European world economy in the sixteenth century*. New York: Academic Press.

Walsh, C. (2007). Dossier Actualidades: lo afro en América Andina: reflexiones en torno a luchas actuales de (in)visibilidad, (re)existencia y pensamiento. *Journal of Latin American and Caribbean Anthropology*, 12 (1), 200-212.

Walsh, C. (2010). *Movimientos sociales afro y políticas de identidad en Colombia y Ecuador*. Bogotá: Convenio Andrés Bello.

WWF & Ilsa (2008). *Síntesis proyecto Pasto-Mocoa*. Documento entregado a Amazon Conservation Team Colombia.

Zárate, C. (2002). Los condicionantes sociales, políticos e institucionales del ordenamiento ambiental de la Amazonia. En T. R. Defler & P. A. Palacios (eds.), *Zonificación ambiental para el ordenamiento territorial. Libro de memorias*. Bogotá: Instituto Amazónico de Investigaciones (Imani) & Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia.

ANEXO 1

PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Entrevista a profundidad / Historia de vida: relatos no estructurados de autoridades tradicionales de las comunidades indígenas, a partir de elementos que se relacionan con su pasado. Las siguientes son las preguntas que permiten iniciar las entrevistas:

- 1) Pasado: ¿Cómo llegan las comunidades indígenas a ese territorio? ¿Cómo han cambiado las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas?;
- 2) Presente: ¿Cómo es la vida indígena en el presente? ¿Qué cambios se han dado en las comunidades indígenas relacionados con la construcción de la variante San Francisco-Mocoa?; y
- 3) Futuro: ¿Cómo será el futuro con la variante San Francisco-Mocoa?, ¿Cómo se imagina el futuro indígena? El tiempo para dicha actividad no estuvo especificado. Se necesitó de una grabadora de voz.

Entrevistas semiestructuradas: preguntas preestablecidas a autoridades políticas indígenas y funcionarios gubernamentales. El tiempo para dicha actividad no estuvo especificado. Se necesitó de una grabadora de voz.

Discusión en grupos focales (mapeo cultural o cartografía social): a partir de preguntas y discusiones generadas entre líderes y jóvenes de ambas comunidades indígenas, se construyeron tres mapas: 1) mapa del territorio tradicional indígena inga-kamëntza (23 de marzo del 2013), 2) mapa de los conflictos territoriales actuales en el territorio indígena (25 de marzo del 2013) y 3) mapa del desarrollo deseado (25 de marzo del 2013). El tiempo para estas actividades fue de un día y medio, y se usaron mapas base, papel de calco, plástico transparente, marcadores indelebles de diferentes colores y cinta pegante. Estos grupos focales se llevaron a cabo en el cabildo indígena de San Pedro (Colón, Putumayo).

ANEXO 2

ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS A AUTORIDADES POLÍTICAS Y LÍDERES DE COMUNIDADES INDÍGENAS

1. ¿Cómo fue el proceso de identificación de la necesidad de construcción de la variante San Francisco-Mocoa? Recuento general de la iniciativa según la posición de la persona entrevistada.
2. ¿Cuáles son los aspectos negativos y positivos de la construcción de la variante San Francisco-Mocoa?
3. ¿Cómo se relaciona la construcción de esta variante con el desarrollo económico del territorio?
4. ¿Cómo se relaciona la construcción de esta variante con el desarrollo humano/social del territorio?
5. ¿Cómo se han organizado las comunidades indígenas en torno a una posición común hacia la construcción de la variante San Francisco-Mocoa?
6. ¿Quiénes han liderado el proceso?
7. ¿Qué tan unidas han estado las comunidades indígenas en torno al proceso?
8. ¿Con cuáles recursos han contado para el desarrollo del proceso?
9. ¿De cuáles organizaciones gubernamentales y no gubernamentales han recibido apoyo?

10. ¿Con qué otros grupos sociales han desarrollado alianzas estratégicas con respecto a su posición sobre la variante San Francisco-Mocoa?
11. ¿Cuáles acciones jurídicas y de participación política se han adelantado para contrarrestar la construcción de la variante?
12. ¿En cuáles escenarios de negociación han participado y cómo ha sido este proceso?
13. Desde su posición, ¿qué incidencia han tenido las acciones jurídicas y políticas con relación a la forma como se va a construir la variante San Francisco-Mocoa y a los beneficios que van a obtener de esta?
14. ¿Cómo se imagina el futuro de este territorio?

ANEXO 3

DISCUSIÓN EN GRUPOS FOCALES

Elaboración del mapa del territorio tradicional indígena inga-kamëntza (23 de marzo del 2013). Se expuso el mapa base para la actividad: un mapa del territorio del año 1500 en el cual se exponen los asentamientos inga y kamëntza, las rutas de comunicación, la antigua laguna, los ríos y la garganta de Balsayaco. Se establecieron los criterios para la elaboración de la cartografía social y se identificaron los referentes de las comunidades indígenas con nombres propios —el territorio ancestral, sin límites “políticos”, con sus caminos tradicionales, ríos principales, quebradas y cabildos, y los lugares sagrados, como el páramo (montañas), la laguna (círculo), los salados (la danta), los cementerios (vasijas), las plantas sagradas (árboles) y las aguas termales (vasija de agua caliente)—. En esta actividad participaron 15 personas entre 20 y 60 años.

Elaboración del mapa de los conflictos territoriales actuales en el territorio indígena (25 de marzo del 2013). Sobre un mapa político base del territorio, se identificaron los conflictos actuales y cómo afectan estos el futuro del territorio, por ejemplo la falta de titulación del territorio como resguardo indígena, los conflictos territoriales con colonos, los problemas de saneamiento básico y tratamiento de aguas residuales, la construcción y pavimentación de las vías (problema histórico), la construcción de la variante San Francisco-Mocoa y las variantes subsiguientes, los problemas ambientales que estas obras traen consigo, la tensión urbana y el crecimiento de la población (posibilidad de que las ciudades se vuelvan ciudades satélite), los procesos

de extracción de minerales como el oro y de materiales de arrastre, la ampliación de la frontera agrícola sobre el área montañosa, la administración privada de los bosques y ríos, y el deterioro cultural de las comunidades indígenas —pérdida de chagras y plantas nativas, ampliación de monocultivos y uso de químicos en el territorio—. En esta actividad participaron 7 jóvenes entre los 20 y 30 años, representantes de 5 de los 6 cabildos presentes en el territorio (San Andrés, Santiago, San Pedro, Colón y Sibundoy), y un taita indígena de aproximadamente 55 años.

Elaboración de un mapa del *desarrollo deseado* (25 de marzo de 2013). Teniendo en cuenta que en el anterior mapa los participantes identificaron los conflictos actuales y los proyectaron hacia el futuro cercano, en este mapa se identificaron los elementos claves en términos de desarrollo o de visión de futuro indígena. Se representaron las respuestas a preguntas tales como: ¿Dónde estaría ubicada la población? ¿Qué territorios estarían conservados? ¿Cómo estarían conservados los ríos? ¿Por dónde estarían los bosques? ¿Se mantendrían los lugares sagrados? ¿Qué actividades económicas estarían vigentes? ¿Dónde estarían ubicadas? ¿Qué otros elementos deberían estar presentes en el territorio? Se identificaron los siguientes elementos en el mapa: 1) mantenimiento de ríos a partir de la reforestación de plantas nativas; 2) acueductos y alcantarillados propios en administración y diseño, necesidad de electricidad en el territorio; 3) centros de salud integral y casas de sanación (se resaltó el hecho de que son sagrados, deben estar alejados y ser también instituciones de formación); 4) escuelas y colegios bilingües en cada asentamiento indígena; 5) rutas de comunicación, las actuales pero mejoradas; 6) la chagra como la totalidad del territorio (reconociéndose como un “lugar de conocimiento”), cultivos cerca de los asentamientos; 7) centros culturales y de formación para mujeres; 8) universidad —universalidad— y centros de investigación propia (se resaltó la importancia de la biotecnología, el uso de la tecnología actual para beneficio propio); 8) red de tejido de turismo comunitario; 9) asociación de autoridades del valle del Sibundoy; 10) hogares infantiles; 11) cabildos indígenas (o guardia

indígena, aunque se reconoce que esto no es algo propio), entre otros elementos. En esta actividad participaron 7 jóvenes entre los 20 y los 30 años (5 mujeres), representantes de 5 de los 6 cabildos presentes en el territorio (San Andrés, Santiago, San Pedro, Colón y Sibundoy).

Construcción de una maqueta del territorio (25 de marzo del 2013). Se hizo una exposición de la metodología, construyendo colectivamente la parte plana y el anillo montañoso del valle del Sibundoy. Los participantes identificaron los relieves —las partes planas, menos pendientes y pendientes, así como los cañones que crean los ríos— en el territorio, y las partes por donde han transitado. En esta actividad participaron 7 jóvenes entre los 20 y 30 años, representantes de 5 de los 6 cabildos presentes en el territorio (San Andrés, Santiago, San Pedro, Colón y Sibundoy), y un taita indígena de aproximadamente 55 años.



Esta publicación se editó en el 2015, 35 años después de que el Comité Ejecutivo de la Universidad de los Andes, en el Acta del 13 de febrero de 1980, aprobara la creación de Ediciones Uniandes. Han sido 35 años de sostenida producción editorial de títulos de carácter científico, artístico y cultural, en los que hemos pasado de las galeradas y las pruebas azules a la impresión digital y el libro electrónico.